

Del Caracazo a la Mane

Dos décadas de protestas y movimientos populares en los países andinos (1989-2011)

Alexander Gamba Trimiño



Del Caracazo a la Mane

Dos décadas de protestas y
movimientos populares en los
países andinos (1989-2011)

Del Caracazo a la Mane

Dos décadas de protestas y
movimientos populares en los
países andinos (1989-2011)

Alexander Gamba Trimiño



Gamba Trimiño, Alexander

Del Caracazo a la Mane: Dos décadas de protestas y movimientos populares en los países andinos (1989-2011) / Alexander Gamba Trimiño, Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2023.

124 páginas; tabla

Incluye referencias bibliográficas (páginas 105-116) e índice de autor, analítico.

ISBN: 978-958-782-580-0

E-ISBN: 978-958-782-581-7

1. Movimientos de protesta 2 Movimientos indígenas -- América Latina 3. Democratización 4. Historia social -- América Latina 5. Política social 6. 7. Comunidades indígenas. I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD 303.4

CO-BoUST



© Alexander Gamba Trimiño, autor, 2023

© Universidad Santo Tomás, 2023

Ediciones USTA

Bogotá, D.C., Colombia

Carrera 9 n.º 51-11

Teléfono: (+571) 587 8797, ext. 2991

editorial@usta.edu.co

<http://ediciones.usta.edu.co>

Corrección de estilo: Lorena Castro Castro

Diagramación y montaje de cubierta: Julián Hernández - Taller de diseño

Fotografía de cubierta: Andres Camilo Fernández Jaimes

Hecho el depósito que establece la ley

ISBN: 978-958-782-580-0

E-ISBN: 978-958-782-581-7

Primera edición, marzo de 2023

Esta obra tiene una versión de acceso abierto disponible en el Repositorio Institucional de la Universidad Santo Tomás: <https://doi.org/10.15332/i.lib.2023.00347>

Universidad Santo Tomás

Vigilada MinEducación

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 3645 del 6 de agosto de 1965, MinJusticia

Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus: Resolución 014525 del 28 de julio de 2022, 8 años, MinEducación

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización expresa del titular de los derechos

Contenido

AGRADECIMIENTOS	13
PRÓLOGO	15
<i>Santiago Ortiz Crespo</i>	
INTRODUCCIÓN	19
Abordaje teórico	20
Estructura del libro	24
EL CONSENSO DE LAS ÉLITES ANDINAS: NEOLIBERALISMO Y DEMOCRACIAS RESTRINGIDAS	27
Bolivia: de la democracia pactada y neoliberal al gobierno del MAS	29
Venezuela: del Pacto de Punto Fijo y el paquetazo al proceso bolivariano de Chávez	31
Perú: ascenso y caída de Fujimori e implementación del neoliberalismo	33
Colombia: de la apertura política y económica de la Constitución de 1991 al desmonte del bipartidismo y el auge del uribismo	36
Ecuador: de la inestabilidad política y económica al ascenso de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana	40
LAS PROTESTAS CONTRA EL NEOLIBERALISMO	43
El Caracazo	45
El levantamiento contra la Ley Agraria en Ecuador	46
La Guerra del agua	47
El Arequipazo	49
La Guerra del gas	51
El levantamiento contra el TLC	53

El Baguazo	54
La Mane: la movilización estudiantil universitaria contra la reforma a la Ley 30	56
LAS PROTESTAS POR LA DEMOCRATIZACIÓN	61
El 5 de febrero de 1997	63
El levantamiento del 21 de enero de 2000	65
La Marcha de los Cuatro Suyos	67
La Batalla de Venezuela	69
La Rebelión de los forajidos	71
La Minga de resistencia social y comunitaria	73
LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS	77
El Movimiento Indígena Ecuatoriano	79
El movimiento indígena y popular en Bolivia	84
El movimiento indígena del Cauca, Colombia	90
CONCLUSIONES: LA POLÍTICA DE LA CALLE Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS PAÍSES ANDINOS	101
REFERENCIAS	105
Bibliografía consultada	112
SOBRE EL AUTOR	117
ÍNDICE ANALÍTICO	119

Lista de siglas, acrónimos y abreviaturas

AD	Acción Democrática (Venezuela)
ADN	Acción Democrática Nacionalista (Bolivia)
APRA	Partido Aprista Peruano
CAAP	Centro Andino de Acción Popular (Ecuador)
CD	Coordinadora Democrática (Venezuela)
CERES	Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Bolivia)
Cinep	Centro de Investigación y Educación Popular (Colombia)
CLACSO	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
COB	Central Obrera Boliviana
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONEPA	Conciencia de Patria (Bolivia)
COPEI	Comité de Organización Política Electoral Independiente (Venezuela)
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca (Colombia)
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CTV	Confederación de Trabajadores de Venezuela
DPP	Defensoría del Pueblo del Perú
ECUARUNARI	Confederación de los Pueblos y Nacionalidades Kichua del Ecuador
ELN	Ejército de Liberación Nacional (Colombia)
EPL	Ejército Popular de Liberación (Colombia)
Farc-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo

Fedecámaras	Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Venezuela)
FMI	Fondo Monetario Internacional
IU	Izquierda Unida (Perú)
Mane	Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Colombia)
MAQLM	Movimiento Armado Quintín Lame (Colombia)
MAS	Movimiento al Socialismo (Bolivia)
MIE	Movimiento Indígena Ecuatoriano
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivia)
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario (Bolivia)
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
PDA	Polo Democrático Alternativo (Colombia)
PDVSA	Petróleos de Venezuela S. A.
PROVEA	Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
TLC	Tratado de libre comercio
UCS	Unidad Cívica Solidaridad (Bolivia)
UP	Unión Patriótica (Colombia)

*Este libro es para ti, hija mía, tiene casi tu edad y su desenlace está
conectado con nuestras vidas: su gestación se dio en México y su
crecimiento se ha dado en la ciudad de Bogotá.*

*Lo empecé a escribir recién naciste, en la Ciudad de México, en las
frías noches del enero de Tlalpan. Mientras dormías en tus primeros
meses de vida dediqué mis noches a escribir, además de estar
pendiente de tus sueños; lo culminé en las frías noches bogotanas,
mientras dormías después de leer tus libros e historias.*

*Te lo dedico porque eres la fuerza de mi vida, la esperanza de un
nuevo amanecer, porque tu ser y tu personalidad se entrelazan
con muchas de las historias que acá se cuentan. Este libro es una
historia de la dignidad y de la vida de los pueblos andinos, dignidad
y vida que emanan de ti.*

*Con todo mi cariño y admiración, mi bella Abril,
hasta nuestra victoria.*

Agradecimientos

Este libro es fruto de la investigación de la tesis de maestría titulada *Sociología de los movimientos sociales en la Región Andina*, en el marco del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; dicha tesis se presentó en 2014 y recibió una mención meritoria.

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Gobierno mexicano, el cual a través de una beca de excelencia académica hizo que esta investigación fuese posible.

También debo agradecer a la Universidad Santo Tomás, que a través del proyecto de investigación Fodein n.º 2276001-FO “Hitos sociohistóricos de la movilización social y sus escenarios de negociación en Colombia”, me permitió hacer la edición de esta investigación para convertirla en un libro. Entre los cambios que hice, suprimí el marco teórico, el cual ha sido publicado por la *Revista Campos en Ciencias Sociales* (2022); así mismo, se modificó el lenguaje y gran parte del estilo para hacerlo accesible a un público más amplio.

Agradezco a Miguel Urra, decano de la Facultad de Sociología de la USTA en 2021, cuando me animó a transformar en un libro una tesis que estaba bajo el dictamen de los ratones.

Por último, debo agradecer a mi compañera Laura de la Rosa por su paciencia, compañerismo, lealtad y por su gran confianza en mí.

Prólogo

Es importante reflexionar sobre las dos décadas de resistencia, impugnación y ofensiva de los movimientos sociales frente al régimen que surgió en los países andinos, fruto de la doble transición: el retorno a la democracia liberal y el inicio del neoliberalismo. Esa es la reflexión que presenta Alexander Gamba en este libro, fruto de su investigación de maestría en la UNAM.

El autor se pregunta sobre los actores sociales, su organización y repertorios, así como por el proceso sociopolítico que enmarcan los movimientos en el periodo 1989-2011. El autor escoge para el análisis movilizaciones emblemáticas que se realizan en los cinco países andinos: el Caracazo de los barrios populares en Venezuela, los levantamientos indígenas en Ecuador, las guerras del agua y del gas en Bolivia, las luchas territoriales en Perú, así como las acciones de indígenas y estudiantes en Colombia, entre otras muchas movilizaciones significativas. Diferencia sus demandas porque cuestionan las políticas neoliberales, por su contenido democrático y las reivindicaciones de carácter étnico.

Todo este análisis lo realiza el autor en el contexto de los países, caracterizados por una ruptura entre las élites y una crisis de los regímenes políticos, que facilitan el ascenso de los movimientos, la convocatoria a asambleas constituyentes y en el caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela, la instalación de gobiernos reformistas, mientras en otros, como Colombia y Perú, si bien las élites son afectadas, logran reestablecer el orden. Se realiza un análisis comparativo mediante el cual se encuentran algunos elementos semejantes, pero también diferencias en cuanto a su resultado, signados por el liderazgo progresista o por el liderazgo autoritario.

El autor construye un marco de análisis a partir de tres conceptos básicos: movimientos populares, protestas y estructura de oportunidades políticas. Se inspira en la literatura latinoamericana de autores como Leopoldo Múnera, Margarita López Maya y Fernando Calderón, para quienes los conflictos de clase se entretajan con conflictos de carácter étnico, cultural o de género, fruto de la desigualdad y las exclusiones existentes en nuestros países. También utiliza los aportes de la teoría del proceso político de autores como Tilly y Tarrow, que vinculan los movimientos con el sistema político y la estructura de oportunidades, es decir, los factores que amplían o restringen las posibilidades de los actores subalternos.

El autor diferencia, siguiendo a varios autores latinoamericanos, cuatro momentos de la lucha social: el primero es el que visibiliza el descontento con el neoliberalismo y reclama políticas sociales y laborales del Estado; el segundo momento, situado a finales del siglo pasado, se caracteriza por la resistencia de los trabajadores; el tercero, que abarca hasta el primer lustro de este siglo, es una fase de impugnación y participación política, que logra cambios significativos en la institucionalidad; y un cuarto momento, en el que actores enmarcados en contextos autoritarios retoman la movilización.

Hay varios elementos clave en el análisis: al escoger y comparar movilizaciones de carácter emblemático, Gamba establece acontecimientos en donde la confluencia de actores y la emergencia popular y étnica inciden en el cambio de las condiciones políticas hasta el punto de producir cambios significativos en los regímenes políticos. No se trata solo de un incremento gradual de las luchas sociales, sino de procesos masivos que articulan luchas en las calles y luchas institucionales que rompen el esquema de dominio de las élites.

Un segundo factor importante tiene que ver con la diversidad de actores que confluyen. Se trata de un periodo en donde el carácter clasista se hibrida con otras identidades nacionales, urbanas, étnicas, de género o estudiantiles y en donde aparecen multitudes que desbordan el marco organizativo de los actores tradicionales. Se deja atrás el régimen desarrollista con su esquema clasista y se presentan luchas donde los trabajadores se unen con fronteras difusas con los pobladores, las mujeres, los jóvenes y los indígenas, los cuales protagonizan las luchas.

Surgen actores que se involucran en conflictos de larga duración, como el étnico, y actores que toman parte en conflictos de mediana duración, como los que provienen de la globalización neoliberal.

Un tercer elemento significativo es la ampliación del horizonte programático. No se trata solo de una lucha económica o reivindicativa, pues los nuevos movimientos generan una ruptura cognitiva que abre nuevos campos de conflictividad en los temas territoriales, ambientales, democráticos, educativos. Esta multidimensionalidad es asumida por los marcos de interpretación de los actores, que afirman su identidad, y logran expresiones de gran capacidad simbólica, las cuales interpelan las nociones legitimadoras de las élites.

Un cuarto elemento que destaca el autor es cómo la quiebra del pacto de los de arriba refuerza la potencialidad de incidencia de los movimientos, con lo cual logra inclusive modificar las estructuras estatales y las políticas públicas. Temas clave como la nacionalización de los recursos naturales, las políticas de inclusión o la modificación de modelo de desarrollo son posibles por las alianzas que logran los movimientos, mediante las cuales se ha frenado en algunos países el dominio neoliberal y se ha afirmado una nueva institucionalidad sustentada en nuevas constituciones.

Hay otros elementos interesantes del trabajo de Alexander Gamba como la articulación entre luchas regionales y nacionales, el papel clave de los movimientos indígenas o la irrupción de los gobiernos progresistas. Sin embargo, es importante señalar algunos aspectos que deberían ser considerados por el autor para nuevas investigaciones.

Si bien el autor compara los cinco países, parecería que hace falta profundizar en las diferencias y limitaciones. Un ejemplo de ello es la consistencia de procesos como el boliviano, que logra mantener la hegemonía del MAS con base en la confluencia de acumulados nacionalistas, étnicos y clasistas, y el ecuatoriano, donde los postulados progresistas no logran articularse con lo étnico, lo cual origina conflictos en el bloque que coincidió en la Asamblea Constituyente.

En ello incide otro factor importante: la necesidad de un enfoque de larga duración en los procesos andinos, pues la consistencia y trayectoria de los movimientos sociales no se explican si no se toma en cuenta cómo se resolvieron o no los conflictos del periodo desarrollista anterior.

La presencia de la violencia en Perú y en Colombia son esenciales para explicar la afirmación del neoliberalismo y el autoritarismo en esos dos países. La debilidad de la democracia se relaciona con la modalidad de solución de los conflictos agrarios y nacionales en el periodo previo.

Otra dimensión que se podría considerar es la de los procesos estructurales en la región, pues es necesario explicar esa porosa frontera entre las clases y los estratos sociales, así como fenómenos como la migración, la urbanización y la diferenciación social. La extensión del empleo precario y la informalidad pueden explicar el surgimiento de muchedumbres que se convierten en actores centrales de acontecimientos como el Caracazo, la Guerra del gas o la Rebelión de los forajidos, o la incorporación de nuevas generaciones sin futuro, que no tienen educación ni trabajo, en la primera fila de las movilizaciones populares en la región.

Un elemento que debe ser considerado y profundizado es el contexto internacional. Aunque el autor señala la presencia de políticas neoliberales en el marco de la globalización, es importante examinar con detenimiento cómo los cambios geopolíticos, los nuevos patrones de acumulación del capital, la financiarización de la economía y la hegemonía unipolar norteamericana inciden en el periodo estudiado en la región.

Si bien el autor subraya la crisis del pacto de las élites, sería interesante que el autor precise el carácter de esa crisis: ¿se trata de crisis hegemónicas, crisis de representación, crisis orgánicas? También es importante que precise la incidencia de cada uno de los factores de la estructura de oportunidades, pues no queda clara la relación de las diversas variables en los movimientos.

Estas observaciones no desmerecen un trabajo valioso que explica la ola de movilización popular en la región andina, basado en un modelo analítico que retoma el aporte de destacados autores de la propia región, sin dejar de dialogar con los autores de la corriente del conflicto político.

SANTIAGO ORTIZ CRESPO

*Profesor honorífico y emérito, Flacso Ecuador
Doctor en Ciencias Sociales, Flacso Ecuador*

Introducción

El 27 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas miles de personas salieron a las calles a oponerse al alza en los costos del transporte urbano, a lo largo de esta jornada las protestas se extendieron por toda Venezuela y la demanda se amplió al derrocamiento de las medidas económicas conocidas como el paquetazo, nombre que se le dio a un conjunto de reformas neoliberales. En el transcurso de los días esta jornada se convirtió en la mayor protesta popular en la historia reciente de Venezuela, la cual es un parteaguas del desarrollo político de este país (López Maya, 1999b) e inicia un ciclo de protestas contra las medidas del llamado modelo neoliberal, reivindicación que ha signado la historia reciente de la región andina.

Mientras en Venezuela los pobladores urbanos se tomaban las calles, en Ecuador en 1990 las montañas de los Andes vieron el despertar del movimiento indígena ecuatoriano para protagonizar el Levantamiento del Inti Raymi, movilización que se repitió con otros nombres en numerosas ocasiones en las siguientes décadas. El accionar de los indígenas ecuatorianos sería apenas el comienzo del auge de movimientos indígenas que también se presentaron en Bolivia y Colombia, lo que implicó un *sismo étnico*: aparecieron los *indios* como sujetos políticos, reivindicando su identidad étnica, ya no mimetizados en la campesina, como se les reconocía en décadas pasadas.

A la par de las protestas contra el modelo neoliberal y de los movimientos indígenas, hubo otras protestas que demandaban reformas políticas, cambios de gobierno y profundización de la democracia, tal es el caso del Perú cuando en el año 2000 se dio la Marcha de los Cuatro Suyos contra el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, que a la postre significaría su caída; en Venezuela en el 2002 millones de venezolanos salieron a las calles para derrocar un golpe militar que

se cometió contra el entonces presidente Hugo Chávez; en Ecuador ocurrieron movilizaciones contra gobiernos corruptos (como los de Abdalá Bucaram o Lucio Gutiérrez) y contra un sistema político que restringía a un nivel mínimo las posibilidades de participación política de los movimientos sociales.

Todas estas acciones colectivas se dieron en el marco de la crisis de los pactos de élites acordados en las transiciones a las democracias, desde las más antiguas, como las de Venezuela y Colombia desde mediados del siglo xx, hasta las más recientes en el último cuarto del siglo en Ecuador, Perú y Bolivia. A la par de la crisis de los pactos políticos de las élites, también se presenciaba la impugnación popular a las políticas de ajuste y austeridad conocidas como neoliberales, que al comienzo de 1990 eran las hegemónicas en toda la región. Para 2011 solamente Colombia y Perú mantenían este modelo económico, en tanto el pacto político de las élites había desaparecido en toda la región, en Bolivia, Ecuador y Venezuela con un giro hacia la izquierda, mientras que en Perú y Colombia hacia la derecha. En la región andina, en estas dos décadas el Estado perdió su capacidad de mediador social, los partidos políticos no sirvieron como instrumento para canalizar este descontento y la política de la calle se convirtió en el escenario prioritario para deliberar, incidir e intentar transformar el modelo económico y el político.

Abordaje teórico

En este libro se abordan las acciones colectivas que acontecieron en los países andinos entre los años 1989 y 2011, y se analiza el contexto político y económico en el que estas se enmarcaron. El objetivo que me tracé en esta investigación fue comprender los rasgos distintivos de estas acciones colectivas, identificando sus formas de accionar y las semejanzas que tenían entre sí. Las preguntas que busqué responder fueron: ¿qué pasó en estas acciones? ¿Quiénes las protagonizaron? ¿Cómo se expresaron? ¿Cuál fue el entorno sociopolítico en el cual se presentaron? ¿Cómo se organizaron?

Para responder estas preguntas me valí de un enfoque teórico conceptual que da cuenta de la acción colectiva, en particular en el estudio

de los movimientos y protestas sociales. De las diferentes tradiciones teóricas que existen sobre la acción colectiva escogí dos enfoques, el popular de tradición latinoamericana y el llamado proceso político de origen estadounidense; el primero se concentra en indagar en el tipo de actores que participan en las acciones colectivas y en la conflictividad social en la que se inscriben, mientras que el segundo prioriza las condiciones del contexto sociopolítico que posibilitan la aparición de los movimientos y las protestas.

El enfoque que aborda el estudio de la acción colectiva desde lo popular es una adaptación de la teoría del conflicto de clases, pero ampliando la visión de una clase elegida para el cambio, el proletariado e incluir una gama más amplia como campesinos, indígenas, pobladores urbano-populares y trabajadores (Baño, 1985; Guido Béjar y Fernández Reyes, 1990; Camacho y Menjívar, 1989/2005; Múnera, 1998).

Leopoldo Múnera (1998) defiende la utilidad del concepto de movimientos populares en América Latina dada la importancia que en la región aún tienen las desigualdades sociales y los conflictos clasistas. Para Múnera la clase si bien no explica toda la conflictividad social, es transversal a todas sus dimensiones, el enfoque de movimientos populares sirve para identificar que existen determinaciones de clase que se articulan a otras conflictividades. Esto en contraste con los llamados nuevos movimientos sociales (NMS), teoría que surge en Europa continental y se corresponde al intento de explicar los cambios de la acción colectiva luego del Mayo francés de 1968 pasando la página de las demandas por las condiciones materiales de existencia a uno en el que eje de la conflictividad se centra en las identidades.

Múnera (1998) emplea el concepto *movimiento popular* para explicar a aquellos que se expresan en oposición a un tipo de dominación o explotación, y que definen como oponente a las clases dominantes. Los movimientos populares estarían articulados en función de una lucha social contra un tipo de dominación, bien sea económica, cultural, étnica, de género o política, pero en el que es central el papel de la disputa de clase (explotación, nivel socioeconómico y distribución desigual de bienes sociales).

En cuanto al segundo enfoque, el del proceso político, es aquel que ubica a los movimientos sociales como parte del conflicto político (Tilly,

2007; Tarrow, 1997; McAdam, 1996). En la medida en que las élites se fracturan se abren espacios nuevos de participación en regímenes cerrados, lo cual crea oportunidades políticas para la acción. Para comprender esto, se precisa de un sentido histórico de la acción colectiva: sus estudios, a la par que están entrelazados con los problemas de la configuración de los Estados nacionales, con la violencia colectiva, con las huelgas en Europa, arrojan luces sobre el papel de los actores colectivos en el cambio de las sociedades, en ese tipo de estudios se han priorizado las formas de la acción colectiva y las frecuencias en que se presentan estas (Tilly, 1997).

De estos dos enfoques he seleccionado tres conceptos para el análisis: movimientos populares, protestas populares y estructura de oportunidades políticas. En relación con los movimientos populares, estos son un tipo de movimiento social cuyos actores centrales o bien pertenecen a las clases populares o abogan por las agendas de estas y, por ende, identifican a sus contradictores en una oposición clasista:

[...] podemos caracterizar al movimiento popular como un tipo particular de movimiento social, generado por el proceso de articulación de acciones y actores, colectivos e individuales, pertenecientes a las clases populares o reunidos en función de ellas, dirigido a controlar y orientar uno o varios campos sociales en conflicto con las clases y sectores dominantes, o con una parte de ellos. El papel nuclear de las clases en esta concepción del movimiento popular define el movimiento social en relación con los actores. (Múnera, 1998, p. 65)

La segunda categoría de análisis seleccionada es la de protestas populares, que se definen como:

[...] la acción disruptiva desarrollada por multitudes, grupos y/o actores de los sectores populares destinada a hacer público su desacuerdo o desavenencia con normas, instituciones, políticas, fuerzas, autoridades y/o condiciones sociales y políticas. El adjetivo popular, relativo a lo que en cada sociedad se entiende por pueblo, lo asumimos de una manera amplia incluyendo a todo el

universo social distinto a las clases dominantes, tanto a los pobres y marginales como a las capas medias. (López Maya, 2008, p. 100)

De esta definición se puede colegir un elemento característico de las protestas: la noción de visibilizarse en el espacio público, lo que hace alusión a que las protestas salen del ámbito de lo privado y se ponen en el espacio de la deliberación visible, lo cual plantea un lugar de enunciación, no siempre físico, en donde diferentes actores se expresan y confrontan, donde se hacen ver las ideas, los valores, los principios de estos actores (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2010, pp. 26-27).

Otro elemento central es el del tipo de actor: mientras en los movimientos populares las organizaciones son centrales, muchas de ellas con estructuras que tienen roles incluso dentro de la institucionalidad estatal, en las protestas aparecen las muchedumbres que se expresan en grandes eventos sin ser parte de estructuras organizativas previas. Muy vinculado al despertar de las muchedumbres, está el concepto de indignación colectiva, que viene del concepto de economía moral, que “contiene la idea de una noción legitimadora tras la acción directa de las multitudes, un código moral que está siendo violado por las autoridades” (López Maya, 2008, p. 100).

El tercer concepto es el de la estructura de oportunidad política, que pone el énfasis en las condiciones sociopolíticas que posibilitan la aparición y el desarrollo de una acción colectiva, esta hace alusión a los cambios estructurales o ideológicos del poder lo que posibilita que se den cambios en el sistema político, en las formas de poder, y ubica a los movimientos sociales como actores políticos o de transformación de la realidad política y, por ende, muestra que no dependen solo de sus esfuerzos organizativos o de la justeza de sus causas, sino de los momentos oportunos para establecer su acción (McAdam, 1996). Así, cuando se presenta una estructura de oportunidad política aparecen los ciclos de protesta, momento en el que aparecen nuevas acciones colectivas que aprovechan el espacio generado, se crean un sinnúmero de oportunidades que suelen generar una ola de participación de muchos individuos y actores sociales, además de los que habitualmente participan en estos escenarios.

El concepto de oportunidad política coloca el énfasis en los recursos externos al grupo —al contrario que el dinero o el poder—, que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o desorganizados. A este respecto, se puede considerar lo siguiente:

Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las élites y las autoridades. (Tarrow, 1997, p. 49)

Adicionalmente, “el problema de la acción colectiva es social, no individual. Los movimientos surgen cuando se amplían las oportunidades políticas, cuando se demuestra la existencia de aliados y cuando se pone de relieve la vulnerabilidad de los oponentes” (Tarrow, 1997, p. 58).

Estructura del libro

En el proceso investigativo el primer paso fue analizar el contexto sociopolítico de los cinco países, identificando sus confluencias y diferencias. A partir de ello, encontré que en el periodo hubo unos cambios profundos en los pactos de representación política en los cinco países, así mismo, una disputa por la implementación del modelo neoliberal.

El segundo paso fue reconstruir cronológicamente las movilizaciones más significativas de estas dos décadas, para esto identifiqué sus demandas, sus adversarios, los actores protagónicos y las acciones concretas que emprendieron. Ya en el análisis de los resultados encontré que este tipo de acciones tenía unas confluencias en sus demandas, es decir, en las peticiones, quejas e inconformidades que se presentaban frente a algún tipo de adversario, de las múltiples demandas que se expresan en un movimiento o en unas protestas se destacaron tres: antineoliberales, por la democratización y las indígenas.

Las demandas antineoliberales son aquellas que se dan por la reproducción social, por las condiciones materiales, y las cuestiones como salud, educación, empleo, lo que hace referencia al umbral de vida en general (Calderón, 2012, p. 155). Las protestas por la democratización son aquellas que luchan por cambios institucionales en la

gestión estatal, se refieren al funcionamiento de las instituciones estatales, a las formas de gobierno (como la democracia), a la legitimidad de autoridades públicas, y remite esencialmente al conjunto de instituciones, normas y personal del aparato de estado (Calderón, 2012, p. 186). Las indígenas hacen alusión a las demandas identitarias, la construcción de subjetividad colectiva, y abogan por el reconocimiento o protección de estos aspectos étnicos. En el proceso de análisis se identificó que estas no solo eran protestas, sino que se configuraban como movimientos populares.

En concordancia con lo anterior, el libro está organizado en cuatro capítulos, además de la presente introducción y las conclusiones. En el primero abordo el entorno sociopolítico de las movilizaciones y desarrollo dos de sus aspectos: la implantación del modelo neoliberal y los cambios en el sistema político y las formas del gobierno, en este se explica la estructura de oportunidad política que posibilitó las acciones colectivas que analizo a lo largo del texto. En el segundo y el tercer capítulo la unidad de análisis son las protestas populares, empiezo por aquellas que se enfrentaron al modelo neoliberal y continuo con las que lucharon por la democratización.

En el cuarto capítulo la unidad de análisis cambia y expongo los movimientos populares más relevantes de la época en la región andina: los indígenas. En este, a diferencia de los dos anteriores, no expongo las protestas sino los movimientos indígenas, por lo que me detengo en su historia y las estructuras de las organizaciones, otra diferencia con los capítulos anteriores es que en este me concentré solo en tres países: Ecuador, Bolivia y Colombia.

Para concluir esta introducción, espero que este libro sea un aporte a la sociología latinoamericana al menos por dos razones. La primera porque he buscado emplear referentes teóricos y conceptuales principalmente construidos desde Latinoamérica, esto porque si bien muchos de estos se inspiran en teorías de otros contextos, las adaptaciones que han hecho de las escuelas de los países europeos y de Estados Unidos son una forma de contextualizar el conocimiento, de enriquecer las teorías con el diálogo de las realidades latinoamericanas.

La segunda razón es la intencionalidad de emprender la investigación desde una perspectiva comparada. Soy un convencido de que los

mejores aportes que se han hecho desde las ciencias sociales latinoamericanas han surgido de este tipo de estudios. Las obras de Agustín Cueva, Sergio Bagú, los ensayos de historia comparada de Tulio Halperin, el estudio de las revoluciones inconclusas en Latinoamérica de Orlando Fals Borda, para citar solo algunas de las obras ya clásicas del continente, permitieron comprender a Latinoamérica como una experiencia histórica que tiene unos niveles de identidad política y de procesos sociales compartidos, comprensión a la cual espero contribuir.

El consenso de las élites andinas: neoliberalismo y democracias restringidas*

En el año de 1990 las élites del poder (empresarios, políticos y militares) de la región andina pontificaban sobre un único e irremediable camino para sus países: la implantación del modelo económico neoliberal, combinado con un pacto político de repartición del poder entre las élites del poder en el marco de una democracia liberal mínima; este fue el consenso reinante en los cinco países hasta comienzos de la década de 1990.

En cuanto al neoliberalismo su implantación implicó el desmonte de otro modelo, el desarrollista, el cual tenía sus antecedentes más remotos en la crisis de 1929, que provocó varias reformas en el manejo de la economía mundial y que en Latinoamérica se expresó en la política de sustitución de importaciones e industrialización. En el modelo desarrollista, el Estado desempeñaba un papel central en el fomento a la producción económica, la expansión de políticas sociales, el impulso al mercado interno y la protección de la producción nacional (Sader, 2009, pp. 65-67).

En la región andina el desarrollismo se impuso en diferentes momentos: en Venezuela desde 1958 con el retorno a la democracia electoral (Lander, 1994); en Colombia se asume desde 1957, también en el contexto de la transición democrática (Leal Buitrago, 1995a, pp. 21-62);

* Una versión modificada de este capítulo ya fue publicada, véase Gamba Trimiño (2013).

en Ecuador se implanta en 1972 con los gobiernos militares (Barrera, 2001a); en Perú en la década de los setenta, igualmente en el marco de una dictadura (Gonzáles, 2007); en Bolivia es una herencia de la revolución de 1952 (Conahan, Malloy y Wolpson, 1997). En el periodo comprendido entre 1985 y 1992 este modelo se desmonta en todos los países y se pasa al neoliberalismo.

En 1989 todos los países estaban en proceso de implantación del modelo neoliberal, que además de unas políticas económicas implicaba la reorganización del Estado y de su papel en la sociedad (Anderson, 2003). Si bien el Estado no desaparece en este modelo, se debe restringir a una tarea específica: ser el árbitro, no el jugador de la partida (Borón, 2003, p. 125); en consecuencia, el mercado se convierte en el principal regulador ya no solo de la vida económica sino también de la social, lo que implica desmontar varias de las funciones estatales. En la región andina la implantación del modelo neoliberal empezó en Bolivia en 1985; le siguieron Venezuela en 1989, Perú en 1990, Colombia en 1991 y Ecuador en 1992 (Conahan et ál., 1997; Lander, 1994; Sarmiento Anzola, 1995).

En cuanto a la democracia, el modelo que se implementó en los países andinos era el de la democracia electoral, que se caracteriza por ser una competencia entre élites para alternarse el poder, con garantías que posibilitasen la alternancia de estas en el ejecutivo y el legislativo (Schumpeter, 1996, p. 344), dejando de lado los derechos sociales y mecanismos más amplios de participación.

Agustín Cueva (1988) caracterizó estos pactos que se presentaron en Latinoamérica como pactos de las democracias restringidas, en los que las dictaduras militares no habían fracasado en sus objetivos de militarización de la sociedad, sino que encontraron en las transiciones unas “democracias” viables a sus intereses. Los militares se retiraron del poder, pero el proyecto autoritario siguió latente, las fuerzas armadas en muchas de las transiciones seguían “tutelando” la democracia. Cueva advirtió que mientras los militares siguieran teniendo poder más allá de los cuarteles y si no se emprendían reformas sociales que permitiesen a la ciudadanía participar más allá de las elecciones, se abrían dos caminos para las jóvenes democracias latinoamericanas: el retorno del autoritarismo, aún sin necesidad de los golpes militares, o el derrumbe de estos pactos de élites.

El presente capítulo aborda este pacto en cada uno de los países de la región andina, se explica y se analiza cómo se implementaron tanto el modelo neoliberal como el acuerdo político de alternancia de élites, cómo se dio la crisis de estos y, al final, los caminos que tomó cada país en relación con las vías planteada por Cueva.

Bolivia: de la democracia pactada y neoliberal al gobierno del MAS

A mediados de los ochenta Bolivia padecía una hiperinflación. En ese contexto, en el año 1985, se establece un acuerdo programático entre el histórico partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) para la nueva política económica. Dicho acuerdo quedó plasmado en el decreto supremo 21 060. Este programa de ajuste cumplía las recetas que se conocen como el Consenso de Washington, entre las cuales destacaban el congelamiento de sueldos oficiales, la liberación de precios, de bienes y servicios, la disolución de empresas públicas, la reducción del empleo público y la liberación de importaciones y exportaciones. La política económica fue refrendada por los diferentes partidos, los dos ya mencionados y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), lo que llevó a que se mantuviera a lo largo de dos décadas (Torrico, 2006). A la par que se establecía el acuerdo económico, se definió un pacto de gobernabilidad entre estos tres partidos conocido como *democracia pactada*. El acuerdo consistía en convertir en política de Estado las reformas a la economía, las cuales no tenían solo una motivación económica, sino que se traducían en un fuerte efecto político: el debilitamiento de la organización sindical más importante del país, la Central Obrera Boliviana (COB), para lo cual lo más efectivo fue el despido masivo de los obreros de las minas, la base social más fuerte de dicha central.

El pacto de élites requería de una mayoría en el parlamento, esto era lo que garantizaba el gobierno. La ley electoral boliviana preveía que sin una mayoría en las elecciones para presidente se requería que el poder Legislativo definiera la elección del ejecutivo, a lo que hay que añadir que la forma de elegir a los legisladores era a través de listas

cerradas, es decir, los electores votaban por el partido y este era el que realmente definía quiénes serían los representantes. Este sistema empezó a generar desacuerdos entre la triada partidista en el poder, así surgen dos partidos de centroderecha liderados por ricos empresarios, Conciencia de Patria (Condepa) y la Unidad Cívica Solidaridad (ucs), que se presentaban como alternativa; sin embargo, en el plazo de un par de años fueron absorbidos por la democracia pactada y terminaron haciendo alianzas con los otros tres partidos en disputa. Situación diferente fue la de las fuerzas políticas de origen popular: su suerte política empezó a cambiar a partir de la reforma electoral de 1997, que permitió que un número de congresistas fuese elegido de manera directa por los electores, lo que llevó a un grupo de organizaciones campesinas e indígenas a presentar a Evo Morales como candidato. Evo Morales llegó al congreso y desde allí desplegó una fuerte oposición al pacto político y al neoliberalismo. En 2002 los partidos tradicionales lo expulsaron del parlamento, lo cual tuvo un efecto contrario, y se proyectó como líder nacional; en ese mismo año y ya con su actual partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ocupó el segundo puesto en las elecciones presidenciales (Torrico, 2006). A la par, entre el año 2000 y 2005 se presentaron las mayores movilizaciones sociales en décadas en la historia de Bolivia, en las que se resaltan las llamadas Guerra del agua (2000) y Guerra del gas (2003), movimientos sociales en los que la ciudadanía en general tomó las calles, participó activamente y se convirtió en un actor político emergente.

En las elecciones de 2002 resultó electo Gonzalo Sánchez de Lozada, quien llegó al Gobierno con el apoyo de todos los partidos a excepción del MAS y otras fuerzas pequeñas de izquierda; fue destituido en 2003, lo cual dio pie a una crisis política que se evidenció en que entre 2003 y 2006 hubo en Bolivia cuatro presidentes, lo que desmoronó el acuerdo de las élites. Así, en 2005 Evo Morales fue elegido presidente, por primera vez con una mayoría que no precisaba que pasara por el poder legislativo.

Con la llegada de Morales a la presidencia se concreta el derrumbe del neoliberalismo y del sistema de partidos que regía desde la transición a la democracia, lo que trajo consigo otras contradicciones

expresadas en la aprobación de la nueva constitución política que da un viraje en el ordenamiento territorial, en el manejo de los recursos naturales y de las instancias de poder. Se presenta así un ascenso de las fuerzas sociales que tradicionalmente no habían participado en la política electoral y que se convierten en gobierno con el MAS. De esta manera, el escenario queda dividido en tres nuevos polos: el MAS, que representa el ideal de superación del neoliberalismo y la recuperación de la función social del Estado; por otro lado, el indianismo katarismo, que plantea la instauración de un país indígena que permita la superación del orden colonial y no solo del neoliberalismo y que se fue volviendo oposición al MAS; y, por último, el bloque neoliberal, que está representado por los sectores tradicionales de las clases políticas y empresariales, que tienen como eje de articulación la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estos tres bloques son los que copan el escenario político y los que determinan el nuevo panorama en Bolivia.

Venezuela: del Pacto de Punto Fijo y el paquetazo al proceso bolivariano de Chávez

En Venezuela la implantación del neoliberalismo difirió bastante de las que se emprendieron en Bolivia, dado que no se venía de una dictadura cercana sino de un largo acuerdo de gobernabilidad llamado Pacto de Punto Fijo, el cual firmaron en 1958 los partidos políticos Acción Democrática (AD) y el Partido Socialcristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y en el que no fueron incluidos ni el Partido Comunista Venezolano (PCV), ni el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (Atehortúa y Rojas, 2005). El acuerdo establecía una gobernabilidad compartida entre los partidos, así como un conjunto de medidas como la redistribución del excedente petrolero y una política de cooptación y corporativismo con gremios, particularmente con la organización del sector privado, la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), esta última dependiente del partido

AD (Lander, 1994). El Pacto de Punto Fijo pasó por tres etapas: la primera, de 1958 a 1974, que consolidó el esquema del régimen de coalición; la segunda, de 1974 a 1979, que produjo una gran bonanza petrolera, la cual redundó en un crecimiento constante de la economía venezolana y la mejora generalizada de las condiciones de vida; la tercera etapa, desde 1979, que se caracterizó por la caída de los precios del petróleo, presentó una crisis de la deuda, la asunción de las políticas del Fondo Monetario Internacional y el ingreso al neoliberalismo en 1989.

La elección de Carlos Andrés Pérez en 1989 vino con la promesa de salir de la crisis económica que se había desatado en la década de 1980; en ese contexto se esperaba un ambicioso plan que retomara las bases del Pacto de Punto Fijo, es decir, el desarrollismo y la distribución del excedente petrolero, pero apenas unos días después de asumir el gobierno Pérez volvió a la carta de intención con el FMI que se había firmado en 1987 y el 16 de febrero de 1989 presentó ante la ciudadanía venezolana el denominado paquete económico. Este anuncio de medidas desató el 27 de febrero la mayor insurrección urbana en la historia de Venezuela: el Caracazo.

A pesar de la oposición en las calles contra las medidas de ajuste, el gobierno de Pérez prosiguió con estas y buscó el apoyo para seguir con el plan de ajuste en la tecnocracia de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). En el periodo dicha empresa y sus cuadros técnicos —la denominada gerencia—, adquirieron gran poder y dejaron a la clase política marginada de las grandes decisiones. En ese contexto un sector disidente de los militares, comandado por Hugo Chávez, promovió una insurrección el 4 de febrero de 1992. A este levantamiento, que fue disuelto, le siguió un juicio por corrupción al presidente Carlos Andrés Pérez por parte de la Corte Suprema de Justicia, que culminó el 21 de mayo de 1993 con su destitución. En el año siguiente el Congreso nombró dos presidentes interinos: el primero fue Octavio Lepage, quien gobernó hasta el 5 de junio del mismo año, y el segundo, Ramón José Velásquez, que estuvo en el poder hasta el 2 de febrero de 1994, a quien reemplazó Rafael Caldera, líder histórico del Pacto de Punto Fijo, elegido en las urnas.

El panorama político venezolano cambió radicalmente en 1999 con la asunción de Hugo Chávez como presidente de la República. A partir de allí la disputa se trasladó a dos sectores de la sociedad que se articularon en bloques opuestos: los aliados al proyecto del presidente Chávez, y los sectores tradicionales, entre los que figuraban Fedecámaras, el sector privado, la gerencia de PDVSA, los grandes propietarios y la Central Única de Trabajadores de Venezuela. En 1999 se aprobó una nueva constitución política que desmontaba el modelo neoliberal; en 2003 se estatizó el control de PDVSA y se lanzó un proyecto que desde el Estado buscaba impulsar la economía, el mercado interno y distribuir la renta petrolera, asimismo se acabó el Pacto de Punto Fijo. En el marco de este proceso de cambio las manifestaciones callejeras, las marchas y protestas se convirtieron en uno de los escenarios prioritarios del ejercicio de la política ciudadana.

Perú: ascenso y caída de Fujimori e implementación del neoliberalismo

En el caso del Perú el sistema económico desarrollista tuvo su auge en la década de 1970 y decayó en el segundo lustro de la década de los ochenta cuando se presentó una crisis económica con hiperinflación, bajas tasas de crecimiento y un gran déficit fiscal; en el panorama político se venía de un sistema diseñado desde las primeras elecciones posdictadura en 1980 en el que competían cuatro partidos políticos: Izquierda Unida (IU); Partido Aprista Peruano (APRA), Acción Popular y el Partido Popular Cristiano (Conahan, Malloy y Wolpson 1997). A lo largo de la década de 1980 se presentó un conflicto armado interno que significó miles de muertos y el ascenso de Sendero Luminoso, que se convirtió en una fuerza con gran capacidad armada.

En la campaña presidencial de 1990 el debate se concentró en las políticas para salir de la crisis, tanto las económicas como las generadas por la violencia política; en un lado estaba el bloque de derecha, que propugnaba por una política denominada de shock, consistente en la aplicación de un fuerte programa de ajuste estructural de carácter neoliberal; en el otro se encontraba la izquierda, que planteaba un

programa socialdemócrata. En ese contexto, apareció una tercera opción representada por Alberto Fujimori, ingeniero de ascendencia japonesa y un virtual desconocido, quien al alejarse de ambas posiciones logró llegar a la segunda vuelta y ganó las elecciones al bloque de derecha que representaba Mario Vargas Llosa (Cotler y Grompone, 2000).

El ascenso de Fujimori coincidió con la maduración del denominado Plan Verde, que era una estrategia político-militar para la toma del control estatal por parte de las fuerzas armadas (CVR, 2003, pp. 59-159). Fujimori llevó a la práctica este plan que incluía, en primer lugar la aplicación de un conjunto de medidas neoliberales en un solo bloque, con privatizaciones, contracción de la economía y desincentivo al gasto, que en poco tiempo frenó la hiperinflación, pero que trajo consigo una profundización de la crisis social (Gonzáles, 2007); a estas sumó la lucha frontal contra los grupos insurgentes y una política generalizada de asistencialismo social que se convirtió en una estrategia eficaz para ganar lealtades entre los sectores más empobrecidos.

Las medidas de ajuste llegaron a su máximo nivel de aplicación en el año de 1992, cuando presentó novecientos veintitrés decretos leyes; en tanto desde el Congreso de la República se le solicitaba que este tipo de medidas se discutieran en ese escenario. Fujimori decidió cerrar el Congreso en abril de ese año, estableciendo así una dictadura civil, a la vez que se articuló con mayor fuerza con los militares para generar un acuerdo de gobernabilidad. Así configuró un régimen que en lo económico era de carácter neoliberal y en lo político, autoritario. Refrenda este estilo con los éxitos militares en la lucha contra el grupo insurgente Sendero Luminoso, en particular con la captura de su máximo dirigente Abimael Guzmán en septiembre de 1992, lo que le significó ganar cada vez más popularidad. En efecto, en 1995 se presentó a la reelección y consiguió un triunfo holgado; así empezó un segundo periodo caracterizado por las mismas dinámicas, pero con un desgaste generalizado debido a la crisis económica asiática del segundo lustro de los noventa, que la economía peruana también resiente. A pesar del desgaste de su modelo político-económico se le permitió presentarse a una tercera candidatura y en el año 2000 ganó las elecciones en medio de denuncias de fraude. Ante las grandes movilizaciones

sociales como la Marcha de los Cuatro Suyos que se oponían a su tercer mandato y el destape de escándalos de corrupción, su régimen se vino abajo y desde Japón, donde se refugiaba, presentó su renuncia y el Congreso lo destituyó de su cargo (Cotler y Grompone, 2000).

En el año 2000 y tras la caída de Fujimori se presentó un gobierno de transición encabezado por José Luis Paniagua, quien garantizó la realización de nuevas elecciones. El ganador Alejandro Toledo estableció un gobierno con una apertura política, pero dando continuidad al modelo neoliberal, prosiguió con las privatizaciones, en este caso de empresas regionales. Rápidamente Perú entró en auge de movilizaciones sociales, especialmente de carácter regional, que se oponían a estas medidas. Para las elecciones de 2005 aparece una fuerza política novedosa: el Partido Nacionalista de Ollanta Humala, quien se presenta como el candidato de las regiones más afectadas por la guerra interna y por la aplicación del modelo neoliberal. Así mismo vuelve a la escena Alan García del histórico APRA, quien en medio de la polarización de un candidato como Humala que despertaba muchos temores entre los sectores empresariales y políticos liberales, termina ganando las elecciones. El gobierno de Alan García continuó con las políticas de ajuste, centró la economía en la explotación minera y enfrentó como novedad la irrupción de movimientos sociales que se oponían a la explotación intensiva de los recursos naturales.

En las elecciones de 2010 quedó claro que el panorama político se había transformado radicalmente en veinte años. De cuatro partidos establecidos en los años ochenta se pasó a una decena de pequeñas agrupaciones y a tres proyectos económicos y políticos que se confrontaron: el fujimorismo, que ideológicamente se ubicaba como la combinación de autoritarismo, demagogia y modelo neoliberal; el nacionalista, que retóricamente se postulaba como de vocación campesina e indígena; y el liberal, neoliberal en lo económico y liberal en lo político. La gran sorpresa de las elecciones fue que el Partido Nacionalista de Ollanta Humala y la hija de Alberto Fujimori, Keiko, pasaran a la segunda vuelta. Finalmente, Humala ganó la presidencia y le dio continuidad al modelo económico neoliberal y político de la transición posfujimorismo (Toche, 2011).

Colombia: de la apertura política y económica de la Constitución de 1991 al desmonte del bipartidismo y el auge del uribismo

Colombia hasta comienzos de la década de los ochenta se había caracterizado por tener un sistema político estable en el que había predominado el bipartidismo expresado en los centenarios partidos Liberal y Conservador, que habían formado el pacto de alternancia en el poder denominado Frente Nacional, para salir de la dictadura militar de Rojas Pinilla y lograr la paz entre estos partidos, lo cual fue posible dado que desde el retorno a la democracia en 1958 se habían mantenido las elecciones ininterrumpidas y la tregua entre ellos (Hartlyn, 1993).

Antes de la década de los noventa el modelo de desarrollo en Colombia no se caracterizaba por ser claramente desarrollista o neoliberal, más bien era de carácter gradualista:

La pauta ha sido una práctica combinación de líneas medias, entre sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, entre un poco más y un poco menos de aranceles, entre incentivos y restricciones a la actividad privada, y entre inercia estructuralista cepalina y monetarista de organismos internacionales. (Leal Buitrago, 1995, p. 31)

A finales de los ochenta el país vivía en una crisis de violencia en ascenso en combinación con múltiples actores que crecían casi de manera simultánea; por un lado, las guerrillas de izquierda, que si bien existían desde los años sesenta (las principales), fue hasta la década de los ochenta que tuvieron un repunte que repercutió en la vida política y militar del país; por otro lado, estaban los grupos paramilitares de extrema derecha y los carteles del narcotráfico, especialmente los de Cali y Medellín, este último con una política narcoterrorista claramente definida para desestabilizar a las instituciones colombianas y provocar cambios a su favor, como la derogación de la ley de extradición de narcotraficantes de Colombia a Estados Unidos y la rebaja de penas judiciales. En la coyuntura de 1989-1990 se presentó el asesinato de tres

candidatos presidenciales en menos de un año; las fuerzas paramilitares en alianza con algunos sectores del ejército colombiano fueron responsables de un genocidio político al asesinar a más de dos millares de militantes de la izquierdista Unión Patriótica (UP); el cartel de Medellín puso carros bomba en varias ciudades, lo que llenó de miedo a la población; la insurgencia creció en su capacidad de fuego y la llamada *guerra sucia* (violencia estatal contra dirigentes sociales) se extendió en todo el territorio nacional. La crisis no era económica ni tampoco afectaba realmente a los poderosos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, era más bien una crisis de orden público, seguridad, derechos humanos y de expansión de los conflictos políticos en el país.

En 1990 es elegido presidente César Gaviria (1990-1994), quien accede a la realización de la Asamblea Nacional Constituyente solicitada por los grupos guerrilleros, sectores estudiantiles y movimientos sociales como base de un proceso de transformación y posible reconciliación nacional. La Constituyente de 1991 debe entenderse como el esfuerzo de varios sectores de la sociedad colombiana por salir de la crisis política y social que atravesaba el país, de allí que se da casi como parte de un acuerdo de paz con algunas de las organizaciones guerrilleras presentes en el país: el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la guerrilla indígena Movimiento Armado Quintín Lame (MAQLM), las cuales se desmovilizaron y firmaron un acuerdo de paz a la par que participaron de manera activa en la Constituyente de 1991. Así se da un pacto constitucional entre estos sectores alternativos y los sectores tradicionales del bipartidismo colombiano. El resultado fue una constitución ambigua con una vocación de consagrar un Estado social de derecho, y en la que se garantizaban los principales derechos económicos, sociales y culturales, pero con un enfoque neoliberal que abría la posibilidad al sector privado de intervenir en temas como salud, educación y servicios públicos domiciliarios.

Otro cambio importante en la Constitución de 1991 es que intentó limitar la hegemonía política de los dos partidos tradicionales que entre 1958 y 1974 habían firmado un pacto para establecer un régimen permanente de coalición conocido como Frente Nacional, el cual se basaba en la repartición equitativa del poder y de los cargos públicos y la alternancia en las elecciones (Hartlyn, 1993). Si bien el pacto se

desmontó formalmente en 1974, el bipartidismo se mantuvo hasta el 2002, pero con la Constitución de 1991 se abrió un poco en especial en el poder local, regional y legislativo.

En ese contexto de agitación política y violencia en ascenso, el gobierno de César Gaviria introdujo el modelo neoliberal que, al estar en el marco de las reformas de apertura política, no despertó gran oposición en los sectores políticos, pero sí en los sindicatos que no lograron frenarlo. El modelo se aplicó a través de una política de apertura comercial, es decir, de eliminación de barreras arancelarias, especialmente en el sector agrícola; asimismo, se aprobaron leyes de flexibilización laboral, de educación superior, que limitaron el crecimiento de las universidades públicas y promovieron la creación de universidades privadas, entre otras. Pese a la nueva Constitución el gobierno de Gaviria no logró consolidar la estabilidad, mermada por la intensificación de la guerra con las dos organizaciones guerrilleras con las que no se firmó la paz, las Farc-EP y el ELN, las cuales empezaron un proceso de crecimiento territorial sin precedentes.

En 1994 es elegido presidente Ernesto Samper (1994-1998), del también centenario Partido Liberal, quien intentó implementar medidas sociales para paliar los efectos del modelo neoliberal, pero no lo pudo desmontar (Sarmiento Anzola, 1995). La administración Samper se enfrentó a su vez a una grave crisis de gobernabilidad por el denominado *Proceso 8000*, expediente que demostró el ingreso de dineros del narcotráfico, en particular el Cartel de Cali, a su campaña presidencial. En ese contexto su margen de maniobra fue mínimo y su gobierno culminó en una grave crisis política que fracturó a las élites políticas colombianas, que desde 1958 habían estado muy unidas. En 1998 llegó a la presidencia Andrés Pastrana (1998-2002), conservador, que enarboló como salida a la crisis política y militar un proceso de paz con las Farc-EP que se desarrolló durante su mandato y no prosperó. Pastrana implantó una política que iba, por un lado, con las conversaciones y, por otro, con la alianza militar con Estados Unidos a través del denominado Plan Colombia; a la par profundizó el modelo neoliberal con un plan de ajustes formalizado con la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 1999. Hacia finales de su mandato se presentó una crisis con varias aristas: en lo económico con una recesión,

en lo político con la ruptura del proceso de paz con las Farc-EP y en derechos humanos con el aumento de la violencia política en todo el país. En el año 2002 la crisis tomó un giro hacia la derecha con la elección de Álvaro Uribe Vélez, quien fue elegido al margen de los dos partidos tradicionales y como el símbolo de un relevo de élites de origen más regional. Este implantó un gobierno militarista, con miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, concentración de poder en el Ejecutivo, persecución a la oposición política y social e intensificación de la guerra. El modelo neoliberal entró en una fase más profunda y se pasó a la explotación de los recursos naturales, al incentivo generalizado a la inversión privada en todos los órdenes con grandes exenciones de impuestos, políticas sociales asistencialistas y focalizadas y una concentración de la economía en la minería y en la producción cada vez mayor de agrocombustibles (Paredes Hernández, 2003).

La violencia en términos generalizados disminuyó, pero la situación de derechos humanos, en especial debido a los ataques contra dirigentes sociales y organizaciones populares empeoró. Así, por ejemplo, Colombia era el país en donde más trabajadores sindicalizados eran asesinados en el mundo (CSI, 2009), las muertes de civiles a manos de fuerzas militares aumentaron con los llamados *falsos positivos*, la desregulación laboral se generalizó haciendo que los trabajos estables disminuyeran y se convirtiera en elemento común la flexibilización laboral (Borrero 2004; 2005; 2006). En ese contexto, al final del segundo periodo de Uribe Vélez empezaron a aflorar las movilizaciones —en especial de indígenas— que se oponían a la entrega de sus territorios a grandes transnacionales, así como a la militarización de sus poblaciones. En el plano político el país quedó polarizado entre las fuerzas que apoyaban al presidente y los que se oponían a sus políticas, lo cual convirtió a los actores del debate político y social en *uribistas* y *antiuribistas*; luego de un tercer intento de elección, la Corte Constitucional de Colombia declaró que no era constitucional una segunda reelección, por lo que en 2010 culminó el ciclo de Uribe Vélez como mandatario.

En 2010 fue elegido Juan Manuel Santos, quien postuló la profundización del modelo económico, pero intentó romper con la polarización política convocando a todas las fuerzas de centro y herederas del bipartidismo a una coalición que denominó la Unidad Nacional, de la

cual quedó fuera el único partido de izquierda, el Polo Democrático Alternativo (PDA) y los sectores uribistas. Santos intentó recomponer el espíritu del Frente Nacional cuya base era el bipartidismo, para esto se alejó del uribismo, desmontó gran parte de las medidas militaristas de los gobiernos de Uribe Vélez, pero mantuvo sus políticas sociales y económicas. El gran viraje fue la apertura de negociaciones con las Farc-EP, que lo alejaron completamente del uribismo, lo que abrió un nuevo panorama político: por un lado, los sectores santistas y de izquierda que apoyaban el proceso de la paz y, por el otro, el uribismo, que se oponía a ellos. El panorama político se dividió en tres actores: el uribismo, que aglutinó a los sectores más conservadores y de derecha del país; el santismo, en el que se agruparon los sectores del centro político; y, por último, la izquierda, que seguía siendo una fuerza minoritaria.

Ecuador: de la inestabilidad política y económica al ascenso de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana

La palabra que mejor resume la situación política de Ecuador en las décadas de 1990 y gran parte de la de 2000 es la de inestabilidad (Barrera, 2001a; Ramírez, 2011). Prueba de ello fue la caída de presidentes, es decir, la destitución de estos antes de que culminaran sus periodos en el marco de inmensas movilizaciones sociales, lo que conllevó a que en menos de quince años este país tuviera diez mandatarios. A la par que se derrumbaba el sistema político surgido en el año de 1978, se desvanecía el proyecto central de las élites en materia económica y social: el neoliberalismo. Si bien el primer gobierno claramente neoliberal fue el de Sixto Durán Ballén (1992-1996), estas medidas ya tenían antecedentes. En el cuatrienio de Durán Ballén se implementaron de manera sistemática medidas neoliberales, este presidente representaba a los sectores más conservadores del país y en 1993 logró aprobar la llamada ley de modernización del Estado, que preveía la eliminación de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura, la promulgación de la ley de desarrollo agrario y el cambio de la política crediticia y financiera del Estado; no obstante este conjunto de reformas, el

ajuste no pudo llevarse a cabo en su totalidad, debido justamente a las protestas sociales que acompañaron los diferentes anuncios de reformas, a lo que se sumó la derrota del plebiscito de 1995 convocado por el Gobierno para implementar reformas privatizadoras.

En las elecciones de 1996 irrumpió en la escena política Abdalá Bucaram con un estilo que mezclaba el discurso demagógico, antioligárquico y crítico de los partidos políticos, pero defendía a ultranza el modelo neoliberal. Bucaram fue elegido presidente, llevó a Ecuador a una crisis política y finalmente fue destituido. En el campo específico del ajuste económico, Bucaram elaboró reformas estructurales como la convertibilidad monetaria entre el dólar y el sucre ecuatoriano. Posteriormente, y luego de las masivas movilizaciones del 5 de febrero de 1997 que culminaron con la destitución de Bucaram, el Congreso de la República eligió a Fabián Alarcón, quien convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que dio nacimiento a una nueva Constitución, la cual, a cambio de poner en práctica las medidas neoliberales, les dio a los pueblos indígenas una apertura de derechos e integración nacional.

A este gobierno siguió el de Jamil Mahuad, quien de manera rápida tramitó la propuesta de dolarización de la economía y el llamado feriado bancario, por el cual fueron confiscados los ahorros de los ecuatorianos para salvar a los bancos privados, entre otros aspectos que a la postre culminaron de nuevo en una destitución, luego de las movilizaciones del 20 y el 21 de enero de 2000. Una vez que Mahuad fue destituido, el Congreso de la República nombró como su sucesor a Gustavo Noboa (2000-2003), quien implementó la dolarización.

En 2003 parecía que el pulso entre el proyecto neoliberal y la oposición tenía una salida con la elección de Lucio Gutiérrez, quien contó con el apoyo de los indígenas y se presentó en la campaña con un discurso nacionalista, opuesto al neoliberalismo y de defensa de los derechos sociales. Una vez elegido, si bien conformó un gabinete ministerial con presencia de los sectores indígenas, dio un vuelco y se acercó a Estados Unidos, llevó adelante una agenda neoliberal y mostró rasgos autoritarios, ante esto el movimiento indígena rompió con su gobierno. En poco tiempo Lucio Gutiérrez se desgastó y en medio de su alianza con el expresidente Bucaram, de denuncias generalizadas de corrupción y rasgos autoritarios, en 2005 se produjo una sublevación

social conocida como la Rebelión de los forajidos, en la que las protagonistas fueron las clases medias urbanas y que a la postre culminó con la destitución del presidente por parte del Congreso de la República. Lo sucedió Alfredo Palacio, cuyo principal intento neoliberal fueron las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos, mismas que se vieron frustradas esencialmente por la gran oposición del movimiento indígena.

El cierre del periodo 2006-2007 se caracterizó porque ninguna de las dos principales fuerzas en disputa, la de los partidos tradicionales y la del movimiento indígena, lograron una salida política a la crisis. Un tercer actor, representado por Rafael Correa y sectores de las clases medias urbanas, fue quien logró capitalizar la crisis política y darla por terminada, quien desmontó las bases del modelo neoliberal y se convirtió en una fuerza política hegemónica con un proceso al que llamó la Revolución democrática. Los partidos políticos que a comienzos de los noventa eran hegemónicos perdieron su poder, el proyecto neoliberal fue revisado y el escenario político se transformó con un nuevo actor: el correísmo.

Para concluir este capítulo se encuentra que en todos los países analizados el consenso de las élites entró en crisis. La diferencia entre los cinco fue el desenlace: en Ecuador, Bolivia y Venezuela, emergieron fuerzas de oposición que se hicieron al control del aparato de Estado, cambiaron las constituciones y revisaron los componentes básicos del consenso mencionado. Estos tres países frenaron y revesaron la aplicación del modelo neoliberal y hubo un cambio total de las élites en el control del Estado y los viejos partidos se convirtieron en fuerzas minoritarias. En Colombia y Perú las élites tradicionales también entraron en crisis, y emergieron proyectos de militarización de la sociedad, de concentración de los poderes, ambos dirigidos por caudillos de derecha. El modelo económico neoliberal se profundizó y la democracia mínima se restringió a un punto meramente formal, que no cumplía ni siquiera las condiciones de procedimiento que las podían hacer pasar como tales.

Las protestas contra el neoliberalismo

Las protestas contra el neoliberalismo son las acciones colectivas que se oponen a la aplicación de este modelo en su conjunto, o a algunas o varias de las siguientes medidas (Almeida, 2002, p. 178):

- Cortes en gasto público, como en salud, educación y empleo público.
- Incremento de precios, por causas de impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA).
- Privatización de industrias públicas.
- Acuerdos firmados con entidades internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, tratados de libre comercio.

Las protestas antineoliberales tienen su principal antecedente en Latinoamérica, desde finales de la década de 1970, siendo las demandas principales la oposición a los pactos con el Fondo Monetario Internacional y medidas específicas de ajuste (Almeida, 2002). En ese periodo hubo muchas acciones, pero es hasta 1989 que cobran un sentido de acción colectiva de grandes dimensiones con el Caracazo. A partir de esta fecha se pueden identificar cuatro olas de movilizaciones antineoliberales en el continente.

La primera ola comprendió los años de 1989 a 1994 y es la ola de la visibilización del descontento contra el neoliberalismo. En este periodo hubo protestas regionales en casi todos los países de América Latina,

la literatura las ha registrado en Argentina, Brasil, Colombia, México, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, en donde había oposición a políticas concretas contra el modelo, que también reclamaban la presencia del Estado en su función social, y no solo en su rol de garante de la seguridad. Las dos más importantes en este periodo fueron el Caracazo (1989) y el Levantamiento zapatista (1994).

El Caracazo y las protestas en Venezuela que le siguieron trajeron consigo el desmonte del modelo en este país; en el caso del zapatismo, su alta capacidad de comunicación le aportó a las protestas anti-neoliberales un sentido político integral y proyectó las demandas más allá de las fronteras nacionales, lo que le dio un carácter continental y hasta global (Ferro, 2008).

La segunda ola fue de 1996 a 1999, esta se puede denominar como la de la resistencia obrera a la aplicación del modelo. En esta se presentaron protestas sectoriales en todos los países latinoamericanos, las cuales fueron protagonizadas principalmente por el movimiento obrero, el cual fue el más afectado por las políticas de ajuste, con despidos masivos, cierres de fábricas, recortes presupuestales. Fueron movilizaciones nacionales, contra el modelo en su conjunto, restringidas casi por completo a las acciones del movimiento obrero (Almeida, 2002).

La tercera ola sería de finales de la década de los noventa hasta el 2006. Empezó con las protestas contra la dolarización en el Ecuador (1999-2000), e incluyó las protestas en Argentina de 2000-2001, las Guerras del agua (2000) y del gas (2003) en Bolivia, el levantamiento contra el tratado de libre comercio en Ecuador en 2006, entre otras. Este periodo ha sido considerado como el ciclo más representativo de protestas contra el neoliberalismo en América Latina. Como elemento particular es que ya no es el movimiento obrero el protagonista central de estas acciones, sino son confluencias organizativas de múltiples sectores con un alto protagonismo de los indígenas allí donde existen movimientos indígenas. Así mismo, los impactos son más visibles, pues culmina en el desmonte de políticas, cambios de dirección del modelo de desarrollo y emergencia de nuevos actores políticos que toman como bandera la lucha antineoliberal, y que en algunos casos con esta logran cambios de gobierno como en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y Uruguay (Seoane, Taddei y Algranati, 2006).

La cuarta ola comenzó en 2011 y empezó con las movilizaciones estudiantiles en Puerto Rico, Chile y Colombia; se caracteriza porque se expresa en los países donde más consolidado está el modelo. La reivindicación es el desmonte de políticas de sectores generales, dentro de los que se destaca el de, por ejemplo, la política educativa inspirada en estas doctrinas —aún en medio del modelo neoliberal global— (Sader y Gentili, 2012).

A continuación, se exponen ocho movilizaciones emblemáticas contra el neoliberalismo que se presentaron en la región andina en el periodo de estudio y que se insertaron en las dinámicas continentales antes descritas.

El Caracazo

El Caracazo fue una protesta que inició en Caracas pero que se propagó en varias ciudades de Venezuela. El motivo de la protesta fue el anuncio el 16 de febrero de 1989, por parte del presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993), de implementar diversas medidas de corte neoliberal, a las cuales se les conoce como *el paquete*. Las protestas contra estas medidas comenzaron el 27 de febrero de 1989 en los terminales del transporte público de los suburbios de Caracas, cuando los autobuses, por disposiciones gubernamentales, subieron las tarifas en un 30 %; situación que generó protestas entre los usuarios y estas se generalizaron a varios lugares de la ciudad y ciudades adyacentes. Los actores no fueron ni sindicatos ni las organizaciones sociales convencionales, sino esencialmente estudiantes y ciudadanos empobrecidos. Entre los repertorios de confrontación se emplearon bloqueos de vías y el asalto a centros comerciales y supermercados, en donde miles de personas saquearon los comercios en busca de productos de primera necesidad; en respuesta a ello, en menos de 24 horas el Gobierno nacional militarizó las ciudades, declaró el toque de queda y emprendió una fuerte represión contra las protestas, que aparte de su disolución dejaron como saldo final 310 muertos (López Maya, 1998; 1999a; 2002).

El Caracazo generó un ciclo de protestas de gran relevancia en la historia reciente venezolana: entre 1989 y 1993 la ciudadanía de este país se volcó a las calles, surgieron nuevos repertorios de confrontación

en la época, como apagones de luz y el cacerolazo, el cual tuvo su momento cumbre el 10 de marzo de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que finalmente fue destituido, entre otras razones, como consecuencia política de esta protesta.

El levantamiento contra la Ley Agraria en Ecuador

[Un] levantamiento implica una movilización extendida al ámbito “nacional” y suscitada por un problema político de orden general [...] Para ser considerado levantamiento una protesta indígena, tiene que darse una práctica a la vez concreta y simbólica: la ocupación del espacio público (carreteras, acceso a las ciudades, medios de comunicación) que impone la paralización (económica, social y política) de una o varias provincias, se amplía a casi toda la región serrana y repercute en todo el país. Por último, consiste en la apropiación transitoria de los espacios públicos desde el ámbito rural por una población indígena y esencialmente agraria pero que, sin embargo, está dotada de organizaciones urbanas de representación política. (Guerrero, 1995, p. 125)

Esta protesta se llevó a cabo entre el 15 y el 26 de junio de 1994. La demanda central de la movilización fue oponerse a la aprobación por parte del Congreso de la República de Ecuador de la ley de desarrollo agrario, la cual daba por terminada la política de reforma agraria de la época desarrollista e insertaba plenamente el modelo neoliberal al campo. Los convocantes de las movilizaciones fueron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sectores campesinos; los adversarios fueron el Gobierno nacional y los grandes propietarios del agro y el desenlace fue una mesa de negociación en donde las partes en conflicto reformaron gran parte de la ley (Guerrero, 1995; Barrera, 2001a, pp. 155-179; Ospina, 2000). La demanda de los indígenas de la derogatoria de la ley se presentaba ya que esta “incluía limitaciones drásticas a las causales de afectación por reforma agraria, se creaban mecanismos para la división de tierras comunales, se liberalizaba el mercado de tierras” (Ospina, 2000, p. 136).

La CONAIE se enfrentó al gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien en junio de 1994 logró la aprobación de esta ley. A los quince días de aprobada se produjo el levantamiento que tuvo entre los repertorios de confrontación el bloqueo prolongado de vías terrestres, lo cual generó conatos de desabastecimiento de alimentos en varias poblaciones. Uno de los hechos que posibilitó la mayor presión fue la toma de cuatro pozos petroleros en el oriente del país, que implicó una gran preocupación de los diferentes sectores empresariales en el país y que forzó al Gobierno para que buscara una solución al conflicto (Guerrero, 1995).

Con el pasar de los días el conflicto cambió de escenario, de las calles pasó a una mesa de diálogo entre las partes, la cual implicó la suspensión del levantamiento y la interlocución directa entre los representantes de la CONAIE y el presidente de la República. A lo largo de dos meses, se llevaron a cabo las negociaciones, lo que condujo a una nueva escenificación del poder indígena, dado que les posibilitó ser interlocutores directos del Gobierno y visibilizarse como fuerza social, ya no solamente en las calles sino en los ámbitos institucionales; el escenario del diálogo no podía representar de mejor manera la disputa política en este país, en donde quedaron claramente diferenciados dos bandos en el debate: de un lado el presidente de la República, junto a delegados del sector privado vinculados al agro y del otro estaban los representantes de la CONAIE y de organizaciones campesinas.

Si bien los logros del levantamiento no se expresaron en la derogatoria de la ley, dado que no ocurrió, sí se plasmaron en una reforma a la original, lo cual tiene su significación en el escenario político por la estrategia que utilizó la CONAIE para la negociación de la ley. Esta consistió en discutirla artículo por artículo y en introducir temas como una perspectiva étnica en el tema de la tierra. Este levantamiento catapultó al Movimiento Indígena Ecuatoriano (MIE) como interlocutor político en la escena de la institucionalidad estatal.

La Guerra del agua

La Guerra del agua fue la primera gran movilización contra la aplicación del modelo neoliberal en Bolivia. Si bien en los años ochenta y

en 1995 se produjeron algunas protestas contra las medidas del ajuste estructural estas no lograron tener la convocatoria y los resultados que sí provocaron los hechos de abril del año 2000 (Crespo, 2000; Tapia, 2000; Vargas y Kruse, 2000; García Linera, 2001; González, 2007).

Se conoce como Guerra del agua a los hechos que acontecieron en la ciudad de Cochabamba entre el 4 y el 11 de abril de 2000; allí tuvo lugar una gran movilización que paralizó la ciudad y frenó las medidas de inspiración neoliberal que se habían aplicado en el manejo del agua en Cochabamba. El conflicto se remonta al año de 1999 cuando se privatizó la empresa pública SEMAPA y se adjudica el manejo del agua en la región de Cochabamba a un consorcio privado de nombre Aguas del Tunari. Este consorcio estaba conformado por un 50 % de empresas estadounidenses, un 25 % de españolas y el 25 % de capital privado boliviano. En el mismo marco, en el Congreso de la República del país, se promulgó la Ley 2029 en donde se reglamentaba el servicio de agua potable y de alcantarillado a nivel nacional, que posibilitaba el ingreso de capital privado y extranjero en funciones que anteriormente eran exclusivas del Estado. Los actores en disputa eran la Coordinadora en defensa del agua y la vida (La Coordinadora) y el Gobierno nacional de Hugo Banzer (1997-2001) junto al consorcio privado Aguas del Tunari.

El detonante del conflicto se dio en enero de 2000 cuando en la ciudad de Cochabamba aconteció el tarifazo, que fue el aumento en promedio de un 30 % de las tarifas de agua; en ese contexto se conformó La Coordinadora, la cual era una confluencia de múltiples actores entre los que se incluían maestros, campesinos, colonos del Chapare, transportadores, entre otros. En enero de 2000, a instancia de La Coordinadora, se dan las primeras movilizaciones y protestas en torno a la exigencia del agua como un derecho, así mismo se lanza el Manifiesto de Cochabamba, que recogía la inquietud de múltiples actores contra la privatización de la prestación del servicio del agua y se convierte en la hoja de ruta de las reivindicaciones; entre el 11 al 13 de enero se presentan movilizaciones que abrieron espacios de diálogo con las instancias gubernamentales, las cuales no arrojaron resultados. La Coordinadora convocó a una consulta popular sobre

la gestión del agua, que logró un 31 % de participación del potencial electoral real (acorde a las elecciones anteriores), lo que le otorgó un gran nivel de legitimidad a sus demandas. Con el desgaste de los espacios de negociación y con la claridad de la demanda por la no privatización del agua se convocó una movilización para el 4 de abril con dos exigencias concretas: la de revertir la decisión por medio de la cual se le entregó el manejo del agua al consorcio Aguas del Tunari y la derogatoria de la Ley 2029, que regulaba el tema del agua a nivel nacional. Esta movilización fue masiva, logró sitiar la ciudad, dejó sin capacidad de respuesta a los militares y a la postre terminó siendo decisiva para que el gobierno de Hugo Banzer creara una comisión de negociación que de manera secreta se reunió con La Coordinadora. Luego de estas conversaciones se acordó que se daba por terminado el contrato con el consorcio Aguas del Tunari y se definió que se discutiría en el Congreso de la República la derogatoria de la Ley 2029. En el transcurso de un par de días se cumplieron estos acuerdos y se dio fin a la movilización.

En el marco de lo que se conoce como Guerra del agua se presentaron otras movilizaciones en otras partes del país a lo largo de todo el año 2000, las cuales colocaron en el centro de la disputa a los campesinos e indígenas como principales opositores a las políticas neoliberales (González, 2007, pp. 103-108), tal como lo analiza Luis Tapia (2000), estas movilizaciones arrojaron el cambio de liderazgo de las protestas sociales, de la Central Obrera Boliviana (COB) en las décadas de los setenta y ochenta al de los movimientos de carácter cívico que se lograron articular para convertirse en una opción de poder.

El Arequipazo

El Arequipazo fue una protesta que aconteció el 14 de junio de 2002 en Arequipa (Perú), fue la primera gran movilización posterior al régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000). La demanda central era evitar la privatización de las empresas públicas de electricidad que abastecían del servicio a esta región; los actores convocantes iban desde las autoridades locales y regionales —alcaldes— hasta una confluencia

de organizaciones sociales; el adversario era el Gobierno nacional de Alejandro Toledo, que lideraba esta política de privatizaciones (Leyton, 2002; Coronado del Valle, 2002).

Los hechos que se conocen como el Arequipazo tienen como antecedente inmediato la campaña presidencial, en la cual el entonces candidato a la presidencia Alejandro Toledo se comprometió con sectores sociales y políticos de Arequipa a no privatizar dos empresas públicas de electricidad. No obstante, ya como presidente, Toledo procedió a ejecutar el plan de privatizaciones en todo el país, en el cual se incluía la enajenación de la presencia estatal en la Empresa Eléctrica de Arequipa (EGASA) y en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (EGESUR) en contravía de la expectativa de controlar el 51 % de las acciones y garantizar el dominio regional, ante lo cual las empresas quedarían en manos extranjeras.

La demanda de no privatización se explica por los efectos que tuvo sobre Arequipa la implementación de medidas neoliberales en el gobierno de Alberto Fujimori: el cierre de empresas —con el consecuente aumento de desempleo— dejó a la región en un lugar secundario para las políticas de fomento al mejoramiento de la infraestructura y de desarrollo. En este contexto la región del sur, liderada por Arequipa, buscaba reactivar su economía, de allí la importancia de la demanda que implicaba no solamente evitar el peligro del alza de tarifas, sino que estas empresas se constituyeran en un apalancamiento de las políticas de desarrollo en el plano regional, es así como las autoridades gubernamentales de índole local y regional se aliaron con maestros, pequeños empresarios, entre otros, en el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA).

El proceso de privatización se emprendió sin el consenso regional; en mayo de 2002, el Gobierno nacional procedió a abrir el proceso licitatorio ante lo cual empezaron a aparecer las primeras protestas; se declaró una huelga de hambre por parte de los alcaldes de la región del sur y una demanda ante el poder judicial que ordenaba al Gobierno paralizar las privatizaciones que les dio la razón. Pese a estas acciones la licitación se adjudicó a la empresa de Bélgica Traciebebe S. A. el 14 de junio de 2002. Ese mismo día, la plaza de la ciudad de Arequipa fue escenario de una movilización masiva a la que el gobierno de Toledo respondió con efectivos del ejército y las fuerzas policiales que envió

desde Lima. La indignación de los manifestantes creció entre una mezcla de rabia y frustración por una promesa incumplida: “el pueblo de la ciudad de Arequipa se sintió engañado, burlado y enardecido salió a las calles y a la plaza de armas a protestar contra el Gobierno y declarar a Toledo un traidor” (Coronado del Valle, 2002, p. 9).

Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se extendieron durante los días 14, 15 y 16 de junio. Las protestas además empezaban a generar movimientos de solidaridad en poblaciones vecinas como Tacna, en donde se presentó una marcha de apoyo. Ante este consenso regional diciendo no a la privatización, el gobierno de Toledo decidió negociar con los manifestantes y abrió un espacio de conversaciones. Luego de dos días de deliberaciones, el 19 de junio, manifestantes y gobierno nacional firmaron un documento público al que denominaron “Declaración de Arequipa”, en el cual se establecía que sería el poder judicial el que definiría la viabilidad de la privatización, lo que en la práctica implicó frenarla. Ese mismo día hubo nuevas movilizaciones, pero en esta ocasión de celebración por el triunfo sobre el proceso privatizador que al final quedó en suspenso.

El Arequipazo fue importante porque abrió el debate sobre la continuidad del modelo neoliberal en el gobierno de la llamada transición a la democracia pese al desmonte del régimen autoritario.

La Guerra del gas

Entre septiembre y octubre de 2003 se presentaron en Bolivia varias movilizaciones, casi ininterrumpidas, conformadas por campesinos, indígenas y mineros, que culminaron con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) el 17 de octubre y la sucesión de su vicepresidente, Carlos Mesa (2003-2005).

Los hechos se conocen como la Guerra del gas (González, 2007; Mamani, 2003; Prada Alcoreza, 2003) y se originaron con el anuncio de parte del Gobierno el 16 de septiembre de 2003 tras la decisión de exportar el gas a través de un puerto chileno. Esto implicaba que el país solo se quedaba con las regalías que dejaban las empresas extranjeras: de cada dólar que recibía el Gobierno de Bolivia las transnacionales se quedaban con 24 (Villegas, 2003).

El antecedente inmediato de esta protesta se puede ubicar el 9 de febrero del mismo año cuando el Gobierno anunció una medida llamada *el impuestazo*, que consistía en el cobro de un impuesto a los sectores asalariados para cumplir los acuerdos de reducción del déficit fiscal que había suscrito con el FMI, lo que desató múltiples protestas, como la del 11 de febrero, cuando policías de la ciudad de La Paz se amotinaron; el 12 se suman otras guarniciones en otras zonas del país, ante lo cual el presidente Sánchez de Lozada decidió sacar al ejército a las calles, lo que produjo enfrentamientos entre las dos fuerzas, que dejaron once policías y cuatro militares asesinados, fruto de estos hechos se desencadenaron grandes movilizaciones contra el presidente, y aunque el Gobierno en horas de la tarde anunció que no proseguiría con las medidas, las protestas continuaron (Solón, 2003).

En septiembre comenzaron las movilizaciones contra las decisiones de exportar el gas. El MAS, partido que aglutinaba a sectores campesinos e indígenas y cocaleros, convocó a protestas para el 19 del mes citado. En el transcurso de estas movilizaciones en el altiplano, en Warisata y Sorata, un grupo de turistas extranjeros quedaron atrapados en medio de una vía bloqueada por campesinos e indígenas y el Gobierno decidió mandar un convoy militar y policial para “rescatarlos”, operación que significó el asesinato de 6 campesinos, lo que causó una gran indignación y nuevas protestas (González, 2007; Prada Alcoreza, 2003).

El 2 de octubre se organizó en la ciudad de El Alto, que es contigua a La Paz, un paro cívico en solidaridad con los campesinos masacrados en el altiplano, contra la ley de hidrocarburos y la decisión del Gobierno de exportar el gas. El epicentro de las movilizaciones se trasladó a El Alto, ciudad indígena que contiene en su memoria colectiva las diferentes luchas indígenas de mineros y de pobladores urbanos (Mamani, 2003); la ciudad quedó bajo control de los sectores movilizadados, calle a calle se construyeron barricadas y zanjas para evitar que la policía y el ejército pudiesen entrar a ella. El 13 las marchas llegaron a la ciudad de La Paz y Sánchez de Lozada se dirigió en cadena nacional a toda la ciudadanía anunciando que no iba a renunciar, ante lo cual aparecieron movilizaciones en Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí; el vicepresidente en este contexto se deslindó del Gobierno y

se manifestó contrario a la manera como se estaba tratando la crisis. El 15 el presidente anunció que convocaría a un referéndum sobre la explotación y exportación del gas y abrió la posibilidad a una revisión de la ley de hidrocarburos, pero ya la exigencia de las movilizaciones era la renuncia. El 16 se presentó una multitudinaria movilización en La Paz, la mayor hasta entonces, Sánchez de Lozada se quedó solo, los partidos que lo acompañaban en la coalición de Gobierno le retiraron su apoyo. El 17 el presidente presentó la carta de renuncia ante el parlamento, la cual fue aceptada y se declaró al vicepresidente Carlos Mesa como nuevo presidente de Bolivia. El 19 se presentaron movilizaciones de júbilo.

¿Por qué estas movilizaciones precipitaron la renuncia de Sánchez de Lozada? Una de las razones fue el sentimiento de indignación colectiva que generó el anuncio de la venta del gas justo a través de un puerto chileno lo cual despertó sentimientos de pertenencia a Bolivia ante los recuerdos de desmembramiento territorial del que fue objeto el país por parte de Chile en el siglo XIX. Otro factor fue la indignación al autoritarismo, el cual se vio no solo como una política de represión a las movilizaciones, sino que se entendió como una expresión de racismo de las clases dominantes contra los sectores indígenas que estaban aglutinados en El Alto y que fueron tratados con políticas de arrasamiento, la respuesta indígena recurrió a todos sus repertorios de confrontación y ubicó las protestas en una disputa de lucha por su dignidad como pueblo.

El levantamiento contra el TLC

Esta protesta se dio en el marco de las negociaciones para la firma del tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos de América y el Ecuador en el año de 2006. Las demandas de la movilización eran cuatro: 1) rechazo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y la República del Ecuador; 2) la cancelación del contrato con la Occidental Exploration and Production Company (OXY) en territorio ecuatoriano; 3) que el Gobierno del Ecuador no se adhiera al Plan Colombia y 4) que la base de Manta pasara a manos de militares ecuatorianos y salieran los estadounidenses (Larrea, 2006).

Las protestas se llevaron a cabo desde enero y tuvieron un momento álgido a partir del 13 de marzo, cuando indígenas del Cotopaxi (en la sierra) bloquearon la vía Panamericana, a esto le siguieron protestas de campesinos y demás sectores sociales, que se movilizaron hasta el mes de abril; el conflicto siguió abierto un par de meses pero tomó un giro inesperado cuando el Gobierno decidió no prorrogar los contratos de explotación petrolera con la OXY y en noviembre de ese año los Estados Unidos suspendieron la negociación del TLC.

Pese a que fueron muchos actores los que participaron en la movilización, de nuevo la CONAIE se convirtió en la fuerza articuladora de la protesta. Al asumir esta agenda, el movimiento indígena se ubicó en el centro de la disputa por el modelo de desarrollo en el Ecuador. En opinión de Alejandro Moreano (2006), los conflictos orgánicos de la sociedad ecuatoriana eran la problemática petrolera, la firma del TLC y la ubicación del Ecuador en la región (si estaba en la Comunidad Andina de Naciones, si se encontraba en la estrategia del Plan Colombia o en la comunidad sudamericana).

Estas movilizaciones dejaron ver que la crisis política y de modelo económico se habían profundizado y justamente este es el significado del último levantamiento: el cierre de un ciclo de movilizaciones que comenzó en el año de 1990 y que culminó con la elección de Rafael Correa como presidente, quien ganó las elecciones con una promesa: la del abandono del modelo neoliberal.

El Baguazo

El Baguazo fue una protesta que ocurrió en la región amazónica del Perú en Bagua el 5 de junio de 2009, este día en el marco de las movilizaciones de indígenas amazónicos fallecieron 33 personas, 200 quedaron heridas y una más desapareció; hechos que dirigieron la atención de los principales medios de comunicación hacia esta región. Así se comenzó a hablar del Baguazo, enfrentamiento entre el Estado peruano y los pueblos indígenas que, aunque tuvo hechos trágicos, no se limitó a las situaciones de violencia (DPP, 2010a; 2010b; Meléndez y León, 2010; OSAL, 2009).

Entre los antecedentes de esta protesta es preciso remontarse al año de 2006, cuando se presentó un conflicto en contra de las medidas que buscaban liberalizar el mercado de tierras en la Amazonía peruana a través de la propuesta de la denominada Ley de la selva, presentada por el gobierno de Alan García (2006-2011) ante el congreso de la República y que se constituía para las organizaciones indígenas en una amenaza a su territorio (Meléndez y León, 2010).

Múltiples organizaciones amazónicas se opusieron a este marco legal, el conflicto se agravó cuando, en diciembre de 2007, el Congreso de la República del Perú le otorgó facultades legislativas al presidente Alan García para adecuar la legislación, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos para la firma del tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos de América (EUA) y entre las medidas se formularon una serie de leyes para la Amazonía peruana (Meléndez y León, 2010).

En febrero de 2008 las organizaciones indígenas realizaron una cumbre amazónica en donde definieron realizar un paro de 48 horas contra las iniciativas de ley ya descritas; este se llevó a cabo los días 17 y 18 de marzo. A estas acciones prosiguieron nuevas movilizaciones a lo largo de varios meses hasta que en agosto de 2008 se llegó a la derogatoria por parte del congreso de este primer paquete de medidas.

No obstante, estas movilizaciones y un concepto de la Defensoría del Pueblo del Perú que consideraba que las leyes no estaban en consonancia con el marco constitucional y los tratados internacionales que había suscrito el país, de nuevo el Gobierno presentó otra serie de medidas en el año 2009 (DPP, 2010a).

En abril de 2009 comenzó el segundo paro amazónico en el que se inscribe el Baguazo. Implicó acciones como toma de ciudades en la región, por parte de los manifestantes a lo que el Ejecutivo respondió con el desalojo de las carreteras y de los campos petroleros —el 5 de junio de 2009— que fueron tomados por los manifestantes. El desenlace fue trágico, como ya se mencionó y culminó en fuertes enfrentamientos. Cuando la prensa empezó a hacer públicos los hechos violentos, se desplegaron dos estrategias de parte del Gobierno, las de acusar a los manifestantes de ser los responsables y generar espacios de diálogo;

luego de casi un año de conflicto, el presidente García decidió retirar las polémicas leyes, lo que supuso un punto final a la movilización.

En el Baguazo el centro del conflicto fue el modelo de desarrollo neoliberal que ve en las tierras de la Amazonía una oportunidad de negocios frente a otro que busca garantizar la preservación de las tierras como territorio de los pueblos indígenas. Así mismo, es de destacar que se mantiene una dinámica, ya tendencial en el Perú, de fuertes movimientos de carácter regional que logran trascender a la esfera nacional por la confrontación con el estado central, como a su manera fue el Arequipazo y otros conflictos que se han dado a lo largo de toda la década de 2000 (Meléndez y León, 2010, p. 472).

La Mane: la movilización estudiantil universitaria contra la reforma a la Ley 30

El 16 de noviembre de 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) retiró del Congreso de la República de Colombia el proyecto de reforma a la Ley 30 de educación superior que venía impulsando desde el mes de marzo del año en mención. La razón fue la presión ejercida por grandes movilizaciones estudiantiles en su contra.

En este país andino a lo largo de 2011 (marzo-noviembre) el estudiantado universitario se tomó las calles, las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales y hasta los estadios de fútbol; fue una movilización coordinada, colorida y que abogó por una educación universitaria pública, gratuita y de calidad. El conflicto tomó por sorpresa al presidente Juan Manuel Santos, quien al momento de las primeras marchas contaba con el 80 % de popularidad en su mandato (2010-2014) y con el 90 % del parlamento en su coalición de Gobierno. En ese contexto no se esperaba que una movilización con impacto nacional pusiera en entredicho una de sus banderas: la “modernización” educativa (léase como la privatización progresiva del sector). El movimiento estudiantil en estos meses ganó una gran simpatía de múltiples sectores de opinión de la sociedad colombiana, que encontraban justas las demandas del estudiantado por una educación gratuita y de calidad.

El detonante del conflicto se dio el 10 de marzo de 2011 cuando el presidente Santos anunció en una rueda de prensa que presentaría una reforma a la educación superior, la cual se rige por la Ley 30 de 1992, y que contaba con las siguientes cuatro estrategias:

- Creación de instituciones con ánimo de lucro.
- Estímulos por calidad y eficiencia.
- Beneficios a estudiantes de menores ingresos.
- Control a la universidad, rendición de cuentas.

Los puntos expuestos provocaron de inmediato una gran reacción entre los rectores de las universidades públicas, algunos sectores de opinión y el estudiantado. El conflicto se veía venir para el mes de marzo y el Gobierno abrió un espacio de espera antes de presentar el proyecto al Congreso de la República, tiempo en el cual realizó consultas con sectores estudiantiles no articulados al movimiento estudiantil buscando legitimar el proyecto de reforma.

En marzo de 2011 en un encuentro universitario las organizaciones estudiantiles nacionales decidieron participar en un proceso unitario y crearon la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane). La Mane recogió el acumulado de casi 10 años de construcción de las organizaciones estudiantiles universitarias y se propuso ser un espacio de articulación para la movilización nacional, suprapartidista y de carácter gremial, construida desde representaciones regionales y locales.

El 3 de octubre, cuando la ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó la reforma a la Ley 30, la Mane anunció que empezaría un proceso de movilización para exigir el retiro del proyecto de ley. Los días 5, 6 y 7 de octubre la Mane organizó una consulta entre los estudiantes en donde la mayoría se opuso a la propuesta de reforma. El día 12 se llevó a cabo la marcha nacional universitaria y empezó el paro nacional indefinido en el 90 % de las universidades públicas del país. Ese día, según los organizadores, se movilizaron 250 000 estudiantes de 42 universidades en 32 ciudades. Después de esta movilización

siguió un carnaval nocturno en varias ciudades, *besatones* (encuentros donde el estudiantado se besa en público para llamar la atención en las protestas), *abrazatones* (jornadas masivas de abrazos), *pupitrazos* (salir a las calles con pupitres), obras de teatro callejeras, cacerolazos y la circulación de cientos de videos que se transmitían a través de las redes sociales de internet, en donde estudiantes, profesorado y actores de la televisión se solidarizaban con el paro y explicaban los motivos de la movilización.

El 10 de noviembre se presentó la marcha más grande del movimiento, a la que llamaron la gran toma de Bogotá, la ciudad colapsó y la presión al Gobierno aumentó (varios sectores políticos de su coalición le anunciaban en público que no apoyarían el proyecto). La noche anterior el presidente anunció que retiraría la ley si los estudiantes levantaban el paro; estos respondieron que levantarían el paro si se retiraba la ley del Congreso. La gran toma de Bogotá fue de tal contundencia que pasados unos días el Gobierno retiró el proyecto y a los pocos días el movimiento estudiantil levantó el paro.

En este punto del conflicto se pueden destacar tres aspectos del movimiento: la unidad de todas las organizaciones juveniles, la ampliación a otros sectores y renovación en los repertorios de confrontación. En cuanto al primero, la unidad del movimiento estudiantil expresada en la Mane ha sido una sorpresa en especial para el Gobierno, acostumbrado a lidiar con fracciones de los estudiantes. La Mane no solo logró articular a las organizaciones históricas del movimiento estudiantil sino a universidades privadas, organizaciones más pequeñas y estudiantes que no estaban organizados. En cuanto al segundo aspecto, otros sectores como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) —gremio que agrupa a los maestros de la enseñanza básica y media— se sumaron a las protestas; de igual manera se hicieron anuncios de adhesiones de taxistas, padres y madres de familia, entre otros, que hacían que la protesta creciera en impacto, asumiera un carácter ciudadano y no restringido al estudiantado. El último aspecto es la renovación en el repertorio de confrontación: la Mane logró imprimir un carácter pacífico a las movilizaciones, lo que le quitó sustento a la tesis inicial del Gobierno de señalar en ellas infiltraciones

de grupos armados. Así mismo, la puesta en escena de nuevas formas de protesta como desnudos, besos en las calles, obras de teatro en las marchas, entre otras, generaron un ambiente de simpatía y cercanía con jóvenes de otros actores tradicionalmente reacios —por ejemplo, de la prensa nacional—.

Es importante resaltar que ninguno de los tres aspectos analizados explica por sí solo el éxito de esta protesta estudiantil, sino que los tres lograron confluír de manera novedosa. Si bien es cierto que la demanda por una educación pública, gratuita y de calidad ha sido una reivindicación constante e histórica del movimiento, las movilizaciones de años recientes no lograron tener el impacto de la vivida en Colombia en 2011.

En estas dos décadas, en las protestas antineoliberales se destaca la presencia de los sectores populares. En las protestas de Venezuela, por ejemplo, el accionar, más que ser guiado por un solo actor organizado, fue fruto de múltiples actores. En Bolivia y Ecuador, las grandes protagonistas fueron las organizaciones indígenas, si bien las movilizaciones espontáneas actuaron de manera decisiva en varias de estas movilizaciones, la estructura organizativa de la CONAIE en Ecuador, como actor nacional, y de las dinámicas locales y regionales en Bolivia le dieron el peso y la capacidad de incidencia para emprender la acción.

En el Perú la dimensión territorial fue central en las movilizaciones; allí, a diferencia de los otros cuatro países, las protestas fueron de carácter regional, e incorporaron múltiples actores, desde el orden local y regional. El carácter regional es importante, no porque en los otros países no tenga relevancia, sino porque en los otros las dinámicas regionales se propagaron en una misma ola a otras regiones lo que no ocurrió en este país.

En el caso de Colombia sobresale la presencia de un actor histórico, el movimiento estudiantil, que emergió con fuerza en una movilización sin precedentes en las décadas anteriores. También sobresale la capacidad de lograr sus objetivos, aunque su demanda sectorial no logró

trascender a otros sectores, pese a contar con su apoyo. Así, mientras en el Perú lo regional no deviene en nacional, en Colombia, al menos con esta protesta, lo sectorial no logró propagarse a otras demandas.

Un tema en común es que en todos los países hay una estrecha relación entre el cambio político y las movilizaciones. En Perú y Colombia las principales movilizaciones contra el neoliberalismo se dieron justo después de la caída de los gobiernos de derecha y con tintes autoritarios que presidieron a estos países por largo años, en tanto en Bolivia, Ecuador y Venezuela las movilizaciones abrieron un nuevo ciclo político de gobiernos de izquierda.

Las protestas por la democratización

En el presente capítulo se exponen las protestas por la democratización que se presentaron en la región andina. Para empezar, es preciso acotar qué uso se le da al término *democratización*, el cual puede tener al menos dos sentidos: uno que hace alusión a las relaciones entre ciudadanos y gobiernos es la democracia referida a los procesos políticos; el segundo se refiere a las relaciones entre los ciudadanos y se le conoce como la democracia social. En el presente libro se prioriza la democratización de los procesos políticos, que se define como:

[...] el aumento de la amplitud y la igualdad en las relaciones entre los agentes del gobierno y los miembros de la población súbdita de dicho gobierno; de la consulta vinculante a la población súbdita del gobierno respecto al personal, los recursos y las políticas de gobierno; y de la protección de esa misma población(especialmente de las minorías presentes en su seno) frente a actuaciones arbitrarias de los agentes del gobierno [...] esta definición hace hincapié en los procesos políticos [...] la democracia no se reduce a un estado mental, a un conjunto de leyes o a una cultura en común, consiste en unas relaciones sociales activas y cargadas de significado entre individuos y grupos que comparten su conexión con un gobierno específico. (Tilly, 2007, p. 13)

Las protestas por la democratización en el contexto de la región andina se pueden agrupar en dos categorías: 1) aquellas que se dieron contra un gobierno autoritario o políticas autoritarias; y 2) las que abogaron por la profundización de la democracia, es decir, plantearon

la transformación de estas formas de gobierno con el fin de ampliar la participación y la capacidad de decisión de la ciudadanía.

Las protestas contra el autoritarismo y el desmonte de estos regímenes a lo largo de la década de los ochenta trajeron consigo un cambio en la orientación de las protestas sociales. Al derrocar a las dictaduras la sociedad percibió un cambio trascendental en su matriz de acción política e histórica. La lucha por los derechos adquirió un carácter fundamental, en particular en las décadas de los ochenta y los noventa en América Latina.

En el contexto de las llamadas transiciones a la democracia en América Latina aparecieron los movimientos en lucha por la definición del tipo de democracia. En la década de los noventa emergieron protestas que ya no solo se postulaban por la garantía electoral, sino por la profundización de la democracia. Estas hicieron una crítica al régimen de la democracia mínima y reclamaban otro tipo de régimen democrático, el participativo:

Su núcleo esencial está conformado por una concepción de profundización y radicalización de la democracia, que confronta con nitidez los límites atribuidos a la democracia liberal representativa como sistema privilegiado de las relaciones entre Estado y sociedad. Así, para hacer frente al carácter excluyente y elitistas de este paradigma se defienden los modelos de democracia participativa y deliberativa (en ese sentido, la participación de la sociedad en los procesos de decisión asume un papel para la democratización [...]). La participación se concibe, fundamentalmente, como compartir el poder de decisión del Estado sobre los asuntos relativos al interés público. Por lo tanto, se distingue de una noción de participación que se limita a la consulta a la población. (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2010, pp. 53-54)

La lucha por la democratización pasó desde la oposición al autoritarismo a la demanda porque esta forma de gobierno se democratice, ampliando la participación y la garantía de derechos sociales, y no solamente como las garantías de unas elecciones ininterrumpidas. Si en la década de los ochenta el tema eran las elecciones, en las dos décadas siguientes, el eje era cómo construir la democracia con la participación de los mismos movimientos sociales.

En síntesis, de todo este proceso se pueden identificar como características de una lucha por la democratización, aquellas acciones colectivas que contienen:

- Denuncias por la violación de derechos humanos. Específicamente en torno a los derechos civiles y políticos.
- Luchas contra la impunidad. Estas se expresan en demandas de verdad, justicia y reparación.
- La oposición al autoritarismo. A través de acciones para que renuncien las juntas militares y llamen a elecciones libres; la oposición a proyectos de reelección indefinidas allí donde el autoritarismo se ejerce en el marco electoral.
- Demandas para el desmonte de la militarización y de la criminalización de la protesta social.
- Ampliación de la participación política. Hace alusión a reformas políticas que posibiliten el ascenso de otras fuerzas sociales diferentes a las élites que controlan el aparato de Estado.
- Las reformas del aparato de Estado para incluir en el diseño institucional la participación de organizaciones y movimientos sociales.
- La lucha por la transparencia en el proceso electoral.
- La exigencia de rendición de cuentas.
- La lucha contra la corrupción.

A continuación, se exponen seis de las principales protestas por la democratización; el orden de exposición es cronológico.

El 5 de febrero de 1997

El 5 de febrero ocurrió la mayor movilización social en la historia del Ecuador. Se congregaron cerca de dos millones y medio de ecuatorianos (Cornejo, 1997) para exigir la renuncia de Abdalá Bucaram (1996-1997); la convocatoria al paro cívico surgió del Frente Patriótico (coalición de fuerzas sociales y sectores de izquierda) y el objetivo central fue exigir la

destitución del presidente. A partir de allí se realizaron protestas de estudiantes de secundaria, la toma de la catedral de Quito el 29 de enero a cargo de un centenar de miembros de la Coordinadora de Movimientos Sociales (coalición de organizaciones sociales cercanas a la CONAIE) y otra serie de acciones de diferentes actores que se sumaban una tras otra. La movilización del 5 de febrero fue nacional, multisectorial y masiva (Barrera, 2001a, pp. 226-232; Montúfar, 1997; Ospina, 2000; Arcos, 1997; Pachano, 1997; Cornejo, 1997; León, 2009, pp. 48-57).

La movilización surtió efecto: el Congreso de la República en las sesiones del 6 de febrero decidió destituir a Bucaram y nombrar en su lugar a Fabián Alarcón (1997-1998). El 7 de febrero Ecuador amaneció con tres presidentes que reclamaban su legitimidad en el cargo: de un lado se encontraba el destituido, que pese a la resolución del congreso se reclamaba como mandatario legítimo; de otro lado, estaba el elegido y para terminar apareció la vicepresidenta, Rosalía Arteaga, a reclamar la presidencia. El 11 de febrero se dio por terminado el conflicto, Bucaram partió a Panamá, la vicepresidenta desistió de seguir en el cargo y Alarcón asumió su rol como presidente interino del país (Ribadeneira, 1997).

Si bien la demanda central de esta movilización era la renuncia de Bucaram, las causas para exigirla diferían según cada sector: para los sectores organizados y congregados en el Frente Patriótico y la Coordinadora de Movimientos Sociales el motivo central era el paquetazo (conjunto de medidas neoliberales) y la propuesta de convertibilidad con el dólar; para los partidos políticos tradicionales la razón central estaba en que Bucaram en su forma de gobernar no contó con las fuerzas políticas tradicionales, debido a lo cual creó más bien un gobierno de sus amigos cercanos y familiares (nepotismo); para la ciudadanía no organizada y que se movilizó de manera espontánea, el motivo central era la percepción generalizada de corrupción, que se había salido de todos los cauces tolerables; una cuarta razón, que motivó inicialmente a las clases altas, fue el estilo peculiar de gobernar del presidente, que si bien le generó réditos en campaña, en el Gobierno le restó la credibilidad de las clases altas y medias, las más tradicionales del país (Pachano, 1997).

Quedó demostrado que las movilizaciones callejeras y las protestas masivas se habían convertido en el Ecuador en un medio eficaz para

lograr cambios políticos. En 1997 los sectores urbanos encontraron en la calle un escenario idóneo no solo para expresar sus demandas sino también para provocar cambios políticos.

El levantamiento del 21 de enero de 2000

Esta protesta se desató ante el anuncio hecho por el presidente del Ecuador Jamil Mahuad (1998-2000) de dolarizar la economía del país; tuvo como desenlace la toma del poder ejecutivo por parte de un triunvirato conformado por el presidente de la CONAIE de ese entonces, Antonio Vargas; un coronel del ejército ecuatoriano, Lucio Gutiérrez; y un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. El triunvirato duró poco, menos de un día, los militares le retiraron el apoyo a esta propuesta de gobierno y el Congreso de la República decidió nombrar como nuevo presidente del país a Gustavo Noboa (2000-2003).

El levantamiento tuvo como antecedente las movilizaciones de 1999 que protagonizó la CONAIE en asocio con otros sectores sociales del Ecuador contra medidas de Mahuad como la subida del gas domiciliario; como fruto de tales reformas el precio se congelaría por un año. El 11 de enero del año 2000 Mahuad anunció al país que iba a dolarizar la economía del Ecuador, quiere esto decir que el sucre desaparecería como moneda nacional y se adoptaría como tal el dólar estadounidense. Para la CONAIE la dolarización implicaba la precarización del poder adquisitivo y afectaba esencialmente a los sectores más empobrecidos del país; por esta razón, llamó a una movilización para el 15 de enero y la conformación de un parlamento de los pueblos que tuviese la legitimidad de la que carecía el gobierno de Mahuad, quien respondió con la militarización del conflicto, movilizó 10 000 efectivos de las fuerzas militares, impidió la circulación de los indígenas que se dirigían hacia Quito, no obstante esto los indígenas lograron llegar a esta ciudad el 20 de enero en un número cercano a 5000 para tomarse la legislatura y desencadenar los hechos de la caída presidencial (Barrera, 2000; Barrera, 2001b; Ciriza, 2000; Dávalos, 2000; Escárzaga y Gutiérrez, 2006; León, 2009; Ramírez, 2010a).

Las demandas del levantamiento del 21 de enero se pueden ubicar en dos, una es la que detonó la protesta, el anuncio de la dolarización,

pero con el desarrollo del acontecimiento cobró más fuerza el tema de la lucha contra las élites políticas ecuatorianas, que a la postre se puede ubicar como la demanda central de la protesta.

Los repertorios de confrontación fueron la toma de carreteras y la movilización hacia Quito desde diferentes zonas rurales del país y la toma del Congreso Nacional en Quito. Entre los actores convocantes, inicialmente estaba la CONAIE, pero en el transcurso del levantamiento el protagonismo lo cobró la alianza con un sector de los militares ecuatorianos. Esta unión se logró porque confluyeron reivindicaciones como el deterioro de las condiciones de vida de los indígenas y el intento de una limpieza ética de la política por parte de los militares; el 7 de enero del año 2000 los militares le habían pedido al presidente que extraditara a los banqueros que provocaron la quiebra del sistema financiero, así como la incautación de los bienes y otras medidas que no se tuvieron en cuenta; por ende, los militares tenían razones para estar tan inconformes con Mahuad (Ramírez, 2000).

En el momento del desarrollo de los acontecimientos, los militares decidieron tomar el mando de la situación haciendo que realmente el desenlace estuviera en sus manos; se puede decir que aprovecharon la posibilidad abierta por el movimiento indígena y se convirtieron en el actor protagónico, por un lado, como participantes del efímero triunvirato y luego como los garantes de la salida establecida por el parlamento reunido en Guayaquil en contraposición al experimento que se gestaba en Quito (Ospina, 2000).

Con esta acción la CONAIE pasó a convertirse en una opción de poder al plantear claramente que estaba reivindicando no solamente unas medidas concretas en materia económica, sectorial y en políticas étnicas, sino que también se mostró como un bloque de poder político que claramente entraba en antagonismo con las élites empresariales y políticas que habían gobernado al país desde la transición a la democracia (1978).

No obstante, esta capacidad de movilización de los indígenas estuvo limitada por los militares. El 21 de enero mostró al movimiento indígena como una alternativa, pero también dejó entrever que no contaba con el poder suficiente para llevar a cabo sus planes y que dependería de otros, en este caso los militares, para llegar al poder. El

motivo que operó como detonante central de la movilización, frenar la dolarización, no se logró concretar y en el gobierno que reemplazó a Mahuad se implementó y, de hecho, rige hasta el momento.

La Marcha de los Cuatro Suyos

Los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000 se presenciaron en Perú las protestas sociales más importantes de este país en décadas. El motivo central era rechazar el tercer mandato de Alberto Fujimori, quien estaba en el poder desde 1990, el lema era que se “vaya la dictadura y que regrese la democracia”; se calcula que participaron 250 000 manifestantes (Poople y Renique, 2001; Munive, 2010).

La Marcha de los Cuatro Suyos se debe enmarcar en una pequeña ola de movilizaciones contra el gobierno autoritario de Alberto Fujimori que tiene su inicio el 19 de julio de 1999, en el marco de la conmemoración de los veinte años del paro general del año 1979; ese día la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) organizó varias protestas en contra del propósito de Alberto Fujimori de ser reelegido. Entre los actores que convocaron estaban federaciones estudiantiles, organizaciones no gubernamentales, grupo de mujeres y organizaciones barriales. La movilización se concentró en la lucha contra el autoritarismo, ejemplificada en las intenciones reeleccionistas de Fujimori. A esta marcha se agregaron otras en agosto de 1999, que rechazaban el desconocimiento que Fujimori hizo del dictamen del Tribunal Constitucional, el cual había conceptuado que no podía ser candidato para un tercer periodo, debido a lo que el presidente procedió a destituir a los jueces que habían votado por esta determinación y por esa vía habilitar su posibilidad de presentarse de nuevo a la campaña electoral. El 6 de enero de 2000 y ante el anuncio de que el presidente se iba a presentar a las elecciones se da una gran movilización en la que por primera vez se congregan todas las fuerzas sociales que se oponían al régimen; la consigna central de la marcha era muy dicente del ambiente antiautoritario que se vivía: “El miedo se acabó” (Poople y Renique, 2001).

A este ambiente de rechazo al tercer mandato de Fujimori se fueron sumando actores: para el 12 y 13 de marzo de 2000 la Coordinadora

Nacional de Frentes Regionales convocó a una jornada nacional de protesta, y a esto se sumó el llamado a un paro cívico contra la reelección el 23 de marzo; otro sector que también se reactivó en las movilizaciones fue el campesinado, a través de la Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria.

El 6 de abril es proclamado ganador Alberto Fujimori luego de unas elecciones con acusaciones de fraude; ante lo cual el candidato que seguía en intención de voto, Alejandro Toledo, decidió no participar de la segunda vuelta electoral. A partir de allí varios sectores políticos, tanto de izquierda como liberales que se habían manifestado contra la intención de la reelección de Fujimori, se aglutinaron en una sola fuerza con la única consigna de exigir la salida de Fujimori del poder. Así el ex candidato presidencial Alejandro Toledo se convirtió en el vocero más visible de esta indignación, que se expresó en la Marcha de los Cuatro Suyos, tornándose en una movilización amplia, de múltiples sectores.

El nombre de la movilización representaba la toma de la ciudad de Lima desde los cuatro puntos cardinales del Perú, los suyos, en alusión a las regiones de la época del Imperio inca. La movilización buscaba llegar a Lima el 28 de julio, día de la posesión de Fujimori ante el Congreso para su tercer mandato; esta fue multitudinaria, sin precedentes recientes en el país andino, en lo que parecía ser el despertar luego de 10 años de miedo y protestas muy aisladas. La movilización fue duramente reprimida, se presentaron enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y el incendio de un edificio en el centro de Lima, así como varios heridos y seis muertos, pese a esto y a los casi un cuarto de millón de manifestantes Fujimori asumió su tercer mandato. No obstante la contundencia de convocatoria de las movilizaciones, un actor desempeñó un papel central en su invisibilización: los medios masivos de comunicación, en especial la televisión transmitida por señal abierta, que no divulgaba las movilizaciones, ni el clima de descontento social. Así, la calle se convirtió en el medio de comunicación más efectivo de la ciudadanía. Al cabo de varios meses, Fujimori fue depuesto finalmente del poder.

Esta movilización fue determinante en la ruptura de dicho régimen, que se vanagloriaba de contar con un alto apoyo popular basado en encuestas de opinión. Las marchas, protestas y la capacidad de unidad de los sectores que se le opusieron crearon un desafío a la gobernabilidad

del mandatario, al reducir su margen de maniobra política hasta que se mostró débil por primera vez luego de 10 años de gobierno. Esta debilidad generó que múltiples sectores, tanto nacionales como internacionales, vieran la oportunidad de aumentar la presión al régimen, y es así como los hechos que culminaron en la renuncia de Fujimori fueron en gran parte desatados por la capacidad de movilización que se logró en la Marcha de los Cuatro Suyos.

La Batalla de Venezuela

En el transcurso de dos años (2003 y 2004), en Venezuela se presentó el segundo gran ciclo de protestas de los últimos veinte años. Esta vez en el marco de un fuerte viraje en materia económica, social y política que imprimió el gobierno de Hugo Chávez desde su llegada a la presidencia en febrero de 1999 (López Maya, 2004; López Maya, 2006).

En este contexto se enfrentaron dos proyectos de sociedad: de un lado estaba el bolivariano, que lideraba el presidente Hugo Chávez y que contó con el apoyo de los sectores populares; de otro, se encontraba un proyecto de corte conservador, representado por Fedecámaras y las élites empresariales y dirigentes de los antiguos partidos políticos, que fueron hegemónicos entre 1958 y 1999, y que conformaron un espacio de coordinación al que denominaron la Coordinadora Democrática (CD).

Ante el anuncio del Ejecutivo de la aprobación de varias leyes —entre las que se encontraban la reforma agraria y el cambio en la política de hidrocarburos— este se vio confrontado con las élites económicas. La CD convocó a un paro cívico el 10 de diciembre de 2002 con la exigencia de derogar las medidas aprobadas y con la singularidad de ser un paro patronal; las demandas de la CD pasaron de pedir la derogatoria de las leyes a exigir la renuncia de Chávez. La calle se convirtió en escenario de confrontación entre enero y febrero de 2003 en donde confluyeron diferentes movilizaciones y un paro general, convocados desde la gerencia de la empresa PDVSA. El motivo de este paro era la oposición al cambio de junta directiva de la empresa que llevó a cabo el presidente. La denominada gerencia (altos funcionarios) exigía el respeto a un principio de meritocracia y mantener la

política de apertura petrolera (con un corte neoliberal que implicaba la entrada paulatina de capitales privados a la empresa y contradecía el corte nacionalista que el Gobierno le quería imprimir).

La confrontación en las calles tomó un nuevo rumbo el día 23 de enero de 2003 cuando la oposición convocó a una movilización y las fuerzas afines al proyecto bolivariano respondieron con otra. En ese contexto quedaba claro que tanto la oposición como el Gobierno contaban con la calle como escenario de medición de las fuerzas políticas: a una marcha, una contramarcha. La misma dinámica se repitió el 4 de febrero cuando los sectores bolivarianos se articularon para conmemorar los 10 años del intento de insurrección del entonces coronel Hugo Chávez y la oposición convocó a marchas litúrgicas para repudiar la fecha. Para el 9 de abril la CTV convocó a un paro general, al que la CD se unió, que culminó con el golpe militar del 11 de abril, día en que un sector de los militares en asocio con los empresarios de Fedecámaras llevó adelante el golpe de estado que erigió como presidente de facto a Pedro Carmona, dirigente de esta federación.

El 13 de abril de 2003 se movilizaron los sectores bolivarianos y se presentaron multitudinarias movilizaciones que exigían el retorno de Chávez a la presidencia. La capacidad movilizadora y el apoyo de sectores leales de las fuerzas militares al presidente desembocaron en el fracaso del gobierno golpista y el 14 de abril el presidente constitucional retornó a su cargo. A partir de entonces la movilización se hizo constante, durante el 2003 la oposición convocaba una marcha para el 11 de cada mes, a lo que los sectores bolivarianos respondían con otra para el 13. Así, el lenguaje político se medía en la capacidad de convocatoria de la movilización.

En diciembre de 2003 PDVSA de nuevo entró en juego, los altos ejecutivos se declararon en paro en todas las dependencias de la empresa que para entonces era la más grande de América Latina. El país se desabasteció de gasolina y los sectores bolivarianos salieron a recuperar el control de la compañía petrolera y el conflicto se volvió a tornar tenso. El paro buscaba paralizar al Estado y por esa vía exigir la renuncia del presidente. El conflicto entre bolivarianos y oposición entró en un ámbito de absoluto antagonismo. Pasaron varias semanas y el Gobierno paulatinamente se hizo de nuevo al control de PDVSA. El 23

de enero de 2004 una nueva movilización, esta vez convocada por los sectores bolivarianos, se hizo sentir de manera multitudinaria, en tanto la oposición decidió no salir. La balanza en las calles estaba a favor del proyecto bolivariano. Todas las medidas nacionalistas que estimuló el Gobierno salieron adelante y se profundizaron a pesar de que el paro petrolero implicó la mayor crisis económica del país. Allí se cerró este ciclo de movilizaciones en donde la calle, las huelgas y los medios de comunicación se convirtieron no solamente en el espacio de disputa sino en parte de la confrontación. Como nunca antes en Venezuela toda la sociedad se movilizó desde una perspectiva claramente de clase. Así los sectores populares y más desfavorecidos se articularon al proyecto bolivariano y los sectores de clases altas y medias se articularon al proyecto de la Coordinadora Democrática. Luego de intentar el golpe de estado, los paros estratégicos y las movilizaciones callejeras, en 2004 la oposición optó por otro escenario: el referendo revocatorio, el cual finalmente ganó Chávez. Luego de este, otras expresiones de movilización se fueron dando, pero nunca en las dimensiones de este ciclo.

La Rebelión de los forajidos

Se conoce como la Rebelión de los forajidos a las movilizaciones que acontecieron en el Ecuador entre el 14 y 21 de abril de 2005 en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez y que culminaron con su destitución por parte del Congreso de la República el 20 de abril. Los convocantes fueron sectores de las clases medias urbanas y no hubo participación de las tradicionales organizaciones sociales protagonistas de este tipo de acciones como la CONAIE, sindicatos y partidos de izquierda.

Lucio Gutiérrez encarnaba una suerte de gobierno demagógico que recordaba a Bucaram y continuaba con las políticas neoliberales, pero trastocaba otro tipo de valores que eran centrales en las clases medias de las principales capas urbanas del Ecuador. Las razones para la solicitud de su renuncia no fueron de índole económica ni por las condiciones sociales, y los convocantes fueron una expresión relativamente espontánea que se articuló a partir de redes constituidas por las clases medias y algunas instancias gubernamentales de nivel local, como las alcaldías de Quito y Guayaquil.

Los hechos que generaron tanta indignación y crearon la percepción de autoritarismo y corrupción generalizada fueron dos: 1) la alianza de Gutiérrez con Bucaram en 2004 en la ciudad de Panamá; y 2) la cooptación del poder judicial por parte del mandatario. En cuanto a la alianza, le permitió a Gutiérrez contar con los votos del partido de Bucaram en el Congreso de la República, lo que le hizo posible el cambio de varias de las principales cortes del país, incluida la Corte Suprema, la cual fue controlada por el presidente y sus aliados políticos. Dicho apoyo tuvo como recompensa la absolución del expresidente en uno de sus procesos y generó el temor por su regreso a la vida política del Ecuador (Araujo, 2005a).

Así las cosas, se llegó a abril de 2005, cuando desde un espacio denominado Asamblea Quito se convocó a un paro para el 16 de abril. Lucio Gutiérrez había respondido dos días antes que estas protestas eran obra de forajidos, ante lo cual y en claro desafío al gobernante los participantes se autodenominaron como forajidos y desde allí los hechos que estoy narrando se conocen de este modo. El medio de comunicación alternativo Radio La Luna se convirtió en eje importante de la manifestación y en el espacio de convocatoria central. El motivo de esta movilización era la sensación de corrupción generalizada que se había apoderado del país, de prácticas clientelares, de dinámicas de mal gobierno y el retorno de Bucaram al país (Hidalgo Flor, 2005).

Entre los repertorios de confrontación que se presentaron a lo largo de la Rebelión de los forajidos se destacan: 1) las asambleas, que eran instancias de convocatoria y organización que arropaban miradas locales de la política y se articulaban a un proceso de carácter autonomista; 2) la Asamblea Quito, una instancia más institucional auspiciada por la alcaldía de la ciudad, que rápidamente fue desbordada, pero buscaba incidir en la política institucional; 3) las redes ciudadanas, las cuales eran esencialmente figuras políticas o sociales que hicieron acciones de propaganda de carácter espectacular o novedoso como leer apartados de la constitución política. Su agenda era un discurso liberal de defensa de la institucionalidad y su extracción de clase estaba definida por las clases medias altas de segmentos educados; 4) la expresión espontánea de ciudadanos sin ningún tipo de filiación

política, los cuales intentaron incidir de manera individual o en acciones de calle, en el proceso de cambio político e institucional del país. Estos cuatro segmentos estaban divorciados de los partidos políticos y de los movimientos sociales tradicionales. (Ramírez, 2010b).

También participaron los sectores de las clases altas, los cuales no se movilizaron solamente contra la corrupción o el autoritarismo, y menos contra el irrespeto a la separación de poderes, sino contra un presidente que simbolizaba estéticamente lo no correcto, lo “populacho” y de mal gusto:

Las clases media alta y alta también se movizaron por valores estéticos que abarcan desde cómo debe comportarse un primer mandatario hasta consideraciones sobre el origen social y étnico de los presidentes. A estos grupos les molestó el estilo chabacano y “vulgar” de Bucaram y Gutiérrez, quienes además fueron vistos como advenedizos sociales por sus orígenes étnicos de “turco contrabandista” o “amazónico de color verde”. (De la Torre, 2008, p. 213)

Es de destacar que en las movilizaciones participaron todas las clases sociales de la sociedad ecuatoriana; en esta movilización el protagonismo fue casi que exclusivamente de la ciudadanía no articulada a grandes organizaciones sociales, lo que permite colegir que lo que se logró en estos años, más allá de los cambios presidenciales, fue simbólico: la convicción de la efectividad de la movilización callejera para provocar cambios políticos en la sociedad ecuatoriana.

La Minga de resistencia social y comunitaria

El 12 de octubre de 2008 comienza lo que se conoce como La Minga nacional de resistencia comunitaria y social (La Minga), convocada por los pueblos indígenas del departamento del Cauca en el suroccidente de Colombia. A lo largo de más de 45 días, La Minga se llevó a cabo como un proceso de movilización en el que se congregaron miles de indígenas, campesinos, afrocolombianos y estudiantes para pedir entre otros aspectos, la no ratificación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia; el desmonte de la política de

seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010); la derogatoria de leyes que promueven el despojo de las comunidades indígenas y el cumplimiento de acuerdos previos entre las comunidades indígenas y el Gobierno nacional (Archila, 2009; Caballero, 2009; González, 2010; Laurent, 2010; Granados, 2008).

La Minga empezó en el departamento del Cauca, en el resguardo de La María, Piendamó, y culminó en Bogotá el 1 de diciembre de 2008, luego de toma de carreteras, movilizaciones masivas a las principales ciudades de Colombia (Cali y Bogotá) y la caminata por la carretera principal del país, en más de 400 kilómetros. La Minga, a su vez, significó una interlocución directa y clara en oposición al gobierno de Uribe Vélez; en ese sentido, se buscó congregarse a una gama de actores que se oponían al Gobierno y sus políticas, ser un catalizador de estas luchas y convertirse en un escenario más allá de las reivindicaciones puntuales, inclusive las indígenas. Por esto, el objetivo central era contribuir a la unidad de los sectores sociales que no estaban de acuerdo con el modelo neoliberal, la política de guerra y el manejo autoritario del gobierno de Uribe Vélez.

El liderazgo de La Minga estuvo en cabeza del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) el cual aportó todo su acumulado político y social en la consolidación de este espacio de oposición social. Era una medición de fuerzas con un gobierno de características autoritarias y que gozaba de los mayores índices de popularidad en las encuestas de opinión. El reto de la movilización se calculó en su capacidad de impacto mediático y en lograr que otras fuerzas sociales se sumasen. En ese sentido, se emprendió la toma de la carretera Panamericana, la principal del país, a lo cual el Gobierno respondió con su militarización; un miembro de las comunidades indígenas fue asesinado y las instalaciones del resguardo de La María, Piendamó fueron allanadas y destruidas (Caballero, 2009).

La represión estuvo aclimatada por la rápida respuesta de los medios oficiales y las declaraciones del presidente y su gabinete, que no dudaron en afirmar que la movilización estaba infiltrada por grupos guerrilleros y que tal represión no era cierta. Un video difundido por la cadena de noticias estadounidense CNN demostró que la policía sí

estaba usando armas de fuego, lo cual cambió el tono y generó un espacio diferente a la movilización (Caballero, 2009).

En este contexto, La Minga decidió trasladar su campo de acción de la carretera a la tercera ciudad en importancia del país: Cali. A esta ciudad arribaron más de cuarenta mil manifestantes que marcharon a lo largo de cientos de kilómetros; una vez allí le propusieron al presidente Uribe Vélez un debate público. El 26 de octubre el Gobierno aceptó la invitación, pero les propuso como escenario un canal de televisión en el marco de los denominados consejos comunitarios; La Minga decidió que debía ser en un espacio público, en una plaza y que debía estar moderado por un miembro de la movilización y uno del Gobierno. Uribe Vélez no llegó a la cita en una plaza céntrica de Cali (Granados, 2008).

Luego de conversaciones entre diferentes emisarios del Gobierno y La Minga, Uribe Vélez aceptó encontrarse con los manifestantes. Los dirigentes de la movilización establecieron como sitio de reunión La María, haciendo que el presidente fuera al espacio simbólico de los movimientos sociales. Uribe Vélez asistió a la cita el 2 de noviembre mas no aceptó ninguno de los puntos de reivindicación; pese a ello, el interés nacional y la imagen de las autoridades indígenas de cara al presidente confrontándolo, debatiendo sus tesis, contradiciendo sus postulados y planteando alternativas, fueron en sí un logro para el movimiento.

Dado que las demandas no tuvieron eco en el Gobierno, La Minga decidió marchar a Bogotá, no solamente para plantear en un espacio central sus reclamos sino para interlocutar con otros sectores sociales y organizaciones de base de todo el país. La caminata por las carreteras de Colombia a lo largo de más de 500 kilómetros, pasando por muchas regiones, ciudades y pueblos, tuvo un gran impacto, con gran cobertura de los medios de comunicación.

El 2 de diciembre luego de nuevas reuniones con el Gobierno, especialmente con el gabinete ministerial, La Minga decidió levantarse, pero anunció que seguiría como espacio de convocatoria de todos los pueblos. De allí en adelante, todos los 12 de octubre, La Minga se convoca como un encuentro con organizaciones sociales, intelectuales,

artistas, con lo cual ha trascendido la movilización para convertirse en el principal espacio de confluencia de sectores sociales en Colombia.

* * *

En las protestas por la democratización es de anotar la variedad de actores y la participación masiva de la ciudadanía aun sin tener vínculos con las organizaciones más consolidadas. Así, por ejemplo, en Ecuador, donde si bien el movimiento indígena siguió siendo importante, ya no fue el gran actor en dos de las protestas más relevantes en este país: en la llamada Rebelión de los forajidos el protagonismo fue de las clases medias urbanas, y en las jornadas del 5 de febrero los indígenas fueron uno de los actores, mas no el central. Un segundo elemento ha sido el carácter de lucha por el control del aparato de Estado, es el caso del movimiento indígena ecuatoriano, que pasó de ser el que se oponía a medidas específicas a luchar por la conquista del poder estatal, lo que se ilustró muy bien en las jornadas del 21 de enero.

En los casos de Colombia y Perú el eje fue la lucha contra el autoritarismo. En el Perú se presentó la confluencia de múltiples actores que se congregaron en la Marcha de los Cuatro Suyos, y en Colombia el protagonismo lo tuvo el movimiento indígena que desde lo local y regional logró postular movilizaciones de carácter nacional. Los gobiernos de carácter autoritario fueron los grandes oponentes, y las demandas fueron el fin de tales gobiernos y el desmonte de las políticas de militarización de la sociedad.

Un último elemento para considerar es el estado permanente de movilización en Venezuela de todos los sectores políticos y sociales: a lo largo del año 2003 salieron a la calle millones de venezolanos(as) y se enfrentaron en dos orillas políticas diferentes, los defensores del proyecto bolivariano de un lado y sus opositores en el otro bando. En este periodo las calles venezolanas fueron el principal escenario de lucha entre el Gobierno y la oposición; en ese sentido, si bien las elecciones fueron protagónicas, las marchas masivas definieron gran parte de la orientación política de ese país. Las calles fueron colmadas por todas las clases sociales y a lo largo de un año se puede afirmar que casi todos los sectores representativos de la sociedad venezolana se movilizaron.

Los movimientos indígenas

En América Latina, la década de los años noventa del siglo xx se ha destacado por ser el momento de la irrupción de los movimientos indígenas. Esto no quiere decir que los indígenas no estuvieran organizados antes o no se movilizaran. El cambio significativo de los años noventa fue el nivel de visibilización y convocatoria de otros sectores que lograron estos movimientos.

La década de los noventa es el momento en el que las luchas de los pueblos indígenas lograron convocar a otros y articularse con otras luchas: fue el momento en que la causa de los derechos indígenas dejó de ser solo de las comunidades y a su vez arropó como suyas las causas de otros sectores sociales, pero el eje articulador es la pertenencia étnica, por esto para comprender las protestas indígenas se precisa acercarse al concepto de etnicidad:

La etnicidad alude a factores socioculturales, simbólicos, normas comunes, pautas de conducta, lengua, organización social, tradición histórica, entre otros, que caracterizan, en rigor, a todas las colectividades humanas. Como tal, la etnicidad es una categoría constitutiva de todos los actores sociales. Atraviesa, siempre atravesó, la formación de las clases trabajadoras y de las poseedoras. Cada grupo social tiene su propia configuración étnica. Pero no todos los grupos sociales convierten la etnicidad en la marca de su cohesión identitaria, en el sello distintivo de su movilización social, en la fuerza expresiva de su acción colectiva. Los distintos grupos indígenas [...] lo hicieron y prefirieron explícitamente la identidad india a la identidad campesina [...] la afirmación pública de un proyecto político sustentado en la identidad étnica ha sido llamada la “etnicidad politizada”. Hacerlo ha exigido al movimiento y a sus dirigentes ubicar los aspectos que

le permiten diferenciarse del resto de la sociedad y, en ese mismo acto, reconocerse como nosotros. (Guerrero y Ospina, 2003, p. 84)

Y esta etnicidad politizada se expresa en contextos en donde los países de América Latina contienen dinámicas de negación de lo indígena o de asunción de estos aspectos como exóticos o de integración que los niega. Y esta es la segunda esfera de sus movilizaciones, la lucha por el reconocimiento no implica solo el respeto a su cultura sino el cambio de instituciones políticas y sociales que los ha tratado como pueblo que se debe “civilizar” o sencillamente que los ha negado como parte de un Estado-nación. Si la lucha indígena en Latinoamérica es esencialmente por esa etnicidad politizada, su marco de incidencia, su demanda central, su oposición fundamental es contra lo que se conoce como el colonialismo interno:

La definición del colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de conquista en que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Estado que adquiere una independencia formal, o que inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo o de recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones colonizados por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional: habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo; sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de “asimilados”; los derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central; en general, los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una “raza” distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es considerada “inferior” o, a lo sumo, es convertida en un símbolo

“liberador” que forma parte de la demagogia estatal; la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la “nacional”. (González, 2006, p. 410)

Este concepto sirve para entender cómo casi 200 años después de las independencias latinoamericanas, los indígenas reclaman ahora la independencia de su sujeción interna, mas no la separación de cada país. Esta reivindicación implica pensar un Estado con múltiples naciones, lo que rompe el paradigma eurocéntrico del Estado-nación sobre el que se construyeron las repúblicas andinas en el siglo XIX.

Estos son los dos ejes centrales para entender el desarrollo de los movimientos indígenas, lo cual implica que, para su comprensión, no se puede abordar solamente desde las protestas por los derechos indígenas, como se examinaron las movilizaciones contra el neoliberalismo y por la democratización. En este caso, se requiere profundizar en su historia y las estructuras organizativas que sostienen a los movimientos.

En los siguientes apartados del presente capítulo se exponen las dos dimensiones señaladas. La exposición está organizada empezando por el movimiento más estructurado y organizado de la región, el ecuatoriano; luego se expone el del país con mayoría indígena, Bolivia y, por último, el caso del movimiento indígena del Cauca colombiano, el cual ha sido central en la acción colectiva de este país en las dos últimas décadas.

El Movimiento Indígena Ecuatoriano

La historia del Movimiento Indígena Ecuatoriano (MIE) se puede clasificar en seis momentos: 1) los antecedentes, 2) los orígenes; 3) la irrupción del MIE; 4) la lucha por el poder; 5) la participación en el Gobierno nacional 6) el reflujo y reacomodamiento organizativo.

- Antecedentes (1946). Parte de la creación de la Federación de Indios del Ecuador. Esta fue una organización creada por el Partido Comunista del Ecuador. Su eje de acción era más el de las tierras y no recuperaba la cuestión de la identidad (Guatemal, 2006).
- Orígenes (1970-1990). Se crearon organizaciones de tipo regional, ya con voz propia y que empezaron a reivindicar la

identidad como indígenas, se destaca la creación de ECUARUNARI (1972). En este periodo fue importante la influencia de los sectores progresistas de la Iglesia católica; se conformó la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es el antecedente inmediato de la CONAIE, la cual se fundó oficialmente en 1986 (Guatemal, 2006).

- La Irrupción (1990-1995). Es el momento en el cual el MIE aparece ante la sociedad ecuatoriana. Se destacan de este periodo el levantamiento de 1990 y las movilizaciones de 1992 por la campaña de 500 años de resistencia indígena, la cual buscó replantear la historia oficial de “descubrimiento” o “encuentro de dos mundos” que se llevaron a cabo con motivo de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas; así mismo, cabe mencionar su segundo levantamiento, el de 1994, el cual lo ubica en un escenario de interlocución directa con el Gobierno nacional. A partir de estos cinco años el MIE se convirtió en un referente obligado de la movilización social en el Ecuador, tanto es así que en torno suyo se creó la Coordinadora de Movimientos Sociales como espacio de articulación de múltiples sectores.

El referente más importante de esta época es el levantamiento del *Inti Raymi*. Este empezó con la toma de la iglesia de Santo Domingo en el centro de Quito el 28 de mayo de 1990 y se extendió a toda la sierra ecuatoriana y gran parte del país hasta el 8 de junio, cuando se dio por terminado luego de la conformación de una mesa de negociación entre el Gobierno del Ecuador, presidido por Rodrigo Borja (1988-1992) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El impacto del levantamiento fue de gran trascendencia para el movimiento indígena, algunos autores (Guerrero y Ospina, 2003) han manifestado que la CONAIE es mucho más el fruto del levantamiento que su productora y es que si bien esta organización ya existía desde el año de 1986, es con esta movilización que se dio a conocer ante la sociedad ecuatoriana.

El levantamiento del *Inti Raymi* fue la primera gran movilización indígena contemporánea en el Ecuador y en América Latina y tuvo como principal efecto el ubicar al movimiento indígena, en particular a su

principal organización la CONAIE, como un actor central en la vida política de este país. Más allá de las agendas en concreto que lograron en esta primera movilización, retomamos el término empleado en un libro ecuatoriano que bautizó esta acción como un verdadero sismo étnico en Ecuador (Almeida, 1993): dado que esta acción fue el momento de inflexión de lo étnico en el país andino, los indígenas pasaron de ser actores aislados a convertirse en un actor político con capacidad de presionar cambios en los diferentes gobiernos y generar profundas transformaciones en la sociedad ecuatoriana y en el movimiento indígena latinoamericano.

- La lucha por el poder estatal (1995-2003). Sin abandonar su agenda y profundizando en ella, el MIE entró a la disputa por la conducción del Estado y no solo a la reivindicación frente a autoridades específicas, tanto es así que decidió conformar un partido político, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUP Pachakutik) con lo cual, sobre la base del movimiento social se aspira a ser poder político en las instancias estatales, tanto a nivel parlamentario, gobiernos locales y en disputa por la presidencia del país. Así mismo, participó de manera activa en dos insurrecciones populares, contra dos presidentes, uno como parte más del abanico de organizaciones —en la caída de Bucaram— y otro como actor protagónico —en la caída de Mahuad y la breve toma del poder la noche del 21 de enero de 2000—. Esta etapa culminó en la coalición que conformó con Lucio Gutiérrez, coalición con la que ganó la presidencia en 2003. Luego de seis meses en el gobierno el MIE rompe con Gutiérrez y pasa a la oposición, a causa de la conversión de Lucio al neoliberalismo y su cercanía con los Estados Unidos de América.
- El reflujo (2003-2006). En este periodo, quizá fruto de la gran crisis que significó la frustrada participación en el gobierno de Gutiérrez el MIE entró en un reflujo organizativo. Otra de las razones del reflujo es que surgió otro movimiento, más de opinión y de fuerza electoral, que culmina con la elección de Rafael Correa, quien recogió gran parte de las banderas del MIE y llevó a cabo reformas que eran parte de las principales

demandas del movimiento, tales como el desmonte paulatino del neoliberalismo; la no renovación de la base de Manta y, por ende, la independencia en política exterior frente a los Estados Unidos; y la convocatoria de una nueva constituyente, en donde se consagraron temas como la mayor garantía de los derechos de las comunidades indígenas, entre otras.

En relación a la composición del MIE, su base es la CONAIE y también sectores no indígenas (De la Torre, 2010, pp. 147-151). Los sectores no indígenas que han participado en el MIE van desde los campesinos, los que se agruparon a finales de los ochenta en la coordinadora de conflictos agrarios, la cual era una instancia de centralización de las denuncias en torno a los conflictos agrarios en la sierra ecuatoriana (Barrera, 2001a, p. 116); en segundo término, estarían sectores urbanos de izquierda que se congregaron en torno a la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) que surgió en el año de 1995 y que estaba conformada por la CONAIE; la CONFEUNASSC (Confederación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino); la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPAC) y movimientos de pobladores urbanos y organizaciones de mujeres y jóvenes. Esta era una opción de la izquierda social, que se diferenciaba de la izquierda tradicional, la cual contaba con su Frente Popular conformado por el profesorado público y los gremios estudiantiles; el movimiento popular democrático, partido de origen maoísta (MPD); la otra era el Frente Unido de trabajadores (FUT), en donde se articulaban centrales sindicales y se expresaba en la izquierda socialista y comunista (Ramírez, 2010).

Si se analizan las principales acciones del MIE en toda su historia, ha estado acompañado de múltiples actores, menos visibles y menos estudiados en la literatura especializada, pero determinantes en la capacidad de movilización, en los levantamientos de 1990 y 1994 con los campesinos, en el de 2000 y 2006 con los sindicatos y movimientos estudiantiles (de secundaria); en el 2000 con sectores de izquierda y los militares, y en 1997 en la caída de Bucaram con un abanico de fuerzas sociales de casi todos los sectores del país.

En relación a la organización del movimiento social central del MIE, la CONAIE es una organización que agrupa en su seno a los siguientes pueblos:

Tabla 1. Nacionalidades indígenas socias de la CONAIE

Región amazónica	Región de la sierra	Región de la costa
Shuar, achuar, siona, secoya, cofán, waorani, zapara, shiwiar, andoa y kichuas	Palta, sarakuru, kañari, puruwà, otavalo, tomabela, salasaca, kisapincha, waranka, kitukara, kayampi, otavalo, karanki, natabuela y pasto	Tsachila, epera, chachi, awa, manta y wankavilka

Fuente: elaboración propia, basada en CONAIE (2010).

Así mismo, hay dos organizaciones regionales que son las dos tendencias principales de la organización: la Confederación de los Pueblos y Nacionalidades Kichua del Ecuador (ECUARUNARI) que agrupa a los pueblos de la sierra, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) (Guatemal, 2006).

Estas dos organizaciones representan dos de las tres principales tendencias políticas en la CONAIE: ECUARUNARI tiene una vocación más clasista, en gran parte a causa de su origen muy ligado a sectores de la izquierda ecuatoriana de los años setenta, así como a su sensibilidad sobre temas como la reforma agraria que han sido centrales en su región; la CONFENIAE hace énfasis en la reivindicación de las defensas de sus costumbres y su territorio por las propias características de la Amazonía; habría un tercer sector conformado por los indígenas de Otavalo-Cotacachi, con una reivindicación más concentrada en lo étnico, en gran parte porque sus dirigentes no son propiamente campesinos sino esencialmente empresarios y comerciantes (León, 2009, p. 81).

En cuanto a las demandas del MIE, estas incluyen la lucha por la democratización, contra el modelo neoliberal y la defensa de su especificidad étnica. En relación con la democratización el MIE se adentra en la lucha política conformando un partido político y entra a participar en diferentes instancias gubernamentales.

Otro de los elementos centrales es el de la dinámica de democracia directa que han instaurado con iniciativas como la del *parlamento de los pueblos*, idea que consistía en plantear instancias alternativas a las instituciones políticas tradicionales del Ecuador.

Por otro lado, el MIE es el gran protagonista de la lucha contra el neoliberalismo en el Ecuador, si bien, como ya se ha dicho, otros actores han desempeñado un papel fundamental, su capacidad de tomar como

propias las banderas de la lucha contra el modelo y dado su carácter innovador en la década de los noventa es innegable, que la lucha contra el neoliberalismo se convirtió en la principal veta de crecimiento del movimiento. Esta lucha fue la que le permitió ser una fuerza nacional con convocatoria, capacidad de interlocución con el Estado y visibilidad frente a otros movimientos sociales del continente.

Quizá lo más importante de este movimiento es que su lucha no es solo por políticas de inclusión, sino que aboga por una agenda de refundación del Estado, uno plurinacional, lo cual implica un cambio substancial del Estado ecuatoriano, el cual no puede seguir fundamentado en el principio de “un Estado, una nación”, sino “un estado, muchas nacionalidades”.

El movimiento indígena y popular en Bolivia

En Bolivia, a diferencia de Ecuador o Colombia, no existe una organización nacional que sea el núcleo del movimiento indígena, este es mucho más dinámico y en él operan múltiples organizaciones, con diferentes agendas organizativas y diferentes reivindicaciones. Así mismo, en las dinámicas de varios de los movimientos sociales es difícil encontrar las fronteras étnicas, si bien hay un fuerte énfasis indianista en los procesos de los aymaras del altiplano, en términos generales en todos los procesos la dimensión étnica es sobresaliente, así como la confluencia con lo campesino y lo rural, de allí que se deba hablar de lo indígena-popular en Bolivia y no solo de la raíz indígena (García Linera, 2001; García Linera, 2009; García Linera, 2010).

La temporalidad es también un desafío, es complejo afirmar cuándo empiezan los actuales movimientos sociales que protagonizaron las llamadas guerras (del agua, de la coca y del gas) y que se convirtieron en el centro de la acción colectiva. La dificultad radica en que si bien muchos de los actuales movimientos sociales pueden encontrar antecedentes en sus agendas que los inspiran desde la misma época de la Colonia con las resistencias indígenas, no es posible encontrar las formas contemporáneas sino hasta mediados de los ochenta y la misma década de los noventa del siglo xx. La razón es que hasta los años

ochenta, del siglo en mención, la acción colectiva de los movimientos sociales se articulaba casi que exclusivamente a través de la Central Obrera Boliviana (COB).

García Linera (2001) plantea que los cambios del modelo de desarrollo hacia el neoliberalismo implementados desde 1985 deshicieron la forma de sindicato, característica de las formaciones sociales de Bolivia desde al menos 1952. Hasta los años noventa la forma hegemónica de acción colectiva era la COB, la cual era la que definía las nociones básicas de la política desde la ciudadanía. A lo largo de los años ochenta, sin embargo, esta se deshizo y dio paso a una crisis de organizaciones y movimientos sociales, y desde 1985 casi hasta el 2000 la presencia de actores colectivos con capacidad de movilización era casi inexistente. En este interludio, sin embargo, iba emergiendo lentamente lo que después sería el motor de las grandes movilizaciones del primer lustro del siglo XXI.

A medida que avanzaba el momento crepuscular de la COB, otras estructuras de acción colectiva, muchas de las cuales habían estado desde tiempo atrás en silencioso proceso de preservación, comenzaron a rearticularse a partir de otras bases organizativas, de otros repertorios culturales y otras demandas. La mayoría de estas organizaciones reivindicaban unas prácticas y una memoria indígenas, y a partir de una politización de la cultura, el territorio y las necesidades básicas, desde los intersticios en los había resistido a la oleada de simulación modernizante, comenzaron a tejer redes de asociación territorial, con creciente capacidad de unificación y presión ante el Gobierno:

Pero será abril de 2000 el que marcará un punto de inflexión en las demandas y la capacidad de movilización sociopolítica de los movimientos sociales. Articuladas en torno a la conquista de necesidades básicas y la defensa de recursos territoriales de gestión comunitaria, pequeñas estructuras organizativas locales de tipo territorial y no territorial basadas en el lugar de residencia, en el control de bienes como la tierra y el agua, en la actividad laboral, gremial o simplemente de amistad, han ido creando redes de movilización colectiva que han puesto en pie a nuevos movimientos sociales. (García Linera, 2010, p. 15)

Estos movimientos sociales contemporáneos en Bolivia se articulan esencialmente desde tres estructuras organizativas: los de los campesinos de Cochabamba aglutinados en la Coordinadora en defensa del agua y la vida (la Coordinadora), la de los aymaras del altiplano, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y los cocaleros del Chapare boliviano, en la Coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba (Coca Trópico). Estos tres procesos confluyeron en los diferentes momentos de insurrección popular que ya hemos analizado. Como se aprecia en la siguiente tabla, cada uno de estos procesos organizativos tiene un área de acción y mayor influencia, así como un eje reivindicativo central.

Tabla 2. Estructuras organizativas de los movimientos sociales indígenas y populares de Bolivia

	CSUTCB	Seis federaciones	Coordinadora del agua
Ámbito geográfico	Tienen influencia en casi todos los departamentos de Bolivia, pero su mayor área de acción está en el departamento de La Paz	En el departamento de Cochabamba, particularmente en el Chapare	Tiene influencia en casi todo el departamento de Cochabamba pero se concentra en el centro del mismo
Sectores sociales	Indígenas aymaras y campesinos	Colonos e indígenas	Muy diversos, ciudadanía en general, clases medias urbanas y campesinos regantes (que administran de forma comunitaria el agua)
Principal reivindicación	Refundación del estado y creación de la República de Indios	La lucha contra la erradicación de la coca y la construcción de un estado nacional popular indígena	La lucha por el agua y contra el neoliberalismo, así como la reforma del estado boliviano en beneficio de los sectores populares

Fuente: elaboración propia, basada en García Linera (2010).

Cada uno de estos procesos organizativos participó en las llamadas tres guerras, si bien en la del agua el protagonista inicial fue la Coordinadora, a esta se sumaron rápidamente los aymaras del altiplano; la de la coca tuvo como eje a las seis federaciones y la del gas fue el momento donde las tres estructuras organizativas confluyeron, junto a otras de todo el país, lo que hizo que la protesta tomara ribetes revolucionarios.

La primera organización que se debe analizar es la Coordinadora en defensa del agua y la vida (la Coordinadora), la cual surge en Cochabamba, un territorio muy sensible frente al tema del agua, dado que allí hay un alto nivel de sequías constantes que hacen que desde tiempo atrás la administración del líquido vital sea uno de los ejes centrales de preocupación de autoridades y ciudadanía en general. La Coordinadora surge en el contexto de reformas institucionales tendientes a privatizar el manejo del agua en Cochabamba en el año de 1999 y como confluencia de asociaciones de regantes (autoridades comunitarias que administran el agua) y la federación de fabriles de Cochabamba, así como una decena de organizaciones cívicas de diferentes orígenes.

La Coordinadora como tal no tiene una estructura organizativa, es el nombre que le han dado los actores a la confluencia organizativa, lo que provocó incluso que en el marco de las movilizaciones de la Guerra del agua muchas personas creyeran que se trataba de una señora que dirigía las movilizaciones; así mismo, el Gobierno no la reconoció durante un tiempo como interlocutora válida, puesto que no tenía existencia legal (Gutiérrez Aguilar, 2009). Tuvo plena existencia en el momento de las movilizaciones, surgió para esto y allí se posicionó, logró ser punto de confluencia de encuentro dando la posibilidad de que se construyeran múltiples liderazgos, de características más colectivas, lo cual hizo que incluso su liderazgo plural la convirtiera en actor fundamental en el entramado de los movimientos sociales en Bolivia, al llegar a ser una suerte de mediador de conflictos entre otros actores más estructurados y con liderazgos más definidos.

La Coordinadora encontraba en las asambleas uno de los escenarios centrales de deliberación, de encuentro y confluencia de acción colectiva; así mismo el punto de mayor concentración era el cabildo,

el cual en los momentos de la Guerra del agua logró reunir hasta cien mil personas, en estos se tomaban las grandes decisiones, que afectaban a todas las redes sociales que atravesaban a la confluencia de organizaciones.

La segunda de las organizaciones objeto de análisis es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la cual es de origen campesino pero que en los últimos años tiene una fuerte tendencia indianista. Surge en el año de 1979, en el contexto de la ruptura del pacto estatal-sindical, por lo que es una organización con relativa autonomía del Estado. Desde sus orígenes han existido dos tendencias en confrontación en su interior: la de la izquierda nacionalista y la katarista, por lo que su historia ha estado marcada por fluctuaciones entre estas dos corrientes; así, en sus orígenes, entre 1974 y 1979, los kataristas (indianistas) lideraron la conformación de la organización. En 1988 la izquierda retomó el mando de la central, pero en 1998 fue elegido Felipe Quispe, el máximo representante de la tendencia katarista, que aboga por un estado indio autónomo y por la reconfiguración de la república aymara.

Este dominio katarista se ve expresado a nivel nacional, dado que desde esta organización se lidera la oposición a Evo Morales como dirigente social indígena y campesino. En consecuencia, el katarismo se convierte en el principal contradictor de esta figura social, desde los movimientos y organizaciones sociales. En el año 2000 forman un partido indianista, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), que se convierte en la alternativa al partido de izquierda nacionalista liderado por Morales, el MAS. En el año 2001 se profundizó la tendencia indianista y se aprobó en su seno la línea de emancipación india mediante la recuperación del poder y el territorio, e inclusive se aprobó la posibilidad de cambiar el nombre, en donde se hiciese más visible el proyecto indianista.

Otro de los elementos centrales se da en el marco de los procesos de movilización en donde la CSUTCB es protagonista central, según García Linera en estos años, desde el 2000, el discurso indianista pasó de ser exclusivo de unas élites indígenas y se amplió a las bases sociales del movimiento. Los aymaras son la base social de esta organización, que en el panorama actual boliviano es la protagonista de la reivindicación

más radical desde el indianismo y se presenta como la voz heredera de las luchas indígenas más antiguas en Bolivia; su apuesta es concreta: la creación de la República indígena. El eje de sus movilizaciones es la lucha por el territorio, por la autodeterminación y la defensa de sus autoridades, así mismo, su rol fue destacado en las guerras del agua, la coca y el gas.

En otro sentido, está la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (Coca Trópico), la cual si bien tiene una fuerte presencia indígena se caracteriza por ser una organización de colonos que llegaron a las tierras del Chapare en busca de oportunidades ante diferentes crisis económicas en sus sitios de origen.

Estos colonos encontraron en la producción de la hoja de coca un medio de subsistencia y así fueron no solo abriendo la selva para construir nuevas poblaciones, sino que además fueron construyendo el territorio en donde, aunque hay cultivos de subsistencia, la coca sí es la base de sus ingresos.

Por ser una zona de colonización, la articulación de las diferentes instancias organizativas no surge desde sus inicios, primero surgieron federaciones locales que se encargaban fundamentalmente de ayudar en la ocupación del territorio. El proceso de articulación se dio desde 1988 y se concretó finalmente en 1992.

La dinámica de la persecución a los cultivos de coca, fruto de la política internacional de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas y a la cual los gobiernos bolivianos se articularon desde finales de los ochenta hizo que los niveles de movilización y defensa de sus territorios fueran en ascenso. Desde 1987 y a lo largo de los primeros años de la década de los noventa, las seis federaciones fueron tomando mayor fuerza al ser las que articulaban las movilizaciones contra la erradicación de los cultivos de coca, así mismo, la represión fortaleció la necesidad de unidad.

El eje de la toma de decisiones se convirtió en una instancia a la que llaman el pleno de las federaciones, allí los diferentes voceros de las mismas eran los que tomaban las decisiones por consenso.

Si bien las seis federaciones no tienen un nivel de bases sociales tan numeroso como otras organizaciones sociales de Bolivia, sí tienen un nivel de cohesión que hace que ante una decisión del pleno se movilicen casi todas las familias y organizaciones vinculadas.

La reivindicación indígena se encuentra en la posibilidad de la autodeterminación, pero lo que los congrega es esencialmente la lucha contra la erradicación de la coca y por esa vía contra la militarización.

De su seno surge el partido político Movimiento Al Socialismo (MAS), y uno de sus principales dirigentes es Evo Morales, de allí se emanan el proyecto de izquierda nacionalista que en la actualidad se encuentra en el poder en Bolivia.

Como se ve, tienen una centralidad poblacional, regional y un énfasis especial en cada tema, pero en los grandes levantamientos, especialmente en la Guerra del gas, actuaron de manera conjunta, lo cual hizo que pareciesen un solo movimiento social, no obstante, en la Bolivia actual no existe como tal un solo movimiento indígena, sino múltiples, de carácter regional que se han articulado en momentos específicos.

Adicionalmente, es de destacar que en dos de los casos analizados surge la necesidad de combinar las luchas sociales callejeras, las movilizaciones en las carreteras y las tomas y bloqueos con el escenario electoral; del seno de estas organizaciones surgieron dos partidos políticos, uno de ellos ocupa hoy la dirección del Estado.

Para concluir, es claro lo que plantea Pablo Mamani (2011) cuando dice que en Bolivia existían tres proyectos políticos en disputa: aquel que buscaba la refundación del Estado y la creación de la República de Indios, el cual claramente estaba liderado por Felipe Quispe y la CSUTCB; aquel que abogaba por reformas sociales que posibiliten los mejores materiales de la población, así como incluir a los diferentes sectores de la sociedad boliviana, este sería el que lidera el MAS y desde las seis federaciones, y el tercero, que analizamos en el capítulo 2, sería el de las élites liberales que no están de acuerdo con ninguno de los anteriores y buscan revertir los cambios del primer lustro del 2000, para volver a la democracia pactada característica de los años ochenta.

El movimiento indígena del Cauca, Colombia

¿Qué es lo nacional? La pregunta viene a colación dado que en este análisis he planteado la necesidad de priorizar las movilizaciones y

movimientos de alcance nacional. Para responder esta pregunta en relación con los movimientos sociales es preciso indicar que lo nacional no es solo lo que se encuentra en todos los confines de un territorio de un país sino aquello que recoge su conflictividad social. En ese sentido, el caso del movimiento indígena del Cauca es emblemático: es la historia de un movimiento que surge en los años setenta en las montañas del sur de Colombia, en un territorio relativamente aislado de los principales centros políticos y que logra en cuarenta años convertirse en uno de los principales movimientos sociales del país porque se ubica en el centro de debates nacionales, por ejemplo, la lucha por la reforma agraria, la apertura democrática, la lucha contra la guerra y la búsqueda de alternativas al modelo de desarrollo neoliberal (CRIC, 1989; Archila, 2005, pp. 399-407; Archila, 2009; González, 2006; Vega Cantor, 2002, pp. 17-122).

Este movimiento tiene tres ámbitos de acción: el primero es su carácter regional, el cual está en la lucha por su territorio y en defensa de los derechos indígenas en el departamento del Cauca; el segundo se despliega a nivel nacional en la lucha indígena del país y consiste en lograr la unidad de todos los pueblos indígenas de Colombia; y el tercero es el de las luchas sociales intersectoriales que cobija a múltiples organizaciones tanto indígenas como campesinas, afrocolombianas, de derechos humanos, estudiantiles e intelectuales, esta última dinámica es la que se conoce como La Minga o Congreso de los Pueblos. La organización que ha impulsado todos estos procesos es el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Es emblemático el papel del movimiento indígena del Cauca en un país como Colombia, en donde si bien existe una sociedad pluriétnica, la población indígena representa apenas el 3.4 %; a pesar de su poco peso demográfico, en el plano de las luchas sociales su significado es muy alto, lo cual muestra que no existe un determinismo en la cantidad poblacional y la capacidad de movilización.

La historia del movimiento indígena del Cauca se puede organizar en cuatro momentos: 1) los antecedentes; 2) la recuperación de la identidad indígena; 3) la irrupción nacional; y 4) la articulación intersectorial, La Minga.

- Los antecedentes, las luchas de Manuel Quintín Lame (Vega Cantor, 2002). Los referentes de las luchas indígenas del siglo xx tienen su origen en las primeras movilizaciones indígenas del siglo xx, lideradas por el indígena Manuel Quintín Lame, las cuales tuvieron su auge entre los años 1915 y 1917, y se extendieron a otras zonas del país en la década de los veinte. El centro de su lucha se puede sintetizar en los siguientes cuatro aspectos: 1) defensa de los resguardos y oposición a que fueran divididos y vendidos; 2) consolidación del cabildo indígena; 3) recuperación de tierras arrebatadas por terratenientes; y 4) liberación de terrazgueros y rechazo al pago de terraje (Vega Cantor, 2002, p. 120).

Estas movilizaciones fueron cruciales en el suroccidente de Colombia (particularmente en los departamentos de Cauca y Tolima) para la lucha indígena. Quintín fue muy perseguido en su época, pero esto lejos de mermarlo hizo que se convirtiese en una leyenda; así, en la actualidad es una de las fuentes de inspiración de los indígenas de todo el país. Otro de los aportes centrales fue el de la lucha legal, que consistía en la recuperación de títulos antiguos que demostraban que las tierras ocupadas por terratenientes les pertenecían a los indígenas.

- La construcción organizativa (1971-1990) (CRIC, 1989). Luego de las luchas indígenas de las décadas de 1910 y 1920, las movilizaciones pasaron por un reflujo por cerca de cuatro décadas, hasta que en la década de los sesenta y en el marco de una política gubernamental de reforma agraria, los indígenas se articularon a estas luchas, pero como campesinos; entonces, hicieron parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que ha sido la mayor organización campesina en la historia de Colombia. En estos años se contó con gran influencia de sectores de izquierda y de la Iglesia católica, en particular, la tendencia de la teología de la liberación. En ese sentido, su identidad indígena no era central, aunque estaba presente: primaba la identidad de clase sobre la étnica.

En 1971 se empieza a cambiar esta relación cuando en el departamento del Cauca nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, el cual se concentró en recuperar su tradición indígena. Este debate sobre la etnicidad se trasladó al seno de la ANUC y es así como un año después, en 1972 se creó una secretaría indígena en la organización campesina y fue creciendo el debate sobre la necesidad de instancias indígenas. Esto llevó a que en diferentes encuentros de la ANUC se hicieran reuniones de indígenas; en ese marco se fundó el periódico *Unidad Indígena*, que hasta la fecha es considerado como un referente de los debates nacionales indígenas, estas acciones no fueron de buen recibo en la ANUC por lo que los indígenas decidieron separarse de dicha asociación en 1977. Tres años después celebraron el primer congreso nacional indígena y en 1982 se creó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que logró congregar al 90 % de los pueblos indígenas del país.

De manera simultánea en los departamentos del Cauca y Tolima surge en los años ochenta una guerrilla indígena que luchaba por la recuperación de tierras y en defensa de la autonomía frente a otros grupos insurgentes y el Estado, esta experiencia se conoció como el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), que tenía una fuerte presencia social entre los indígenas de base.

En este periodo los principales logros del movimiento fueron el fortalecimiento de los cabildos indígenas y de los resguardos, así como la recuperación de tierras y tradiciones, podría decirse que si bien los indígenas participaban de otras luchas sociales en estos años, su centro fue el trabajo organizativo en las comunidades y la consolidación de organizaciones identitarias hasta llegar a la instancia nacional.

- La irrupción institucional (Gros, 1993). Este periodo se caracteriza por la asamblea nacional constituyente de 1990 y la posterior aprobación de la nueva Constitución de 1991, así como la desmovilización y la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla indígena MAQL.

La asamblea nacional constituyente que sesionó en 1990 trajo como sorpresa la elección de dos representantes indígenas que fueron elegidos con la votación urbana no indígena. La Constitución de 1991 cambió el panorama de derechos étnicos en Colombia y abrió otra veta política para el movimiento indígena, esta fue un gran progreso para los derechos indígenas, posibilitó que Colombia se declarase como un país multicultural y que reconociese en la carta a las comunidades indígenas y afrodescendientes como sujetos de derechos grupales, garantizó el derecho y la promoción de su lengua, la administración de sus territorios (excluyendo el subsuelo), la justicia propia, la educación bilingüe, la administración de recursos para la salud y el respeto a sus autoridades tradicionales en su territorio.

¿Cómo una población tan pequeña en términos demográficos logró esto? Christian Gros (1993) indica que fueron cinco las razones de estas movilizaciones y logros: 1) la crisis de la pequeña producción campesina, que hizo necesario presionar por reformas y apoyos gubernamentales; 2) el crecimiento demográfico que hacía que las tierras asignadas no fuesen suficientes; 3) el desenclaustramiento del mundo, que fue posible gracias al acceso de varias comunidades indígenas a la educación; 4) el apoyo de agentes no indígenas, especialmente de la izquierda y sectores progresistas de la Iglesia católica (teología de la liberación), que les permitieron contar con canales de reclamación, así como formación política de los líderes indígenas; y 5) la afirmación de una identidad positiva en oposición al racismo.

Con estas razones y aunadas a los acumulados organizativos, el movimiento indígena irrumpió en la escena electoral y en las instancias del Estado. A partir de la Constitución de 1991 logró una circunscripción especial para el Senado y la Cámara de Representantes, que hace que se garantice la presencia indígena en el Congreso de la República, esto va acompañado de la creación de partidos políticos indígenas como la Alianza Social

Indígena y Autoridades Indígenas de Colombia, el triunfo electoral en varios municipios y el triunfo más sonado en la historia del movimiento, el de la elección popular de un gobernador indígena, Floro Tunubalá, en el departamento del Cauca. Por primera vez en la historia de Colombia un indígena llegaba a una instancia de tal responsabilidad política. En esta etapa el movimiento indígena le apostó a la vía institucional y electoral y logró dos grandes resultados y cambios concretos: leyes en defensa de lo indígena y más tierras.

Hay que anotar que las modalidades de lucha del movimiento indígena no se limitaron solamente a la acción institucional, en este periodo hubo también movilizaciones, toma de tierras y otro tipo de acciones de movilización. Se destaca la de 1992, que se denominó como “campaña de autodescubrimiento: 500 años de resistencia indígena, campesina y popular” y que consistió en una serie de acciones en contra de las conmemoraciones oficiales de los 500 años de la conquista de América.

No obstante, estos logros, el conflicto armado de Colombia y el militarismo estatal que se acrecentó en la década de los noventa se convirtieron en el principal mecanismo desde el Estado y los grupos paraestatales de limitar estos derechos, en particular la permanencia en los territorios, así mismo, la insurgencia en su escalamiento del conflicto dejó en el medio de la guerra a las comunidades y violó así su autonomía política y organizativa.

- La confluencia popular, La Minga. Desde mediados de los años noventa el movimiento indígena del Cauca priorizó la lucha por la paz y por la resistencia civil contra el conflicto armado que padece Colombia, esto sin abandonar las otras agendas de movilización. Este énfasis se articuló a la lucha contra los tratados de libre comercio, las multinacionales y el modelo económico neoliberal imperante en Colombia. Las acciones de movilización por la paz comenzaron en la defensa de la autonomía de los territorios y la población indígena en relación a los diferentes actores del conflicto, incluido el Estado. Esta

afirmación fue una de las herramientas para pasar de hermanarse con otras luchas de diferentes sectores, como había sido la tradición, a liderar a lo largo de toda la década de 2000 una gran confluencia social denominada La Minga.

Las dos principales acciones de paz que emprendieron, y que se sumaron a las anteriores sin abandonarlas, fueron la creación de la Guardia Indígena y de un territorio de convivencia (La María Piendamó); además, se articularon a las diferentes expresiones del movimiento por la paz y el respeto de los derechos humanos (González, 2006, pp. 143-144).

La Guardia Indígena es una instancia de afirmación de la autonomía, es la representación del poder indígena, surge en el 2001 y es una forma de autocontrol de las comunidades que ejercen funciones de vigilancia, con los bastones de mando como única “arma”, símbolo de la autoridad, pero lejos de ser un arma como tal. La Guardia ha ganado gran renombre por acciones de protección a miembros de las comunidades indígenas, así como escenario de trámite de conflictos, al punto que, en múltiples movilizaciones no solo indígenas, se ha convertido en la que se encarga de la seguridad de manifestantes, la que regula espacios y, por ende, la que organiza la dinámica de las movilizaciones y las diferentes acciones colectivas.

Otra acción de afirmación por la paz fue la creación en 1999 de una zona conocida como “territorio de convivencia, diálogo y negociación”: La María Piendamó, lugar estratégico, por quedar en las inmediaciones de la carretera Panamericana (la principal del país), la cual es el escenario central de las movilizaciones del movimiento.

Este territorio fue pensado como un espacio de diálogo, reflexión y articulación con otros sectores sociales. Esta acción se produjo el 12 de octubre de 1999, en el marco de una movilización de gran envergadura que afectó la red vial nacional y concentró la atención del país en el movimiento indígena, el cual se movilizaba para exigir el respeto y la protección de sus derechos.

La creación de esta zona en el marco de una movilización social no era fortuita, era una respuesta simbólica a los diálogos de paz que adelantaba el Gobierno en ese entonces con la guerrilla de las Farc-EP, el mensaje era aplaudir el diálogo, pero exigir que también se pactara con los movimientos sociales:

Las comunidades indígenas del departamento del Cauca hemos decidido ofrecer uno de nuestros resguardos ancestrales a las organizaciones sociales del país como un territorio de convivencia, diálogo y negociación, buscando que el gobierno nacional concerte con las organizaciones cívicas y sociales, al igual que lo hace con la guerrilla. (Espinosa, 2004, p. 135)

A partir de allí, La María se convirtió en un escenario de confluencia nacional, que fue madurando año tras año como punto de encuentro, así en el 2001 se realiza la Minga por la vida, que reclamaba justicia por la masacre del río Naya ocurrida en abril de 2001, en donde un grupo paramilitar (extrema derecha) asesinó a decenas de pobladores indígenas. Esta minga, llevada a cabo en septiembre, centraba su atención en las condiciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos; en la misma senda se producen en 2004 el Congreso Itinerante Indígena contra la Violencia, que ya implicó una movilización de miles de indígenas por la vía Panamericana con dirección a la ciudad de Cali. Esta acción tuvo gran impacto nacional y regional y se convirtió en un escenario de denuncia y articulación con otros sectores sociales. Entre 2004 y 2006 convocaron el Congreso indígena y popular como expresión de movilización social y en busca de articulación de múltiples sectores, ya no solamente indígena; en esa misma vía, en el 2005, las comunidades indígenas del Cauca realizaron una consulta popular sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el resultado fue el rechazo de dicho acuerdo, con una votación de más del 90 %; en el 2008 se realizó la hasta ahora mayor acción de la Minga y del movimiento indígena del Cauca, en el 2010 se llevó a cabo el Congreso de los pueblos, el cual es ya la expresión de que la Minga sale del Cauca y se lleva a toda Colombia y a todos los sectores, este delibera en Bogotá; en el 2011 se lleva a cabo el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, en las ciudades de Cali y Cajamarca.

Desde 1999, cuando se instaló el territorio de convivencia La María, hasta la fecha, el movimiento indígena caucano logró trascender sus propias demandas como sector y convertirse en uno de los ejes de articulación de los diferentes procesos sociales en Colombia, muchos de ellos con gran capacidad de organización en el ámbito local, pero que

no habían tenido capacidad de proyección nacional. La dinámica de las mingas ha trascendido y se ha convertido en uno de los polos de movilización intersectorial en Colombia. El objetivo de estos espacios fue establecer un congreso de los diferentes pueblos de Colombia, para que deliberen y legislen de manera autónoma con miras a la construcción de otro orden social.

Desde el año de 1971 hasta el 2011 la historia de este movimiento pasa de romper con la ventriloquía a juntar las voces y liderar la articulación de las organizaciones sociales en una voz alternativa a las dinámicas políticas imperantes en Colombia. Los indígenas del Cauca pasaron en estos cuarenta años de no tener voz propia a ser los convocantes de múltiples voces.

* * *

Los tres movimientos analizados tienen antecedentes desde las décadas de los sesenta. Sus luchas en un comienzo estuvieron muy articuladas a las expresiones organizativas de los campesinos de cada país, y fue en los años sesenta y setenta que fueron organizándose como indígenas. En esas tres décadas conformaron organizaciones ya volcadas en su identidad indígena, configuraron sus propios hitos culturales y reafirmaron su identidad. Su aparición en el espacio público coincide con la crisis de los actores que comúnmente habían copado este espacio, en particular, los movimientos obreros y campesinos.

En relación con la forma como se han organizado, cada uno de estos movimientos ofrece un modelo diferente. Al del Ecuador se le puede denominar como el federalista, el cual está constituido por una organización central, con fuerza y capacidad de articulación de múltiples actores que se organizan en federaciones regionales, cada una de estas con un peso importante en lo nacional; el segundo modelo lo llamo rizomático y es propio de los bolivianos, consiste en que no se cuenta con una organización estable que articule, pero sí con finas redes, vínculos y muchas y muy fuertes organizaciones regionales o de pueblos; el tercero lo llamo el foquista y se caracteriza por tener un núcleo organizativo muy fuerte, concentrado en una región, con capacidad de Gobierno territorial y concentración de los mejores cuadros

políticos e intelectuales del movimiento y desde allí irradia hacia otras regiones, es el caso del Cauca en Colombia.

Los tres movimientos analizados han combinado en algunas de sus estructuras organizativas la lucha social con la lucha político-electoral. De su seno han surgido partidos políticos que se han disputado cargos de representación. Por otro lado, destaca el carácter político de estos movimientos. Estos han roto con la distinción tan afín a la teoría de los nuevos movimientos sociales, que plantea la separación de lo social y lo político en la acción colectiva contemporánea. En el caso del MIE, este se animó a pasar hacia la lucha política electoral y partidista, en ese contexto creó su propio partido, el Pachakutik, sin abandonar su carácter de movimiento social, lo que lo llevó a transitar a un movimiento sociopolítico que aborda de manera simultánea la lucha social, las reivindicaciones de sus sectores y la lucha política en su sentido más clásico, la del control del Estado; igual ha ocurrido con el “instrumento político” de un sector de los indígenas bolivianos que con la misma idea construyeron el MAS, e igual aconteció con el movimiento indígena colombiano que conformó la Alianza Social Indígena. En los tres casos esto se hizo sin desmovilizar el movimiento social, lo que hace que la acción sociopolítica no se haga por separado —de un lado el partido político y de otro, el movimiento social—, sino que se tenga que hablar de movimientos sociopolíticos que incluyen ambas dimensiones.

Para terminar, está el tema de la etnicidad y la clase. Lejos de haber sido solo étnicos, la construcción identitaria de estos movimientos no ha sido esencialista, al contrario, se han ido construyendo a partir de múltiples identidades, entre las que destacan al menos dos: la indígena y la campesina. Siguiendo a Archila (2009), los movimientos analizados pasan de la diáda campesino-indígena (énfasis en lo campesino) en la década de los setenta y parte de los ochenta, a la de indígena-campesino (énfasis en lo indígena) en los noventa y la primera década del siglo XXI.

Esto lleva a que, para el análisis de los movimientos indígenas, estos se deben abordar desde las diádas identitarias, es decir, se es indígena pero también se es campesino, lo cual articula la noción de clase-etnia y no se construye de manera esencial. La diáda en el momento de

la movilización no se despliega de manera separada, sino simultánea; la posibilidad de esta simultaneidad es la que permite la capacidad de articulación de los movimientos, dado que no solamente se trata de coordinar con otros sectores, sino que en su seno se encuentra esta doble identidad, lo que les permite desdoblar los discursos, las reivindicaciones, y más que hacer alianzas, ser voceros de demandas más allá de lo indígena. La fuerza de estos movimientos no estriba en su carácter estrictamente indígena sino en su capacidad de combinar esas dos esferas que les permitió, usando la metáfora del movimiento indígena ecuatoriano, ver con los dos ojos: el del pobre y el indígena.

Así, mientras la identidad étnica se concentra en el ser, la de clase posibilita la lucha por reivindicaciones materiales como la tierra (el tener) y en la lucha por tener se llega a una síntesis que se concreta en el estar (en el territorio). La posibilidad de contar con un espacio vital para la reproducción social de las comunidades indígenas no pasa solamente por la reivindicación de los espacios de cultivar la tierra sino por los de construir en un escenario específico esa triple condición: se es y se tiene estando en su territorio.

Conclusiones: la política de la calle y sus consecuencias en los países andinos

A lo largo de las décadas de los noventa y dos mil se derrumbaron todos los pactos políticos vigentes de la región andina, que eran los continuadores de los acuerdos que se habían firmado en las transiciones a las democracias, desde las más antiguas de la década de los cincuenta —los casos de Colombia con el Frente Nacional y de Venezuela con el Pacto de Punto Fijo— hasta las transiciones más recientes, como las de Ecuador, Bolivia y Perú. Si se hace un recuento de los partidos políticos que eran protagonistas al comienzo de la década de los ochenta, se encontrará que finalizando la primera década del siglo XXI ya no eran los mayoritarios, en muchos casos hasta desaparecieron y en otros si bien siguieron siendo importantes, como el Liberal y el Conservador de Colombia, no eran las fuerzas políticas hegemónicas de antaño. Otro elemento es que en cuatro de los cinco países hubo renunciaciones o destituciones presidenciales provocadas por movilizaciones sociales o crisis políticas: en Ecuador se presentaron tres destituciones, en Bolivia dos, y en Venezuela y Perú una.

En todos los países de la región se aprobaron nuevas constituciones: en Colombia en 1991; Perú en 1993; Ecuador en 1998 y 2008; Venezuela en 1999; y Bolivia en 2009. Estos cambios institucionales, sumados a las luchas por el tipo de modelo económico, hicieron que se configuraran tres proyectos que disputaron la dirección del Estado: el neoliberal con democracia mínima, el neoliberal autoritario y el posneoliberal caudillista. El primero se caracterizó por implementar el modelo neoliberal en un contexto de democracia mínima, tal proyecto

fue propio de los gobiernos de Bolivia entre 1985 y 2005; Ecuador de 1992 a 2006; Colombia de 1990 a 2002 y de 2010 a 2011, Venezuela de 1989 a 1999 y de Perú de 2000 a 2011.

El modelo neoliberal autoritario conservó las bases del modelo económico pero en un régimen político autoritario, el cual difiere de las dictaduras militares tradicionales de las décadas precedentes y se caracteriza por estar dirigido por civiles y por mantener gran parte de las formalidades de la democracia mínima, pero con un sistema de dominio basado en la violación sistemática de derechos humanos, la militarización de la sociedad y el despliegue de políticas demagógicas para conservar el apoyo de la población más pobre. Los regímenes característicos de este proyecto fueron los de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) y Álvaro Uribe Vélez en Colombia (2002-2010).

El tercer proyecto político surgido de este periodo, el posneoliberal caudillista, se materializó con el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia (Sader, 2008). Entre sus características fundamentales están la reversión de las principales medidas de corte neoliberal implementadas en los años ochenta y noventa, en particular las privatizaciones, legislaciones laborales y modelos de seguridad social. En respuesta, se fortaleció el Estado y su papel en la economía nacional, se nacionalizaron varias industrias consideradas estratégicas, se impulsó el mercado interno, se fortalecieron las relaciones internacionales de tipo multilateral y no solamente con Estados Unidos, se frenaron los tratados de libre comercio; en materia política se fortaleció el liderazgo de los caudillos y el presidencialismo.

La crisis de los pactos de élites y del modelo económico generó una estructura de oportunidad política que trajo consigo un ciclo de protestas que posibilitó el ascenso de múltiples actores y que aprovechó el actor más organizado que existía en la época, que además tuvo mayor capacidad de articulación de las agendas de movilización que se activaron en estas dos décadas: los movimientos indígenas.

El ciclo de protestas inició con las luchas antineoliberales que posibilitaron una confluencia de diversos actores, que se encontraron con un obstáculo: por más que se daban cambios de gobierno o de partidos, el modelo económico no variaba y al contrario se consolidaba

y se aumentaba el malestar social expresado en movilizaciones masivas y cada vez más concurridas. Esta insatisfacción se articuló con las protestas por la democratización, que abrieron una veta diferente: no bastaba con derrotar una medida específica del modelo económico o cambiar un gobierno, se precisaba más: el cambio político, la reforma del Estado y por esa vía las reformas a un modelo de desarrollo. Los sectores sociales que participaron de estas acciones se valieron de las demandas antineoliberales para ampliar su capacidad de articulación a un proyecto nacional e intersectorial. Si el anti-neoliberalismo permitió la confluencia en oposición, las protestas por la democratización posibilitaron la construcción de alternativas de poder.

En el caso de los movimientos indígenas estos lograron articular estas dos esferas de la movilización, la antineoliberal y la de la democratización, con su propia agenda, la de la identidad indígena. En el marco de la crisis del movimiento obrero y el reflujo de actores como los campesinos, que eran los protagonistas de décadas pasadas, los movimientos indígenas contaban con las estructuras organizativas, la capacidad de movilización y tuvieron su momento de auge en la década de los noventa al ser los grandes catalizadores del descontento social en la región.

Los movimientos indígenas lograron hacer propias las banderas de la lucha contra el neoliberalismo, impactar en las sociedades de sus países y ubicarse en el centro del conflicto sociopolítico de los últimos 20 años. Llegar a esto significó el cambio de un discurso centrado en sus reivindicaciones sectoriales a uno que lograra convocar a otros sectores sociales. Los defensores del neoliberalismo en los países andinos, en especial en Bolivia y Ecuador, encontraron en los movimientos indígenas a sus mayores opositores y, a la par, los movimientos encontraron en la lucha contra este modelo la oportunidad para convertirse en un actor nacional y multisectorial con capacidad de interpelación al bloque de las élites.

También destaca el vínculo con la lucha por la democratización que tuvieron los movimientos indígenas. Estos combinaron la acción institucional con movilización social, promoviendo de manera clara que la democracia se ejerce tanto en la lucha como en el Legislativo, tanto a través de los cargos de representación como en la política de

la calle, con creación de instancias autónomas de participación política, de espacios de democracia directa y con capacidad de interpelar al sistema político y a las élites tradicionales.

En las dos décadas analizadas la política de la calle fue determinante para abrir un nuevo ciclo político y económico en los cinco países. Los protagonistas de las protestas y los movimientos no crearon las circunstancias, pero sí las moldearon, aprovecharon las fisuras de los pactos políticos y de los límites económicos del neoliberalismo. Fueron las calles desde donde se plantearon las alternativas, bien para construir otros proyectos de sociedad, bien para defenderse de los giros autoritarios que se presentaron en algunos países. Los actores sociales de los países andinos estuvieron en sintonía con la clásica sentencia del siglo XIX: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (Karl Marx, 1852).

Referencias

- Almeida, J. (ed.). (1993). *Sismo étnico en el Ecuador*. Abya-Yala.
- Almeida, P. (2002). Los movimientos populares contra las políticas de austeridad económica en América Latina entre 1996 y 2001. *Realidad*, (86), 177-189.
- Anderson, P. (2003). Neoliberalismo: un balance provisorio. En E. Sader y P. Gentili (comps.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (pp. 11-18). CLACSO.
- Araujo, D. (2005a). Caída y fuga de Lucio Gutiérrez. El abril de los forajidos. *Diario Hoy*.
- Araujo, D. (2005b, mayo). Del pacto en Panamá a la pichicorte. *Diario Hoy*.
- Archila, M. (2005). *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990*. Cinep; Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Archila, M. (2009). Memoria e identidad en el movimiento indígena caucano. En M. Archila, J. Cote, Á Delgado, M. C. García V., P. Madariaga y O. H. Pedraza V., *Una historia inconclusa. Izquierdas políticas y sociales en Colombia* (pp. 463-534). Cinep.
- Arcos, C. (1997). A propósito de la caída de Bucaram ¿Crisis en democracia o democracia en crisis? *Iconos*, 1, 14-19.
- Atehortúa, A y Rojas, D. (2005). Venezuela antes de Chávez: auge y derrumbe del sistema de Punto Fijo. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 32, 255-274.
- Baño, R. (1985). *Lo social y lo político, un dilema clave del movimiento popular*. FLACSO.
- Barrera, A. (2001a). *Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*. Abya Yala; CLACSO.
- Barrera, A. (2001b). Nada sólo para los indios. A propósito del último levantamiento indígena. *OSAL*, 4, 85-92.

- Borón, A. (2003). *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*. CLACSO.
- Borrero, C. (ed.). (2006). *Deshacer el embrujo. Alternativas a la política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
- Borrero, C. (ed.). (2004). *El embrujo continúa. Segundo año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
- Borrero, C. (ed.) (2005). *Más allá del embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
- Caballero, J. (2009). Juntar nuestras ganas para trabajar en Minga. En C. Angarita (ed.), *¿Continuidad o desembrujo? La seguridad democrática insiste y la esperanza resiste* (pp. 212-220). Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
- Calderón, F. (coord.) (2012). *La protesta social en América Latina*. Siglo XXI.
- Camacho, D. y Menjívar, R. (1989/2005). *Los movimientos populares en América Latina*. Siglo XXI, Universidad de las Naciones Unidas.
- Ciriza, A. (2000). 21 de enero de 2000 ¿Golpe de estado o revuelta india en el Ecuador? *OSAL*, 1, 6-10.
- Conahan, C., Malloy, J. y Wolpson, L. (1997). Democracia y neoliberalismo en Perú, Ecuador y Bolivia. *Desarrollo Económico* 33, 144, 867-890.
- Cornejo, D. (1997). “*Que se vaya*”. *Crónica del bucaramato*. Edimpres.
- Coronado del Valle, J. (2002). Democracia, ciudadanía y protesta social: la experiencia de Arequipa y la Colonialidad del poder. *OSAL*, 8, 4-14.
- Cotler, J. y Grompone, R. (2000). *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*. IEP.
- Crespo, C. (2000). Continuidad y ruptura: la guerra del agua y los nuevos movimientos sociales en Bolivia. *OSAL*, 2, 21-28.
- Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC] (1989). El movimiento indígena. En G. Gallón Giraldo (comp.), *Entre movimientos y caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia* (pp. 294-306). Cinep-CEREC.
- Confederación Sindical Internacional [CSI] (2009). *Informe anual sobre las violaciones de derechos sindicales*. CSI.

- Cueva, A. (1988). La cuestión democrática en América Latina: algunos temas y problemas. *Estudios avanzados*, 2(1), 41-77.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación [CVR] (2003). La década de los noventa. Los dos gobiernos de Alberto Fujimori. En *Comisión de la verdad y la reconciliación. Informe Final* (pp. 59-159). CVR.
- Dagnino, E., Olvera, A. J. y Panfichi, A. (coords.). (2010). *La disputa por la construcción democrática en América Latina*. FCE; CIESAS; Universidad Veracruzana.
- Dávalos, P. (2000). Ecuador: las transformaciones políticas del movimiento indígena ecuatoriano. *OSAL*, 1, 25-29.
- De la Torre, C. (2010). Movimientos sociales y procesos constituyentes en Ecuador. En M. Tanaka y E. Jácome (eds.), *Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina* (pp. 245-276). IEP; IDRC-CRDI; INVERSP.
- De la Torre, C. (2008). Protesta y democracia en Ecuador: La caída de Lucio Gutiérrez. En M. López Maya, N. Iñigo y P. Calveiro (comps.), *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (pp. 197-227). CLACSO.
- Defensoría del Pueblo del Perú [DPP] (2010a). Actuaciones defensoriales en el marco del conflicto de Bagua. Informe público. Defensoría del Pueblo del Perú.
- Escárzaga, F y Gutiérrez, R. (coords.). (2006). *Ganamos pero perdimos. Elementos para un balance del movimiento indígena en el Ecuador*. Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos.
- Espinosa, M. (2004). Movimientos sociales en La María-Piendamó, territorio de convivencia, diálogo y negociación. En J. Rappaport (coord.), *Retornando la mirada: una investigación colaborativa interétnica sobre el Cauca en la entrada del milenio* (pp. 129-152). Universidad del Cauca.
- Ferro, J. G. (2008). ¿Será que tienen la clave? La política de la diferencia y la política hacia la igualdad en el movimiento indígena Nasa (Páez) de Colombia. En A. E. Ceceña (coord.), *De los saberes de la emancipación y de la dominación* (pp. 193-215). CLACSO.
- Guido Béjar, G. y Fernández Reyes, O. (1990). El juicio al sujeto: un análisis de los movimientos sociales en América Latina. En R. Guido Béjar, O. Fernández Reyes y M. L. Torregrosa (coords.). *El Juicio al sujeto. Un análisis global de los movimientos sociales* (pp. 119-170). FLACSO; Porrúa.

- Gamba Trimiño, A. (2013). Democracias restringidas y neoliberalismo en la región andina (1985-2010). *Cuadernos Americanos*, 3(145), 175-194.
- Gamba Trimiño, A. (2022). Enfoques latinoamericanos en el estudio de los Movimientos Sociales. *Campos en Ciencias Sociales*, 10(1). <https://doi.org/10.15332/25006681.7663>
- García Linera, Á. (2001). La estructura de los movimientos sociales en Bolivia. *OSAL*, 2, 177-188.
- García Linera, Á. (2009). *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. Siglo del Hombre Editores; CLACSO.
- García Linera, Á. (2010). *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. AGRUCO; Plural editorial; NCCR North South.
- Gonzáles, E. (2007). *Economía política de la era neoliberal peruana 1990-2006*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- González, C. (2010). Naturaleza política y acciones colectivas de los movimientos sociales. Un emblemático caso de movilización indígena. *Universitas Humanística*, 70, 79-100.
- González, C. (2006). *Resistencia indígena. Alternativa en medio del conflicto colombiano*. Pontificia Universidad Javeriana.
- González, J. (2007). *Bolivia. La construcción de un país indígena*. Icaria Antrazyt.
- Granados, D. (2008). Movilización y dignidad: minga de resistencia social y comunitaria. *Etnias y Política*, 9, 8-11.
- Gros, C. (1993). Derechos indígenas y nueva constitución en Colombia. *Análisis Político*, 19, 8-24.
- Guatemal, M. (2006). La situación del movimiento indígena en Ecuador. En F. Escárzaga y R. Gutiérrez (eds.), *Ganamos, pero perdimos. Elementos para un balance del movimiento indígena en el Ecuador* (pp. 8-24). Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos.
- Guerrero, A. (1995). El levantamiento nacional de 1994; discurso y representación. *Memoria*, 5, 123-151.
- Guerrero, F. y Ospina, P. (2003). *El poder de la comunidad: ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos*. CLACSO.

- Gutiérrez Aguilar, R. (2009). *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia*. Bajo Tierra Ediciones; Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la BUAP.
- Hartlyn, J. (1993). La Política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores; Ediciones Uniandes; CEI.
- Hidalgo Flor, F. (2005). Los movimientos indígenas y la lucha por la hegemonía: el caso del Ecuador. En P. Dávalos (comp.), *Pueblos indígenas, estado y democracia* (pp. 341-347). CLACSO.
- Lander, L. E. (1994). *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia: ensayos sobre Venezuela y América Latina*. FACES, Universidad Central de Venezuela.
- Larrea, A. (2006). Movimiento indígena, lucha contra el TLC y racismo en el Ecuador. OSAL, 75, 75-84.
- Laurent, V. (2010). Con bastones de mando o en el tarjetón. Movilizaciones políticas indígenas en Colombia. *Colombia Internacional*, 71, 35-61.
- Leal Buitrago, F. (1995a). Estabilidad Macroeconómica e institucional y violencia crónica. En F. Leal Buitrago (comp.), *En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa* (pp. 21-62). Tercer Mundo Editores; IEPRI.
- Leal Buitrago, F. (comp.) (1995b). *En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa*. Tercer Mundo Editores; IEPRI.
- León, N. (2009). *Ecuador: La cara oculta de la crisis. Ideología, identidades políticas y protestas en el fin de siglo*. CLACSO.
- Leyton, C. (2002). Arequipa: de la privatización a la recuperación de la dignidad. OSAL, 8, 15-19.
- López Maya, M. (1998). *Venezuela después del caracazo. Formas de la protesta en un contexto desinstitucionalizado*. Kellogg Institute.
- López Maya, M. (ed.). (1999a). *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*. Nueva Sociedad.
- López Maya, M. (1999b). La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993(en el umbral del neoliberalismo). En *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste* (pp. 211-238). Nueva Sociedad.
- López Maya, M. (2002). *Protesta y cultura en Venezuela: los marcos de acción colectiva en 1999*. CLACSO.

- López Maya, M. (2004). Insurrecciones de 2002 en Venezuela: causas e implicaciones. En J. Seoane (comp.), *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (pp. 23-40). CLACSO.
- López Maya, M. (2006). Venezuela 2001-2004: Actores y estrategias en la lucha hegemónica. En G. Caetano (comp.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina* (pp. 23-48). CLACSO.
- López Maya, M. (2008). Notas sobre lo conceptual, metodológico y las fuentes en el estudio de la protesta popular venezolana reciente. En M. López Maya, N. Iñigo y P. Calveiro (comps.), *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (pp. 95-105). CLACSO.
- Mamani, P. (2003). El rugido de la multitud: levantamiento de la ciudad de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada. *OSAL*, 12, 15-26.
- Mamani, P. (2011). Memoria y geoestrategia social. Apuntes para pensar en otros territorios epistemológicos. En G. Makarán (coord.), *Perfil de Bolivia (1940-2009)* (pp. 165-194). UNAM; CIALC.
- Meléndez, C. y León, C. (2010). Perú 2009. Los legados del autoritarismo. *Revista de Ciencia Política*, 30(2), 451-447.
- McAdam, D. (1996). Orígenes terminológicos, problemas actuales, futuras líneas de investigación. En *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (pp. 49-70). Ediciones Istmo, S. A.
- Montúfar, C. (1997). Plan de Bucaram habría agudizado crisis. Contradicciones de la convertibilidad. *Iconos*, 1, 20-32.
- Moreano, A. (2006). Ecuador en la encrucijada. *OSAL*, 19, 65-74.
- Múnera, L. (1998). *Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988*. IEPRI; Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales UN; CEREC.
- Munive, M. (Ed.). (2010, 25 de julio). 10 años después. La Marcha de los Cuatro Suyos. Una gesta cívica y democrática que marcó el punto de quiebre de dictadura fujimorista. *La República* suplemento.
- Observatorio Social de América Latina [OSAL] (2009). Comité de seguimiento del conflicto social y la coyuntura latinoamericana de Perú. Cronología del conflicto social Perú-junio de 2009. Documento de trabajo n.º 490. Informe de Coyuntura. CLACSO.
- Ospina, P. (2000). La vuelta a un día en ochenta mundos. *OSAL*, 1, 30-34.
- Pachano, S. (1997). La caída de Bucaram no debe sorprender. Democracia a la medida. *Iconos*, 1, 7-13.

- Paredes Hernández, N. (2003). *El embrujo autoritario. Primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
- Poople, D. y Renique, G. (2001). Movimiento popular, transición democrática y la caída de Fujimori. *Memoria*, 147, 1-18.
- Prada Alcoreza, R. (2003). Perfiles del movimiento social contemporáneo. El conflicto social y político en Bolivia. Las Jornadas de septiembre-octubre de 2003. *OSAL*, (12), 35-46.
- Ramírez, F. (2000). El 21 de enero de 2000. *OSAL*, 1, 17-20.
- Ramírez, F. (2010). Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). *Nueva Sociedad*, 227, 83-101.
- Ramírez, F. (2011). Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010). En J. Rebón y M. Modonesi (comps.), *Una década en movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI* (pp. 69-106). CLACSO; Prometeo Libros.
- Ribadeneira, A. (1997). El 5 de febrero de 1997. Que se Vaya. En D. Cornejo (ed.), *Que se vaya. Crónica del bucaramato*. Diario Hoy.
- Sader, E. (2008). *Posneoliberalismo en América Latina*. CLACSO.
- Sader, E. (2009). *El nuevo topo, los caminos de la izquierda latinoamericana*. Siglo XXI Argentina.
- Sader, E. y Gentili, P. (eds.) (2012). Movimientos estudiantiles (Dossier). *OSAL*, 31, 21-139.
- Sarmiento Anzola, L. (1995). Reformas y desarrollo social en los noventa. En F. Leal Buitrago (comp.), *En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa* (pp. 303-331). Tercer Mundo Editores, IEPRI.
- Seoane, J. y Taddei, E. y Algranati, C. (2006). Las nuevas configuraciones de los movimientos populares. En A. Borón y G. Lechini (eds.), *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina* (pp. 227-250). CLACSO.
- Schumpeter, J. A. (1996). *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. Vol. II. Ediciones Folio (original publicado en 1942).
- Solón, P. (2003). Radiografía de un febrero. *OSAL*, 10, 15-27.
- Tapia, L. (2000). Bolivia: la crisis política de abril. *OSAL*, 2, 3-28.

- Tarrow, S. (1997). *El Poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza Editorial.
- Tilly, C. (2007). *Contienda política y democracia en Europa, 1650-2000* (J. Quesada, trad.). Hacer (original publicado en 2004).
- Toche, E. (2011). *La compleja y difícil ruta de Humala*. FLACSO Brasil.
- Torrico, M. (2006). ¿Qué ocurrió realmente en Bolivia? *Perfiles Latinoamericanos*, 28, 231-261.
- Vega Cantor, R. (2002). *Gente muy rebelde 2. Indígenas, campesinos y protestas sociales*. Ediciones Pensamiento Crítico.
- Villegas, C. (2003). Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos. *OSAL*, 12, 27-34.

Bibliografía consultada

- Archila, M., Delgado, A. y Prada, E. (2002). *25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000*. Cinep.
- Archila, M. (2010). Protestas, movimientos sociales y democracia en Colombia (1975-2007). En M. López Maya, C. Figueroa y B. Raijland (eds.), *Temas y procesos de la historia reciente de América Latina* (pp. 119-145). CLACSO; Arcis Ediciones.
- Barrera, A. (2000). Ecuador, o cuando la crisis se hace cotidiana. *OSAL*, 1, 11-16.
- Bejarano, A. y Levy Pinto, D. (2010). La región andina y el contenido hemisférico. O cómo construir región en tiempos turbulentos. En M. Jácome y F. Tanaka (eds.), *Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina* (pp. 389-436). IEP.
- CAAP. (2000). Ecuador, enero 21: de la movilización indígena al golpe militar. *OSAL*, 1, 22-24.
- Calla Ortega, R. (2000). Los sindicalismos bolivianos contemporáneos: crisis y secundarización de un movimiento social desarticulado. En J. Massal y M. Bonilla (eds.), *Los movimientos sociales en las democracias andinas* (pp. 215-228). FLACSO Ecuador; IFEA Perú.
- Collins, J. (2000). Una transición desde las élites hacia una democracia participativa: apuntes sobre el papel emergente de los movimientos sociales en el Ecuador. En J. Bonilla y M. Massal (eds.), *Los Movimientos sociales en las democracias andinas* (pp. 55-72). FLACSO Ecuador; IFEA Perú.

- Combellas, R. (2010). La Venezuela de la V República: la reforma política y sus implicaciones institucionales. En Tanaka, M. (ed.). *Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina* (pp. 149-174). IEP.
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE] (2010, 20 de mayo). Qué es la CONAIE. <http://www.conaie.org/sobre-nosotros/que-es-la-conaie>
- Córdova, E. (2010). Movimientos sociales en Bolivia. Acción colectiva y democracia en tiempos de cambio (1990-2009). En M. Tanaka y F. Jácome (eds.). *Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina* (pp. 175-212). IEP; IDRC-CRDI; INVESP.
- Dávalos, P. (2007). La batalla de la globalización: resistencia indígena al Tratado de Libre Comercio en Ecuador. *Revista Em Pauta*, 19, 89-106.
- Defensoría del Pueblo del Perú [DPP] (2010). Informe de adjuntía n.º 006-2009-dp/adhpd. Actuaciones humanitarias realizadas por la Defensoría del Pueblo con ocasión de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009, en las provincias de Utcubamba y Bagua, región Amazonas, en el contexto del paro. Defensoría del Pueblo del Perú.
- Defensoría del Pueblo del Perú [DPP]. (2012). Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad.
- Díez Hurtado, A. (2001). Organizaciones e integración en el campo peruano después de las políticas neoliberales. En N. Giarracca (comp.), *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (pp. 191-219). CLACSO.
- Escárzaga, F. (2009). Venciendo el miedo. Retos de movimientos sociales en el contexto de la recuperación democrática en Perú. En M. Favela y D. Guillén (coords.), *América Latina. Los derechos y las prácticas ciudadanas a la luz de los movimientos populares* (pp. 155-189). CLACSO.
- García, F. (2000). Presente y perspectiva del movimiento indígena ecuatoriano. En M. Bonilla y J. Massal (eds.), *Los movimientos sociales en las democracias andinas* (pp. 147-155). FLACSO; IFEA.
- Garretón, M. (1996, abril). *Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico*. Archivo Chile.
- Gómez, L. (2010). Venezuela: democracia en crisis. En M. Cameron (ed.), *Democracia en la región andina: diversidad y desafíos* (pp. 31-100). IEP.
- Jácome, F. (2010). Movimientos sociales, democracia y reformas en la región andina. En M. Tanaka, y F. Jácome (eds.), *Desafíos de la gobernabilidad*

- democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina* (pp. 365-388). IEP; IEP; IDRC-CRDI; INVESP.
- Kruse, T. (2005). La guerra del agua en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas. En E. De La Garza Toledo (comp.), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina* (pp. 121-161). CLACSO.
- Lair, E. (2000). Acción colectiva e identidad entre los campesinos en un contexto de violencia: las rondas campesinas del norte de Perú y el Movimiento Armado Quintín Lame en Colombia. En J. Massal y M. Bonilla (eds.), *Los movimientos sociales en las democracias andinas* (pp. 75-102). FLACSO Ecuador; IFEA Perú.
- Laserna, R. y Villarroel, M. (2008). *38 años de conflictos sociales en Bolivia (enero de 1970-enero de 2008-descripción general y por periodos gubernamentales)*. CERES; COSUDE; Instituto para la Democracia.
- Levitsky, S. (2004). Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo. *Estudios Políticos*, 24, 159-176.
- Levitsky, S. y Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism. Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- López Maya, M. y Lander, L. E. (2008). Venezuela: protesta popular y lucha hegemónica reciente. En M. López Maya, N. Iñigo y P. Calveiro (comps.), *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes en América Latina* (pp. 151-172). CLACSO.
- López Maya, M. y Lander, L. E. (2010). Acciones colectivas beligerantes y cívicas y su aporte al proceso democrático venezolano actual. En M. López Maya, C. Figueroa y B. Raijland (eds.), *Temas y procesos de la historia reciente de América Latina* (pp. 195-220). CLACSO; Arcis Ediciones.
- Macas, L. (1991). El levantamiento indígena visto por sus protagonistas. En D. Cornejo (ed.), *Indios, una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990*. Abya Yala; ILDIS.
- Massal, J. y Bonilla, M. (eds.) (2000). *Los movimientos sociales en las democracias andinas*. FLACSO Ecuador; IFEA.
- Mayorga, F. (2010). Bolivia: el azaroso cambio de la reforma política. En, M. Tanaka y F. Jácome (eds.), *Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina* (pp. 15-47). IEP.
- Mayorga, F. (2011). Movimientos sociales y participación política en Bolivia. En I. Cheresky (comp.), *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina* (pp. 19-41). CLACSO; Prometeo Libros.

- Mokrani, D. (2009). Reflexiones sobre la democracia y el significado de un gobierno de los movimientos sociales en Bolivia. En M. Favela y D. Guillén (coords.), *Los derechos y las prácticas ciudadanas a la luz de los movimientos populares* (pp. 191-213). CLACSO.
- Orellana, L. (2004). El proceso insurreccional de abril: estructuras materiales y superestructuras organizativas de los campesinos regantes. En N. Giarracca y L. Bettina (comps.), *Ruralidades latinoamericanas. Identidades y luchas sociales* (pp. 477-550). CLACSO.
- Ospina, P. (2005). El abril que se llevó al coronel que no murió en el intento. *Ecuador Debate*, 7-20.
- Ponce, M. A. (2011). Lucha Hegemónica, democracia y autoritarismo en el socialismo del siglo XXI. En J. Rebón y M. Modonesi (comps.), *Una década de movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI*, (pp. 183-202). CLACSO; Prometeo Libros.
- Prada Alcoreza, R. (2008). Genealogía de la multitud. Seis años de luchas sociales en Bolivia. En M. López Maya, N. Iñigo y P. Calveiro (comps.), *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (pp. 173-196). CLACSO.
- PROVEA (2012). Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos.
- Ramírez, F. (2001). Las paradojas de la cuestión indígena en el Ecuador. Etiquetamiento y control político. *Nueva Sociedad*, 176, 17-23.
- Ramírez, F. (2005). Insurrección, legitimidad y política radical. *Iconos*, 23, 83-92.
- Remy S, M-I. (2010). El asedio desde los márgenes: entre la multiplicidad de conflictos locales y la lenta formación de nuevos movimientos sociales en Perú. En M. Tanaka y F. Jácome (eds.), *Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina* (pp. 277-312). IEP; IDRC-CRDI; INVESP.
- Rosa Quiñones, I. (2010). *Movimientos indígenas contemporáneos en Ecuador y México*. CIALC; EON.
- Salamanca, L. (1999). Protesta venezolana en el segundo gobierno de Rafael Caldera 1994-1997. En M. López Maya (ed.), *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste* (pp. 239-264). Nueva Sociedad.

- Simbaña, F. (2005). Plurinacionalidad y derechos colectivos. El caso ecuatoriano. En P. Dávalos (comp.), *Pueblos indígenas, estado y democracia* (pp. 197-215). CLACSO.
- Stefanoni, P. (2008). El nacionalismo indígena como identidad política: la emergencia del MAS-IPSP. En B. Levy y N. Gianatelli (comps.), *La política en movimiento. Identidades y experiencias de organización en América Latina* (pp. 311-378). CLACSO.
- Toledo, V. (2005). Políticas Indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004. ¿Las fronteras indígenas de la globalización? En P. Dávalos (coord.), *Pueblos indígenas, Estado y Democracia* (pp. 67-102). CLACSO.
- Zibechi, R. (2008). Ecos del subsuelo: resistencia y política desde el sótano. En A. E. Ceceña (coord.), *De los saberes de la emancipación y de la dominación* (pp. 71-99). CLACSO.

Sobre el autor

Alexander Gamba Trimiño es colombiano, sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (México).

Es decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá desde el año 2022, fue presidente de la Asociación Colombiana de Sociología (2019-2021) y miembro del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología (2019-2022).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5291-1821>

Correo electrónico: germangamba@usta.edu.co

Índice analítico

A

acción colectiva 20-23, 43, 77,
79, 84, 85, 87, 98
acciones colectivas 20, 21, 23,
24, 43, 63, 96
acuerdo(s) 28-31, 34, 37, 38, 43,
49, 51, 73, 93, 97, 101
Alarcón, F. 40, 64
alianza(s) 17, 30, 38, 41, 66, 71,
99
Arequipazo 49-51, 55
Arteaga, R. 64
articulación 17, 22, 31, 56, 80,
89, 91, 96-99, 102
autoridades 22-24, 49, 50, 74, 81,
87, 88, 94
autoritarismo 17, 28, 35, 52, 62,
63, 67, 71, 72, 75

B

Baguazo 54, 55
Banzer, H. 48
Bogotá 57, 73, 75, 97
Bolivia 29-31, 44, 47-49, 51, 52,
58, 59, 84-90, 101-103
Borja, R. 80

Bucaram, A. 20, 40, 41, 64, 71,
72, 81, 82

C

Caldera, R. 32,
calle(s) 16, 19, 20, 30, 32, 45, 47,
50-52, 55, 57, 58, 68-70, 72,
76, 101, 103, 104
campesino(s) 21, 46, 48, 49, 51-
53, 73, 82-88, 92, 98, 99, 103
Caracazo 19, 32, 43-45
Carmona, P. 70
Chávez, H. 19, 31, 32, 69, 70, 102
ciudad 19, 31, 36, 45, 47, 48, 50-
52, 57, 65, 68, 71, 72, 74, 97
ciudadanía 28, 30, 32, 45, 52, 62,
64, 68, 73, 75, 85, 87
clase(s) 17, 21, 22, 31, 32, 41, 52,
64, 70-72, 75-78, 86, 92, 99
coalición 37, 39, 52, 56, 57, 64,
81
coca 84, 86, 88, 89
Cochabamba 47, 48, 52, 85-88
Colombia 20, 25, 27, 28, 35, 36,
38, 42, 44, 55-59, 73, 75, 90-
95, 97, 98, 101, 102

comunidades 73, 74, 77, 82, 93-97, 99

Confederación

de los Pueblos y

Nacionalidades Kichua del Ecuador 83

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (conae) 46, 80

Sindical Única de

Trabajadores Campesinos de Bolivia 86, 87

conflicto(s) 21, 22, 33, 36, 46, 47, 48, 53-57, 64, 65, 70, 82, 87, 95, 96, 103

confrontación, repertorio(s) de 45, 46, 53, 57, 58, 66, 72

convocatoria(s) 47, 64, 68, 70, 72, 75, 77, 82, 84

Coordinadora

de Movimientos Sociales 64, 80, 82

en defensa del agua y de la vida 48, 49, 85, 87

Correa, R. 39, 41, 53, 82, 102

crisis 20, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36-38, 40-42, 52, 53, 70, 81, 85, 94, 98, 101-103

D

demandas 21, 24, 43, 44, 48, 53, 56, 59, 63, 65, 69, 75, 76, 82, 83, 85, 97, 99, 103

democracia(s) 19, 20, 24, 27-30, 35, 42, 51, 61, 62, 66, 67, 83, 90, 101-103

liberal 15, 27, 62

democratización 24, 25, 61-63, 75, 79, 83, 102, 103

derecha 20, 33, 36, 38, 39, 42

derechos 28, 36-38, 40, 41, 62, 63, 77-79, 82, 91, 93, 95, 96, 102

diálogo 47, 48, 55, 96

dictadura(s) 28, 31, 34, 35, 62, 67, 102

disputa 21, 24, 30, 32, 41, 47-49, 53, 70, 81, 90

E

Ecuador 19, 20, 25, 27, 28, 39-41, 44, 46, 53, 58, 59, 63-65, 71, 75, 79-84, 98, 101-103

elecciones 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 40, 48, 53, 62, 63, 67, 68, 76

élite(s) 20, 21, 23, 27, 29, 30, 38, 40-42, 63, 66, 69, 78, 88, 90, 102, 103

Estado(s) 20, 27-30, 32, 37, 40-42, 44, 48, 54, 62, 63, 70, 75, 78, 79, 81, 84

Estados Unidos 25, 36, 38, 41, 53, 54, 73, 81, 82, 89, 97, 102

estudiantes 45, 56, 57, 64, 73

etnia(s) 78, 99

etnicidad 77, 78, 92, 99

F

Fujimori, A. 19, 33-35, 49, 50, 67, 68, 102

G

García, A. 34, 54
 Gaviria, C. 36, 37
 Gobernabilidad 29, 31, 34, 37, 68
 Guerra
 del agua 30, 47, 49, 87,
 del gas 30, 51, 89
 Gutiérrez, L. 40, 41, 65, 71, 81

H

Humala, O. 34, 35

I

identidad 19, 25, 77, 79, 80, 91, 92, 94, 98, 99, 103
 indígena(s) 19, 21, 24, 25, 30, 35, 39-41, 44, 46, 47, 49, 51-55, 58, 65, 66, 73-75, 77-86, 88-99, 102-103
 izquierda 20, 30, 33, 36, 39, 59, 64, 68, 71, 82, 83, 88, 89, 92, 94

L

Lame, M. Q. 37, 91, 93
 La Paz 51, 52, 86
 levantamiento 19, 32, 46, 47, 53, 65, 66, 80, 82, 89
 ley
 30 de educación superior 55, 56
 Agraria 46
 de hidrocarburos 52
 leyes 37, 54, 55, 61, 69, 73, 94
 Lima 50, 68

lucha(s) 21, 33, 34, 44, 52, 62, 63, 66, 67, 73, 75-79, 81, 83, 84, 86, 88-95, 97-99, 101-103

M

Mahuad, J. 40, 65, 66, 81
 manifestantes 50, 55, 67, 68, 74, 96
 marcha(s) 32, 50, 52, 55, 57, 58, 69, 70, 76
 de los cuatro suyos 19, 34, 67, 68, 75
 Mesa Amplia Nacional
 Estudiantil (Mane) 55-58
 Mesa, C. 51, 52
 militares 27, 28, 32, 34, 48, 51, 53, 65, 66, 70, 78, 82, 102
 Minga 73-75, 91, 95-97
 Morales, E. 30, 88, 89, 102
 movilización 19, 46, 47-49, 50, 53, 55-59, 63-77, 80, 82, 85, 88, 89, 95, 97, 99, 102, 103
 movilizaciones 24, 30, 34, 38, 39, 40, 43, 44-49, 51-55, 58-59, 65, 67-75, 78-81, 85, 87-92, 94, 96, 101, 102
 movimiento(s) 19-25, 29-31, 35-37, 41, 49, 50, 53, 55-59, 62, 63, 66, 72, 74, 75
 indígena(s) 44, 77, 79, 84, 90, 102, 103
 popular(es) 22-25, 82
 Movimiento al Socialismo (MAS) 30, 89
 Movimiento Armado Quintín
 Lame (MAQLM) 37, 93

N

negociación 46-48, 53, 80, 96
neoliberalismo 27-31, 33, 40, 41,
44-45, 59, 79, 81-86, 103, 104
Noboa, G. 40, 65

O

oposición 21-23, 30-32, 37, 38,
41, 43, 44, 62, 63, 69-71, 73,
74, 76, 78, 81, 88, 91, 94, 103
organización 29, 72, 77, 79, 81-
83, 87, 88, 91, 92, 97, 98
organizaciones 23, 25, 30, 31, 36-
38, 45-47, 49, 54, 56-58, 63,
64, 67, 71, 73, 75, 80-83, 85,
87-91, 93, 96-98

P

Pacto(s) 20, 24, 27-29, 37, 43, 88,
101-103
de alternancia 35
de Punto Fijo 31, 32, 101
Palacio, A. 41
Paniagua, J. L. 34
Paro 52, 54, 57, 64, 67, 69-71
partidos 20, 29-31, 33, 35-38,
40-42
Pastrana, A. 38
paz 35, 37, 95, 96
Perú 17, 19, 20, 27, 28, 33, 42,
49, 54, 58, 59, 68, 75, 101, 102
poder 23, 27-30, 32, 35, 37, 38,
41, 47, 49, 50, 62, 65-69, 71,
75, 79, 81, 88, 89, 95, 103

protesta(s) 19-25, 32, 40, 43-54,
57, 58, 61-69, 71, 75, 77, 79,
103
pueblo(s) 22, 40, 50, 53-55, 65,
73, 75, 77, 78, 82, 83, 91, 93,
97, 98

Q

Quispe, F. 88, 90
Quito 64-66, 71, 72, 80

R

Rebelión de los forajidos 41, 71,
72, 75
reforma(s) 27-30, 37, 40, 46, 47,
55-57, 63, 65, 69, 82, 86, 90,
94, 103
agraria 46, 69, 83, 90, 92
régimen 16, 21, 31, 34, 37, 49,
51, 62, 67, 68, 102
reivindicación 19, 58, 74, 79, 81,
83, 88, 89, 99
resistencia(s) 44, 73, 80, 84, 95
revolución 28
Ciudadana 39
democrática 41
Rojas Pinilla, G. 35

S

Samper, E. 37
Sánchez de Lozada, G. 30, 51, 52
Santos, J. M. 39, 55
sectores 22, 31-34, 36, 37, 39-41,
44-47, 49, 51-53, 56-59, 64,

65, 68-71, 75-77, 80, 82, 83,
86, 90, 92, 94-99, 103
Solórzano, C. 65

T

territorio(s) 36, 53, 54, 78, 83,
85, 87-90, 93-97, 99
tierras 46, 54, 55, 79, 80, 89,
91-94
Toledo, A. 34, 49, 50, 68
trabajadores 21, 38
tratado(s) 52, 54
de libre comercio 41, 43, 44,
53, 54, 73, 95, 97, 102

U

universidades 37, 55-57
Uribe Vélez, Á. 38, 39, 73, 74,
102

V

Vargas Llosa, M. 33
Vargas, A. 65
Venezuela 19, 20, 27, 28, 31, 32,
41, 44, 45, 58, 59, 70, 76, 101,
102
Batalla de 69
violencia 21, 33, 36-38, 54, 97



Esta obra se editó en Ediciones USTA.
Tipografía de la familia Sabon.
2023

Agendas y debates

En los países andinos entre 1989 y 2011 ocurrió un ciclo de protestas de movimientos indígenas, marchas por la democracia y contra el modelo neoliberal. Esto ocurrió en el marco de una crisis de los pactos de las élites tradicionales de cinco países (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela), lo que permitió que emergieran nuevos actores sociales que se disputaron la conducción política de la sociedad desde las calles.

En estas dos décadas el Estado perdió su capacidad de mediador social, los partidos políticos no sirvieron como instrumento para canalizar este descontento y la política de la calle se convirtió en el escenario prioritario para deliberar, incidir e intentar transformar el modelo económico y el político.

El libro consta de cuatro capítulos: el primero aborda el entorno sociopolítico de las movilizaciones, en el segundo se exponen las protestas que enfrentaron el modelo neoliberal, en el tercero las que lucharon por la democratización y el cuarto concentra la mirada en los movimientos indígenas.



UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS
FACULTAD DE SOCIOLOGÍA